

ÍNDICE

El Consejo Escolar del Estado pide a Gobierno y CCAA que reduzcan el horario lectivo a los profesores. EUROPA PRESS	Pág 2
La escuela resiste pese al aumento de las aulas confinadas: un 126% más en un mes. EL PAÍS	Pág 3
La EBAU no tendrá «cambios sustanciales» respecto a la del curso pasado y volverá a sus fechas habituales. ABC	Pág 4
Profesor de instituto. EL PAÍS	Pág 5
La CIUG retoca los exámenes de selectividad. LA VOZ DE GALICIA	Pág 6
La tasa de reposición sube al 110% para frenar el envejecimiento en las aulas: 11 profesores nuevos por cada 10 que se jubilen. EL MUNDO	Pág 7
El "engaño" de la enseñanza semipresencial en parte de la Secundaria y el Bachillerato no convence a nadie. ELDIARIO.es	Pág 8
La «fresa del postre» para ahogar a la concertada: Los Presupuestos la dejan afuera de la creación de plazas. ABC	Pág 10
Colectas para paliar el frío en las aulas de Madrid. EL PAÍS	Pág 11
Padres y estudiantes celebran el incremento en becas pero discrepan en el objetivo de esas ayudas. EUROPA PRESS	Pág 13
Los datos personales de 3,6M de alumnos y padres de Madrid, expuestos en la red. EL CONFIDENCIAL	Pág 13
Temor a que las aulas sucumban a la segunda ola tras dos meses de aprobado raspado en el examen del covid. INFOLIBRE	Pág 15
El Sindicato de Estudiantes pide suspender las clases presenciales y un plan de rescate a la educación pública. EUROPA PRESS	Pág 16
Por qué escribir a mano hará que tu hijo sea más inteligente. ABC	Pág 17
La Generalitat ve "muy probable" que los alumnos deban ir a clase abrigados. EL PERIÓDICO de Catalunya	Pág 17
Por qué se repite tanto en España. LA VOZ DE GALICIA	Pág 18
El Gobierno destinará 200 millones a la creación de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años. EUROPA PRESS	Pág 19
Navarra mantendrá la educación presencial incluso en escenarios más duros de confinamiento: "Los centros son lugares seguros". ELDIARIO.es	Pág 20
PSOE, Podemos y ERC pactan un cambio en la ley educativa que facilita la inmersión lingüística. EL PAÍS	Pág 20
La Delegación del Gobierno impide a la concertada concentrarse frente al Congreso contra la "ley Celaá". ABC	Pág 21
Desconcierto en las escuelas al tener que asumir ahora la gestión de las PCR. LA VANGUARDIA	Pág 22
El Gobierno corregirá las limitaciones que Wert impuso a la FP Básica y dará a sus alumnos directamente el título de la ESO. ELDIARIO.es	Pág 23
PSOE, Podemos y ERC negocian que el castellano deje de ser lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña. EL MUNDO	Pág 24
El Gobierno aprueba una inversión de 33 millones en programas de cooperación territorial educativos de FP con CCAA. EUROPA PRESS	Pág 25
La crisis acentúa las carencias de la educación en España. LA VANGUARDIA	Pág 27
La 'ley Celaá' acentúa su asfixia a la concertada: blinda aumentar las plazas pero sólo para los colegios públicos. EL MUNDO	Pág 29
Celaá niega que el castellano sea moneda de cambio para dar luz verde a los Presupuestos. ABC	Pág 29
Educación destinará 1.013 millones para 250.000 dispositivos móviles contra la brecha digital. EUROPA PRESS	Pág 30
Las reformas estructurales y el Next Generation EU. EL PAÍS	Pág 31
ERC, PSOE y Podemos pactan prohibir que la concertada separe por sexo. EL PERIÓDICO de Catalunya	Pág 32
La ley Celaá avalará la salida de las aulas del castellano pese a ser un «fraude constitucional». ABC	Pág 33
Mas de un millón de personas participarán en la Semana Europea de la Formación Profesional que será online. EUROPA PRESS	Pág 34
La ley educativa rebela a la derecha y divide al independentismo. LA VANGUARDIA	Pág 35
La enmienda para blindar la inmersión lingüística anticipa una intensa batalla política y pocos cambios en las aulas. ELDIARIO.es	Pág 36

Educación reactiva el Observatorio de la Convivencia Escolar tras 9 años de inactividad. EUROPA PRESS	Pág 38
Así deberían ser las clases de Lengua, según la ciencia. THE CONVERSATION	Pág 39
La ley Celaá priorizará la cercanía al centro y la renta para la escolarización. MAGISTERIO	Pág 41
La Consellería crea el centro de innovación digital para FP en Alicante. MAGISTERIO	Pág 42
El 20% de los jóvenes tuvo problemas para estudiar durante el confinamiento. MAGISTERIO	Pág 43
Andreas Schleicher: "Tenemos que empezar a ser más creativos a la hora de evaluar". MAGISTERIO	Pág 44
Cuando la ventilación de las aulas no parece factible. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 45
5.700 millones será el presupuesto de Educación para 2021. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 46
Cataluña confirma que el alumnado de secundaria se auto tomará la muestra PCR con la supervisión del profesor. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 48
La Lomloe prevé dar más peso a las enseñanzas artísticas en primaria y secundaria. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 48
Invertir en educación podría aumentar un 10% el PIB de economías emergentes. ESCUELA	Pág 50
Las polémicas de la LOMLOE, punto por punto. ESCUELA	Pág 50
Las aulas ya son el cuarto principal foco de contagios. ESCUELA	Pág 52
Las consecuencias de la educación en pantalla. ESCUELA	Pág 55

europapress.es

El Consejo Escolar del Estado pide a Gobierno y CCAA que reduzcan el horario lectivo a los profesores

También insta a modificar la legislación actual para que la repetición de curso solo se contemple en casos "excepcionales"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) - El Consejo Escolar del Estado (CEE) ha aprobado este jueves una enmienda al 'Informe 2020 sobre el Estado del Sistema Educativo' para que el Ministerio y las Administraciones Educativas modifiquen la normativa actual para reducir el horario lectivo del profesorado.

Según STEs-Intersindical, promotor de la iniciativa, los datos demuestran que la dedicación horaria anual del profesorado en España es superior a la media de los países de la OCDE y de la UE. Concretamente, según los datos proporcionados por Panorama de la Educación 2018, Educación Primaria, con 880 horas netas de clase anuales, dedica un tiempo superior al de la media de la OCDE (784 horas) y se situaba por encima de la UE (762 horas).

La primera etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (llamada "inferior" en dicho Informe) con 713 horas netas de clase anuales, dedica un tiempo superior al de la media de la OCDE (703 horas) y al de la UE (668 horas). La segunda etapa de la Educación Secundaria tenía 693 horas netas de clase frente a las 657 horas de la OCDE y las 635 de media de la UE.

En consecuencia, a propuesta de STEs-Intersindical, el Consejo Escolar del Estado recomienda al Ministerio y al resto de administraciones educativas que modifiquen la normativa actual para reducir el número de horas lectivas que debe impartir el profesorado, de tal forma que no se sobrepase la media de la UE.

Asimismo, el pleno del CEE también ha aprobado una enmienda, propuesta igualmente por este sindicato, que pide impulsar que los Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros sean equiparados administrativa y económicamente, así como la estabilidad y consolidación del profesorado interino en función de la Directiva UE 1990/70, que establece que se produce abuso de temporalidad cuando un empleado público eventual es destinado a realizar tareas propias del personal jo o de carrera y cuando se utilizan nombramientos temporales para necesidades permanentes (estructurales).

También se incluirá en el Informe la petición de renovar la normativa que regula la evaluación, la repetición y el paso de curso. Para ello, se insta a modificar la legislación estatal para que la repetición solo se contemple en casos "excepcionales" y, así, equiparar a España con los países de su entorno, donde la tasa de repetición en Primaria no supera el 4%, según expone el sindicato.

Por otro lado, también a propuesta de STEs-Intersindical, el Consejo Escolar del Estado aconseja al Ministerio de Educación y FP y a las Administraciones Educativas que hagan un esfuerzo presupuestario para implantar y extender un plan de choque contra la violencia contra las mujeres en el ámbito educativo.

MEDIDAS PARA MEJORAR LA VENTILACIÓN DE LAS AULAS

Por parte del sindicato CSIF, se ha aprobado una enmienda por la cual se reclama al Ministerio y a las comunidades autónomas planes de reforma y partidas presupuestarias anuales para adecuar los centros a las normas sobre climatización, eficiencia energética y renovación del aire, "haciendo de los centros ejemplos de lucha contra el cambio climático y edificios saludables para la comunidad educativa".

Para el sindicato, es fundamental mejorar la calidad del aire en las aulas, que son espacios cerrados, y hay que adaptar las medidas a las nuevas evidencias científicas para prevenir los contagios por vía aérea.

Si bien, las tareas de mantenimiento de los centros corresponden a ayuntamientos y a comunidades autónomas. Por eso, CSIF, ante la esperada bajada de las temperaturas, se ha dirigido por escrito al Ministerio, a las consejerías del ramo, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a los ayuntamientos de todo el país para reclamar que se revisen los protocolos de ventilación en las aulas.

El sindicato reclama, además, que se adapten estos protocolos a las nuevas recomendaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ante las evidencias científicas sobre el contagio por aerosoles y el mayor riesgo de propagación del SARS-CoV-2 en espacios cerrados.

El CSIC, en una guía sobre la ventilación en las aulas para reducir el riesgo de contagio establece las recomendaciones para que la ventilación y la purificación del aire sea eficaz. Entre sus propuestas, indica que si no se puede recurrir a ninguna medida de ventilación, se debe purificar el aire con equipos provistos de filtros HEPA. En este sentido, CSIF solicita alternativas para la purificación del aire de las aulas, bien sea a través de filtros HEPA o cualquier otra medida que evite dar clases en condiciones indeseadas debido al frío.

EL PAIS

La escuela resiste pese al aumento de las aulas confinadas: un 126% más en un mes

Los grupos en cuarentena representan el 1,7% del total. Cataluña, la comunidad más afectada con un 4,4%, decide que las clases de Bachillerato y FP sean 'online'

IGNACIO ZAFRA. VALENCIA 30 OCT 2020

El sistema educativo resiste, de momento, el embate de la segunda ola mucho mejor de lo que la mayoría esperaba en verano. Pero eso no significa que el aumento de la transmisión no esté haciendo mella en los colegios. El número de aulas confinadas ha crecido en un mes un 126%, hasta alcanzar, según datos oficiales recopilados por las comunidades hasta el miércoles por la mañana, las 6.460. Cataluña, el territorio más afectado, decidió este jueves que las clases de Bachillerato y FP pasen a ser telemáticas.

Las cuarentenas generan graves problemas de conciliación laboral y preocupación en las familias por la atención educativa. "Si estás teletrabajando y has de cumplir tu horario normal, con muchas videoconferencias de las que no puedes ausentarte, la situación es un infierno", afirma el ingeniero Álvaro Fernández, que hace poco tuvo a su hija de siete años confinada en casa, después de que una monitora de una escuela pública de Valencia diera positivo. "Sobre todo tienes la sensación de que la estás dejando abandonada a su suerte a una edad a las que todavía no es autónoma para conectarse con el ordenador o hacer las tareas solas. Tampoco tengo una solución, pero creo que en los colegios deberían estar entrenando a los alumnos para estas situaciones".

Las autoridades educativas y los directores, aseguran, sin embargo, que el volumen de aulas cerradas (un 1,7% de las 380.000 que hay en España), no está impidiendo hasta ahora, en términos globales, un desarrollo razonable de la enseñanza. "Tenemos más trabajo y las cuarentenas nos exigen una mayor coordinación entre las modalidades presencial y a distancia, pero los equipos docentes se han adaptado y podemos decir que existe una cierta normalidad", afirma Ricardo Civera, presidente de la asociación de directores de centros de Infantil y Primaria de Aragón. "Estamos más tensionados y sobrecargados que otros años, pero no estamos mucho peor que a principio de curso, ni con la sensación de que las cosas vayan camino de desbordarse", añade losu Mena, presidente de la asociación de directores de instituto de Navarra.

Los expertos señalan que el avance del curso ha seguido confirmando los primeros indicios de que los centros educativos no están actuando como amplificadores de la pandemia, pero advierten de que la llegada del frío y la previsible caída de la ventilación pondrán a prueba estas conclusiones. En todo caso, los colegios e institutos no están aislados de su entorno, por lo que si el rápido aumento de contagios no cede, será difícil que no acaben imponiéndose restricciones, al menos para los alumnos de más de 15 o 16 años, como ha ya hecho Cataluña, cree el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat. "A partir de esta edad sabemos que contagian mucho más y tienen unas conductas de riesgo mayores. En cambio hemos visto que las clases de los más pequeños aunque sí reflejan la transmisión comunitaria, contribuyen relativamente poco a aumentarla", dice Bassat.

Madrid, Cataluña, Navarra y La Rioja

Solo cuatro comunidades superan el 1% de aulas confinadas: Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja. Prácticamente todas ellas son grupos burbuja (en los que los alumnos no tienen que mantener distancia física,

a condición de no mezclarse con estudiantes de otras clases), y la decisión de ponerlas en cuarentena se adopta, normalmente, de forma automática cuando se detecta un caso positivo en el aula, aunque algunas comunidades han empezado a optar por confinamientos parciales de la clase, cuyo alcance determina su servicio de salud pública. Un reciente informe del Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Cataluña ha concluido que el número de grupos en cuarentena en esta comunidad es consistente con el que cabría esperar de la evolución de la pandemia en su entorno, resume Sergio Alonso, uno de sus investigadores. En otras palabras: “Si hay infección en la comunidad, hay profesores, monitores y niños que se infectan”, señala Joan Ramon Villalbí, uno de los portavoces de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).

Esta correlación con de la dinámica general explica que en Madrid (2,3%) o Navarra (2,5%) el porcentaje de aulas confinadas sea superior al de la Comunidad Valenciana (0,8%). El caso de Cataluña, donde el porcentaje de aulas confinadas se eleva al 4,4% es especial. Se trata de la única comunidad que optó por establecer grupos burbujas en todas las etapas educativas, desde los primeros cursos hasta Bachillerato y Formación Profesional. De forma que cuando se detecta un caso, toda la clase debe cumplir cuarentena y someterse a una prueba PCR. En el resto de España, estos grupos de convivencia estable solo funcionan en Educación Infantil y Primaria y en los primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, mientras que en las demás etapas funciona un modelo de distancia interpersonal (de un metro o metro y medio), y solo son confinados aquellos alumnos considerados por los respectivos servicios sanitarios contactos estrechos de la persona que ha dado positivo.

Además de utilizar el sistema de las burbujas en los alumnos más mayores (sin distancia y con más de 30 alumnos en muchas clases), en Cataluña casi todos los alumnos de la ESO, Bachillerato y FP han estado yendo a clase a diario. En la mayor parte de las comunidades (y en todas las demás autonomías grandes) lo hacen, en cambio, en turnos o jornadas alternas. Dicha combinación ha tenido como consecuencia que en Cataluña los problemas concentren en los institutos, cuando en el resto de territorios hay muchas más cuarentenas en las escuelas. El sindicato catalán de profesores de secundaria (Aspecp-sps) calcula que los confinamientos en esta etapa representan el 65% del total. La Generalitat no confirma su estimación, pero el director general de Centros Públicos, Josep González-Cambray, admitió el lunes que los institutos se han convertido en el quebradero de cabeza de su departamento, informa Ivanna Vallespín. Y la Generalitat decretó este jueves que los alumnos de FP y Bachillerato solo irán a los centros a realizar prácticas o exámenes.

El espejismo de los muchos contagios en escuelas

El número bruto de positivos entre la población en edad escolar y el de brotes detectados en centros educativos (que representan el 13% del total de los contabilizados en España) son engañosos, asegura Sergio Alonso, del grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Cataluña, al estar condicionados por la especial vigilancia y el alto nivel de pruebas que se realizan. En la mayor parte de comunidades, si se detecta un infectado en una clase burbuja, se les hace una PCR a todos sus integrantes. Corrigiendo los datos con el llamado esfuerzo diagnóstico y el grado de positividad, el grupo de la Politécnica de Cataluña concluye que la población de cero a nueve años es, a mucha distancia, la que menos se contagia. Y que el grupo de 10 a 19 se sitúa, en términos de contagios, por detrás no solo del grupo de 20 a 29 (que encabeza las infecciones), sino también de los de 30 a 39; 40 a 49; 50 a 59, y del de aquellos que tienen 90 o más.

Los epidemiólogos Joan Ramon Villalbí y Quique Bassat apuntan a que es posible que el salto en los contagios no se dé a los 20, sino cuatro o cinco años antes, tanto por motivos de desarrollo físico como de comportamiento. Alonso cree que es posible, pero afirma que los datos disponibles no permiten hilar más fino. Villalbí duda de que reducir la asistencia a los centros de secundaria, como ha resuelto la Generalitat catalana, sea la solución. “Es asumir que el día que no vayan a clase se quedarán en casa, lo cual no está claro. Al menos en el centro hay normas y están controlados”.



La EBAU no tendrá «cambios sustanciales» respecto a la del curso pasado y volverá a sus fechas habituales

El Ministerio de Universidades tendrá una tasa de reposición del 110% en 2021, es decir, por cada diez profesores, investigadores o administrativos que se jubilen se contratarán a once

Elena Calvo 30/10/2020

La Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de este curso no tendrá «cambios sustanciales» respecto a la del anterior, salvo las fechas, pues la intención es que se celebre en las fechas habituales anteriores a la llegada del Covid-19. Así lo ha anunciado este viernes el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, en un encuentro informativo junto al ministro Manuel Castells y al subsecretario de Universidades, Luis Cerdán, para dar a conocer los detalles sobre los presupuestos del Ministerio para 2021.

«Lo que queremos desde los dos ministerios (Universidades y Educación) es garantizar la calidad de las pruebas, por lo que una de las razones fundamentales para no hacer cambios es que los profesores de los institutos y colegios tengan una seguridad de que no va a haber un cambio sustancial con respecto a los temas que ya estuvieran el año pasado», ha explicado Pingarrón, que ha insistido en que esta es una cuestión prioritaria y que en cuanto se reciba el «visto bueno» de los órganos colegiados en los ministerios se comenzará con el trámite, «previsiblemente la semana que viene».

El Ministerio de Universidades, que contará con un presupuesto total de 462 millones de euros en 2021, destinará 75 millones a la digitalización del sistema universitario español. Lo ha anunciado el ministro Manuel Castells. Sin embargo, el titular de la cartera asegura que todas las universidades españolas están preparadas ya para llevar a cabo una educación online en el caso de que sea necesario. «Hasta donde podemos saber por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y las comunidades autónomas en general todas las universidades están teniendo esa capacidad tecnológica», ha explicado Castells.

Esta capacidad digital, ha insistido el ministro, consta de tres niveles: el de las redes y sistemas informáticos, presente en todo el país «excepto en territorios determinados»; el de la formación del profesorado, donde asegura que se ha avanzado mucho y el del acceso de los estudiantes a estos medios, para que aquellos que no tengan los dispositivos necesarios para seguir una educación online puedan hacerlo. «Es un paquete fuerte de inversión en universidades o zonas conectadas a las universidades muy deficitarias», ha dicho Castells, que ha destacado la inversión en la formación digital para el profesorado y el refuerzo de las redes de conexión para que sean accesibles a todos los alumnos.

Aun así, el ministro considera que hay una «brecha digital» y que se debe corregir, aunque ha remarcado que el 90% de los hogares españoles están conectados a la red. «Hay que continuar haciendo un esfuerzo desde el sistema público para esa conexión, en una situación en la que siempre vamos a tener que estar en alerta permanente dependiendo de cuáles sean las circunstancias», ha afirmado, aunque ha insistido en que la intención es seguir apostando por la educación presencial también en el ámbito universitario.

El ministro ha anunciado un aumento en la tasa de reposición del personal de las universidades españolas, que será del 110% en 2021, es decir, por cada diez profesores, investigadores o administrativos que se jubilen, se contratará a once. Además, las comunidades autónomas tendrán la capacidad de poder transferir estas plazas de unas universidades a otras según las necesidades de cada una. Con esta medida, ha explicado el subsecretario de Universidades, Luis Cerdán, se conseguirá el rejuvenecimiento de las plantillas. «En la próxima década se jubilarán en torno al 90% de los catedráticos universitarios. No podemos prever lo que pueda pasar en futuros ejercicios, pero hay una apuesta clara por rejuvenecer el ámbito educativo», ha afirmado.

En cuanto a las becas, ha explicado el ministro, el presupuesto para 2021 es de 2.090 millones, de las cuales aproximadamente 1.250 millones serán universitarias. Ha destacado también el aumento del 10% en investigación científica, con el Programa Nacional de Formación I+D+i-Formación del Profesorado Universitario (FPU), que aumenta a 87 millones de euros, incluyendo las ayudas a la movilidad.

EL PAIS

Profesor de instituto

Al enseñarse con un profesor, los islamistas revelan la importancia que ese trabajo tiene en el orden de la vida democrática

ANTONIO MUÑOZ MOLINA. 30 OCT 2020

El terrorismo nunca es ciego. El que padecemos nosotros en el País Vasco y en muchos otros lugares de España ejerció su cirugía maléfica apuntando a cada uno de los pilares del Estado democrático: los defensores de la ley, los representantes de la soberanía popular, las voces intelectuales solitarias que se alzaban en los medios contra la resignación a la barbarie. Al terrorista su fanatismo no suele estropearle la puntería: el 16 de octubre, en Francia, un islamista le cortó medievalmente la cabeza al profesor de instituto Samuel Paty, que daba clases de Historia y Geografía, y de valores cívicos, y que en un debate con sus estudiantes sobre laicismo y libertad de expresión les había mostrado, entre otros materiales, las caricaturas de Mahoma de la revista *Charlie Hebdo*. El primitivismo mental de los fanáticos es perfectamente compatible con las tecnologías de la modernidad. Los apóstoles del 5G y de las redes sociales llevan ya décadas predicando, con un fervor que en algunos casos podía parecer ingenuo pero que a estas alturas ya solo es descarado y cínico, las múltiples bondades que esos inventos están esparciendo por el mundo, rompiendo barreras, favoreciendo la creatividad, la hermandad entre los seres humanos. Gracias a las redes sociales, o a las redes fecales, como tal vez convendría empezar a llamarlas, padres de alumnos hostiles al profesor Paty organizaron una campaña de odio contra él: en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en YouTube. El más activo fue el padre de una

estudiante que según se supo después ni siquiera estaba en la clase. En un vídeo que se hizo rápidamente viral en medios extremistas musulmanes, este padre ultrajado aseguraba que el profesor Paty había mostrado una foto de un hombre desnudo diciendo que era Mahoma.

La libertad de expresión y de crítica es un derecho fundamental en las sociedades democráticas, y ninguna ideología ni religión puede estar a salvo de ellas, explicaba cada año Samuel Paty a sus estudiantes, con ese entusiasmo vocacional que parece un don reservado a los profesores de instituto, y que tiene la virtud, si cae en terreno fértil, de espabilar para siempre a una inteligencia joven. Aprovechándose de esa misma libertad, padres de alumnos y militantes islamistas empezaron a llamarlo canalla, enfermo, blasfemo, propagandista de la pornografía. A quienes vivimos del uso libre de las palabras nos provoca un rechazo visceral cualquier intento de ponerle límites, incluso cuando se usan para mentir e insultar. Pero los enemigos del profesor Paty, además de bravatas e insultos, también difundieron por las redes sociales su foto, y la dirección del centro en el que enseñaba. Las palabras son inocuas hasta que llega el momento en que se convierten en actos. Un viernes por la tarde, el profesor Paty salió del instituto con el cansancio físico de varios días de trabajo escolar y la perspectiva tan grata del fin de semana. Se fue despidiendo por el camino de los alumnos, y al llegar a la puerta puede que no se fijara en que alguien lo señalaba con el dedo a un desconocido también muy joven pero que no tenía pinta de estudiante. La fe religiosa y el interés tampoco tienen por qué estar reñidos: al alumno o alumna que señaló a su profesor el asesino le pagó 350 euros.

Un poco después el cuerpo decapitado del profesor Paty yacía en una acera sobre un charco de sangre. Al asesino, al justiciero, solo le quedaban unos minutos de vida, pero tuvo tiempo de tomar una foto con el móvil de la cabeza del infiel y subirla a su cuenta de Twitter. Estuvo recibiendo alegres visitas y parabienes hasta que por orden del juez fue cancelada.

Samuel Paty tenía 47 años, y un hijo de cinco. Quienes lo conocieron recuerdan a un profesor entusiasta, enamorado de su trabajo, orgulloso de haberlo ejercido en barrios de trabajadores e inmigrantes, en los que la enseñanza pública cobra su máxima relevancia como instrumento de formación y de ciudadanía, como uno de los pilares de lo que en Francia se llama con reverencia y solemnidad la República. A nosotros todo lo solemne nos despierta rechazo, o burla, porque nuestra idea de la solemnidad la asociamos tristemente al autoritarismo eclesiástico y cuartelario de la dictadura, también porque nuestra sórdida tradición de sectarismos y discordias políticas nos han privado de instituciones o símbolos merecedores del respeto de la inmensa mayoría. Pero cuando se ven las imágenes del homenaje nacional al profesor Samuel Paty en el patio de La Sorbona, su foto sostenida en el escenario por un oficial de la Guardia Republicana con uniforme de gala, o cuando se leen los discursos pronunciados en la ceremonia, uno no puede no sentir cierta envidia, una profunda melancolía civil y española: hay ocasiones supremas en que la democracia ha de ser solemne, y afirmar explícitamente sus valores con sobria elocuencia, y honrar a quienes los defienden y los enseñan. Al ensañarse con un profesor de un instituto de barrio los islamistas están revelando el valor de lo que hace, la importancia que ese trabajo en apariencia tan común tiene en el orden de la vida democrática. Eligiendo La Sorbona para la ceremonia de homenaje, se está reconociendo a la enseñanza secundaria lo que muchas veces no se aprecia, el rigor de un ejercicio intelectual y de un proceso de transmisión y aprendizaje que con mucha frecuencia influye más en el porvenir de las personas que su paso por la universidad.

Yo recuerdo uno por uno a los profesores, hombres y mujeres, que tuve en mi bachillerato superior, en un instituto público. Eran mucho más jóvenes de lo que a nosotros nos parecían entonces, antifranquistas, respetuosos, como adelantados de un país que aún no existía, y que ellos empezaban a hacer posible al abrirnos los ojos. Sabían mucho, y casi todos lo explicaban muy bien, pero no solo aprendíamos de sus especialidades: también del hecho simple y novedoso para mí de compartir la clase varones y chicas, y de que fueran también voces de mujeres y no solo de hombres las que nos incitaban al conocimiento, y las que se dirigían a nosotros con un respeto exigente y cordial. Dijo Macron en su discurso en La Sorbona: “Daremos a los profesores la autoridad y el lugar que les corresponden, los formaremos, los consideraremos como se merecen, los apoyaremos, los protegeremos en todo lo que haga falta”. Palabras semejantes agradecerían escuchar los colegas españoles de Samuel Paty, dichas con algo de solemnidad y vehemencia.

La Voz de Galicia

La CIUG retoca los exámenes de selectividad

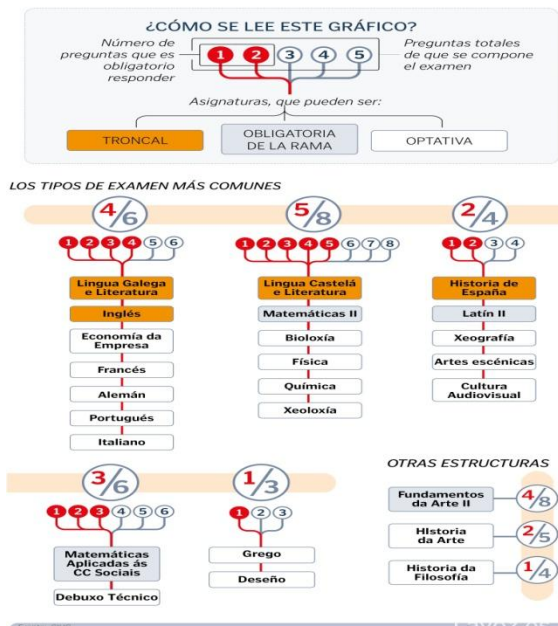
Unifica las lenguas modernas en un modelo de seis preguntas de las que hay que contestar cuatro, aunque en Lingua Castelá seguirá habiendo ocho cuestiones

SARA CARREIRA. REDACCIÓN / LA VOZ 30/10/2020

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ya está preparando la ABAU, la selectividad, del próximo junio, y siguiendo las directrices del Ministerio de Educación mantendrá el formato de la prueba del pasado curso, con una ligera revisión **en la** estructura —el número de preguntas y cuántas tienen que contestar como máximo los alumnos— de algunos exámenes.

¿Cómo serán los exámenes de ABAU?

Se mantiene la filosofía de la prueba de este año, pero unificando los modelos. Habrá un total de preguntas (variable en función de la asignatura) y un máximo que cada alumno deberá responder



El vicepresidente de la CIUG Pedro Armas explica que «en general, el funcionamiento del examen de julio, con la excepcionalidad propia del momento, ha sido excelente», pero tras una reunión de los responsables de la CIUG con los 25 directores de los grupos de trabajo (uno por asignatura) se han decidido pequeños cambios.

En la organización, la próxima selectividad será muy parecida a la del coronavirus, con muchas más sedes y vocales de lo que era habitual hasta entonces. Está por ver qué hace la Universidade de Vigo, si mantiene las sedes en pabellones e institutos o las centraliza en los campus; dependerá de la evolución de la pandemia. En cualquier caso, se repetirá la entrada escalonada y por centros educativos, y la exigencia de salir de las sedes al terminar cada examen; estas dos prácticas posiblemente hayan llegado para quedarse porque han dado un resultado magnífico.

Un examen sin A ni B

En cuanto al modelo de examen único, sin opción A y B, se mantiene. Lo exige así el ministerio, para facilitar el acceso a la universidad también a aquellos alumnos que

tengan que pasar algún tiempo en confinamiento o los que hagan semipresencialidad (la norma es estatal).

Además, este sistema ha demostrado que se puede mantener la exigencia de una formación mínima para aprobar: «El examen de selectividad del curso 2019/20 no fue más fácil que otros, ni la corrección fue menos exigente», explica Armas, que sí reconoce que tuvo notas medias más altas en parte debido a la optatividad, pero no solo por eso: «Los alumnos tuvieron un mes más para prepararse, y podían dedicar muchas horas al estudio».

En cuanto a los cambios en la estructura de los exámenes, el más importante es que tanto Economía de Empresa como «las lenguas modernas [ya sean como primera o segunda lengua extranjera] pasan a modelos de 6 preguntas de los que el alumno debe contestar 4». Solo Lingua Castelá e Literatura se mantiene como está, pero el resto se unifica. Sí afecta a Lingua Galega e Literatura, que pasa de 7 a 6 preguntas, y esta es una de las materias obligatorias para todos los alumnos (excepto los exentos, que son muy pocos). «Había lenguas, como el Francés —explica Armas— que tenía diez preguntas, y pensamos que podía generar un problema de tiempo para el alumno, que tiene que leer todas con atención antes de decidir cuál va a contestar».

Esta simplificación se traduce en que habrá ocho modelos de examen (antes eran once), y realmente más homogeneidad (18 de las 25 asignaturas se engloban en 3 modelos diferentes).

EL MUNDO

La tasa de reposición sube al 110% para frenar el envejecimiento en las aulas: 11 profesores nuevos por cada 10 que se jubilen

En la próxima década se retirarán el 90% de los catedráticos de universidad. Los campus públicos de una misma autonomía podrán ceder a otra universidad su tasa de reposición que no utilicen.

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid, 31 octubre 2020

En la próxima década se va a jubilar el **90%** de los catedráticos universitarios. En los colegios e institutos, más del **32%** supera los **50 años**, lo que significa que en ese mismo periodo se van a retirar 160.000 docentes. El envejecimiento de las plantillas, sin que durante los años de la crisis económica haya habido en paralelo un relevo generacional, es uno de los problemas que arrastra desde hace años el sistema educativo español.

El artículo 19 del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, que tiene que ser aprobado en las Cortes, atiende a una insistente reivindicación de los sindicatos: contempla una subida de la tasa de reposición al 110% de los funcionarios en algunos sectores prioritarios, como los sanitarios, los miembros de las Fuerzas Armadas, los funcionarios de prisiones, o los letrados de la Justicia. También incluye entre estos colectivos a los casi 800.000 profesores no universitarios que hay en España y los 123.000 personas que componen el personal docente e investigador de los campus.

Ese incremento se traduce -si el Gobierno recaba el suficiente respaldo parlamentario- en que por cada 10 profesores que se jubilen se contratará a otros 11 nuevos.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha explicado este viernes en un **videobriefing** que antes del Covid, "cuando el mundo aún existía", uno de los asuntos en los que todos insistían cuando comenzó a recorrer los campus es que había que elevar la tasa de reposición. No bastaba por dejarla al 100% (por cada jubilación hay una nueva plaza) porque durante los años de la crisis se ha generado un déficit de personal.

Castells ha explicado que de esas nuevas plazas se reservará un 15% para los investigadores Ramón y Cajal y que las universidades públicas, dentro de una misma autonomía, podrán ceder a otra universidad excedente de su tasa de reposición. Lo mismo podrán hacer las propias administraciones autonómicas: ceder tasa de reposición que no vayan a utilizar a sus propias universidades públicas.

Eso sí, no contempla reservar una plaza para mejorar la situación de precariedad en la que se encuentran los profesores asociados, que suponen el 30% de las plantillas. No hay solución que satisfaga a los afectados ahora, ni en el futuro Estatuto del Personal Docente e Investigador.

Los presupuestos para 2021 doblan el dinero recogido por Castells en el ejercicio anterior, pero en las becas (de 1.900 a 2.090 millones) tampoco han logrado resolver la situación de los estudiantes cuyas familias han perdido el trabajo por la pandemia de Covid. El ministro ha tratado de explicar que las ayudas de 2020 se pagarán teniendo en cuenta la renta del 2019.

Los sindicatos de profesores han valorado positivamente la subida de la tasa de reposición aunque han recordado que sigue siendo "insuficiente". "Nuestro objetivo sigue siendo la supresión de la tasa de reposición para que las universidades puedan reducir la altísima tasa de temporalidad y renovar las plantillas", ha expresado Ramón Caballero Klink, responsable de Universidades de CSIF, que ha recordado que en el ejercicio pasado ha habido un incremento del 108% si cumplían el objetivo de estabilidad presupuestaria. Este año, la subida del 110% es sin limitaciones.

"En principio la idea es buena, porque se reponen más efectivos de los que se van. Otra cuestión es el retraso que llevamos en la enseñanza con las oposiciones suspendidas. Este año se tendrían que haber celebrado las de Secundaria y nos se han podido convocar por el Covid y el año que viene tocarían las de maestro, pero ya las han aplazado a 2022", advierte Nicolás Fernández Guisado, del sindicato Anpe.

"En los últimos 25 años, se ha producido una drástica reducción del empleo público (en el caso de la docencia no universitaria, desde 2011 a 2020 hay un descenso de 51.485 personas en el número de funcionarios de carrera) y también se ha precarizado mucho el sector, con una utilización abusiva de los nombramientos temporales", señala Maribel Loranca, al frente de la Federación de Enseñanza de UGT.

"No es suficiente con una tasa del 110%. La situación de temporalidad y precariedad en el empleo público exige eliminar las limitaciones en la tasa de reposición. En educación, antes de las nuevas contrataciones estábamos por encima del 14% de temporalidad. Ahora superamos el 20%. Hay que recordar el compromiso de llegar al 8% suscrito con el Gobierno", apunta Francisco García, de la Federación de Enseñanza de CCOO.

Todo está en el aire, y también la Selectividad. El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, ha explicado que la semana pasada se reunieron con representantes del Ministerio de Educación para diseñar la convocatoria de este curso, en la que "no habrá cambios sustanciales respecto la del año anterior".

También este curso habrá más optatividad que en otras convocatorias para que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las materias si ha tenido que seguir las clases **online** en algún momento del curso.

Lo que sí que cambiará será la fecha: las pruebas de acceso a la Universidad se harán a principios de junio en vez de entrada julio.

"El año pasado nadie perdió el curso y este año tampoco", ha prometido el ministro, garantizando que todos los estudiantes van a poder hacer las prácticas de forma presencial "y no pasarán a **online** mientras no haya una catástrofe".

Ha considerado que todas las universidades están teniendo capacidad tecnológica suficiente, aunque ha reconocido que "hay bolsas posibles de precariedad tecnológica" en el acceso de los estudiantes desde sus casas y también una preparación de los docentes para dar clases telemáticas que es "desigual".



El "engaño" de la enseñanza semipresencial en parte de la Secundaria y el Bachillerato no convence a nadie

Familias y profesores denuncian que la asistencia a clase en días alternos que se ha impuesto en la mayoría de España en 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato "usurpa el derecho a la educación de los menores" y está dejando alumnos desatendidos en casa

Daniel Sánchez Caballero. 31 de octubre de 2020

Todos los días parecen viernes en la Secundaria este curso. La enseñanza semipresencial decretada por las comunidades autónomas con carácter general en toda España para 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato – había excepciones, como Catalunya, donde se garantizaba la presencialidad, pero las últimas medidas se la han llevado por delante– ha alterado la organización de los centros, duplicado el trabajo de los profesores y eliminado cualquier atisbo de orden académico para los alumnos, que van a clase un día sí y otro no. "Y piensan que, como al día siguiente no tienen que venir, es viernes. Y los viernes no se hace mucho" porque llega el fin de semana, explica Javier Igual, profesor en un instituto de Madrid. "Y luego llega el viernes real y lo que queda por delante es un puente hasta que tienen que volver", porque si han ido el viernes hasta el martes no les toca.

Y se da la paradoja, continúa este docente, de que los chicos tienen la opción de trabajar menos, pero a él le toca el doble. Confirma esta impresión Cristina Alquézar, en Teruel. Esta profesora tenía dos cuartos de la ESO a principio de curso. O eso creía. Porque los dos cuartos, cuenta, se subdividieron cada uno en dos grupos, azul y amarillo, que acuden alternativamente a clase: una semana uno va lunes, miércoles y viernes y el otro martes y jueves. La semana siguiente se cambian. Y los grupos se desfasan, unos avanzan más y otros menos. A unos les cae un festivo, a los otros no. "A la semana de empezar concluí que tengo cuatro cuartos, no tengo dos, y eso implica preparar cuatro clases semanales. Y aún no sé qué tipo de examen haré, pero tendré que preparar cuatro en vez de dos", cuenta.

Unos días después de esta conversación, Alquézar recibirá una buena noticia: la Consejería de Educación de Aragón ha aceptado la petición de su centro y otros de pasar a la presencialidad completa. Es una buena noticia, corrobora esta profesora, pero que sirve también para constatar lo arbitraria que resultó en origen la imposición de la semipresencialidad para todos sin mirar circunstancias concretas. La Consejería no ha explicado a qué se ha debido el cambio de criterio. Ella se ha librado. Para el resto, estos problemas siguen siendo muy reales.

Con carácter general, explica el profesor Mariano Martín Gordillo, que ejerce en Asturias, la enseñanza a distancia se está traduciendo en apostar "por el modelo de clase invertida o por que en el techo de cada aula se instale una cámara para que desde sus casas los alumnos ausentes sigan en directo la clase en modo telepresencial (valga el oxímoron)". Y ninguna de las dos es adecuada. "Aunque ambas formas de semipresencialidad puedan nombrarse como educación **online**, apostar por esa pseudotelepresencialidad, con medio grupo en el aula y otro medio en casa en días alternos, supone un modelo centrado en el docente y en su actividad de enseñanza en lugar de un modelo de aprendizaje centrado en los alumnos", reflexiona.

Para el alumnado, cada uno presenta sus propios problemas. El primer modelo consiste básicamente en mandar tareas a los alumnos, que se autogestionan como les apetezca bajo la atenta mirada de... nadie. En el mejor de los casos, unos padres que se puedan quedar en casa por las mañanas o una academia. En el segundo hay problemas muy terrenales. Una simple conversación por videoconferencia con la alumna Elena, desde su aula, sirvió para demostrar uno muy evidente: la acústica de las clases, grandes espacios sin apenas mobiliario, no es la ideal. Eso cuando todo va bien. Los problemas con las redes, anchos de banda insuficientes, falta de equipos, etc. se sitúan habitualmente, en un parque de centros públicos envejecido y apenas mantenido por la recurrente falta de inversión acumulada durante años (tenemos hoy en España el mismo presupuesto para Educación que hace 10 años), como la primera barrera para la enseñanza a distancia. Tampoco llegó nunca, al menos no de momento, el equipamiento informático prometido por el Ministerio de Educación.

El clamor se va extendiendo. Por toda España se suceden las denuncias para que se acabe con esta práctica: las familias de Murcia, reunidas en torno a la FAPA, han acudido a los tribunales; su homóloga madrileña ha decidido hacer lo propio ante el Defensor del Pueblo; a escala de centro los casos se multiplican por el territorio. "Vulnera el derecho universal a la educación y a la equidad, regulados en la Constitución y se está favoreciendo también la precarización porque no todas las familias tienen los medios para ayudar a sus hijos en la formación virtual", cuentan desde la FAPA murciana, que agrupa a 450 colegios de la región. Su caso es especialmente sangrante: es la única comunidad de España que ha implantado la semipresencialidad desde Infantil. "Todo lo que no sea presencial al final no es efectivo. La asistencia a clase es fundamental, el contacto con los maestros, el convivir, el socializar. Al final esto provoca una desmotivación que puede terminar en un absentismo", cuenta Mariola Sanz, presidenta de la Asociación de Directores de Educación Primaria. La mala noticia es que, con la segunda ola desbocándose por España, todo apunta, como ha sucedido en Catalunya, que si hay algún movimiento será en la dirección contraria a la deseada.

"Es un engaño"

Javier Igual cree que la situación es "un engaño para las familias". "Les han dicho que todo está resuelto porque los chicos tienen semipresencialidad. Pero el engaño es que el alumnado la tiene, pero los profesores no. No hay nadie al otro lado cuando están en casa porque nosotros estamos en clase", expone. Los alumnos están solos en sus casas, asistidos por sus padres en el mejor de los casos. Otros, cuenta Alquézar, han optado por apuntar a sus hijos a academias por las mañanas los días que no tienen clase presencial. "Están

contratando personas para que hagan de guía de lo que en principio tendría que estar haciéndose en el aula. Es una barbaridad y una desigualdad, se lo paga quién puede", valora.

El resto se apaña como puede. Y muchos no están preparados (académicamente) para ello. "Está siendo complicado", admite Elena, estudiante de 4º de la ESO de 14 años. "No estamos acostumbradas a estudiar así en casa, es algo nuevo y nos está costando adaptarnos. A todos. Antes no habíamos estado nunca trabajando con el ordenador. Y de la nada pasamos a estar de nueve de la mañana a tres de la tarde", cuenta.

A su lado, en el otro extremo de la videoconferencia, su profesora Alquézar lo explica: "Esta supuesta autonomía que les estamos pidiendo no se tiene en el instituto. Es el problema más grande que vemos. Es en el instituto donde poco a poco se va adquiriendo esa autonomía, esa capacidad de organización para trabajar uno solo. También es una cuestión de edad. La responsabilidad se está adquiriendo ahora, pero es en el primer y segundo año de Universidad cuando la autonomía se asienta", comenta.

Y mientras... cada uno, como puede. "Si tienes dificultades académicas, todo esto se hace un mundo. Si a un alumno le cuesta la comprensión escrita, y esto pasa en 3º y 4º, y muchas de las tareas que les mandamos son por escrito ya parten de que ni siquiera entienden qué tienen que hacer", explica Alquézar.

El mayor reproche que hacen profesores y familias, además del hecho en sí, es que esta vez ni siquiera se puede achacar la decisión a la necesidad de improvisar que sí hubo en marzo. Y que, con carácter general, se ha aplicado por igual a todos los alumnos, aunque tuvieran conocidas dificultades de aprendizaje. "Se sabía, tuvimos dos meses y medio de confinamiento desde marzo y se comprobó que este tipo de alumnado es incapaz de trabajar por sí solo. No hacen nada, y encima ahora los padres no están en casa y hacen aún menos", lamenta la profesora de Teruel.

La queja se repite en Madrid. "El consejero de Educación, Enrique Ossorio, recalcó en la Comisión de Educación del pasado 16 de septiembre, que 'la presencialidad es esencial', y pese a ello, no se han puesto los medios necesarios para que esto sea una realidad", cuentan desde la FAPA Giner de los Ríos. Más aún, entrado ya el curso, el consejero defiende que todo va estupendamente, según afirmó la semana pasada en la Asamblea. Palabra de consejero.



La «fresa del postre» para ahogar a la concertada: Los Presupuestos la dejan fuera de la creación de plazas

Destinan más de 200 millones para la creación de plazas de 0-3 solo públicas

Josefina G. Stegmann. Madrid 31/10/2020

Los ataques a la concertada no llegaron con la Lomloe, proyecto de ley educativo actualmente tramitado en el Congreso contra el cual el sector ha iniciado una feroz campaña. El sector sufre desde hace años un acoso que viene del Gobierno central pero también de las comunidades gobernadas por el PSOE y Podemos Compromís o Bildu.

Por ejemplo, en el curso 2017-18, en Aragón y Comunidad Valenciana y en el 19-20 en La Rioja eliminaron unidades concertadas que contaban con suficiente alumnado para llenar las aulas vacías de la pública. Estas reducciones de aulas fueron anuladas por los tribunales con base en la legislación vigente (Loe-Lomce). Otro hecho, menos conocido pero igual de polémico, ha sido «la imposición por parte de la administración de plataformas informáticas para realizar el proceso de admisión de alumnos tratando de asumir la gestión directa del mismo y sustituyendo en esta tarea a los titulares de los centros», denuncia Luis Centeno, secretario general adjunto de la patronal Escuelas Católicas. Así, se han dado situaciones, como por ejemplo, reducción de plazas a ofertar, eliminación de alumnos ya matriculados, etc. Este tipo de plataformas, además, desvelan información sensible sobre los alumnos que se escapan al control del centro.

El último ataque se consumó en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado el pasado miércoles. Las intenciones ya se habían dejado claras en el documento que plasma el acuerdo entre PSOE y Podemos de diciembre de 2019 cuando prometieron «un plan de extensión de la Educación Infantil, con una red pública e integrada que garantice una oferta suficiente de plazas públicas para todos los niños menores de 3 años». En la práctica esto conduce a una mayor cantidad de plazas públicas que concertadas y al hecho de que un niño que empieza en esta etapa en un centro público tiene menos posibilidades de cambiar a uno concertado. La promesa de aquel documento de hace algo menos de un año se convirtió en hechos (y en dinero).

«Empezó en Extremadura y Comunidad Valenciana»

Según consta en los Presupuestos se destinarán 200.790.000 euros para la «creación de plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años». Para Centeno, los presupuestos «vienen a demostrar con hechos la intención del Gobierno de incrementar la enseñanza pública, a costa de la privada y concertada», lamenta y recuerda, además, que el incremento de las plazas en las etapas de 0-3 «empezó hace más de tres años en Extremadura y Comunidad Valenciana». A la concertada, solo se le destinan fondos para un programa de refuerzo en Ceuta y Melilla (PROA+).

Pero el incremento progresivo de las plazas en las etapas de 0-3 «empezó hace tres años en Extremadura y Comunidad Valenciana», apunta Centeno que repasa otros ataques «económicos» a la concertada: «En algunas comunidades, desde hace unos cinco años, la concertada no recibe el pago de conceptos salariales que afectan al profesorado, por ejemplo, paga extraordinaria por antigüedad. Esto empezó en Andalucía cuando estaba el PSOE, pero también en Galicia, donde gobierna el PP».

Además, critica Centeno, el módulo de conciertos, es decir, el dinero que se recibe del Estado, «sigue inalterado a pesar de todas las obligaciones impuestas por las sucesivas leyes como la protección de datos, la eliminación de barreras arquitectónicas para la accesibilidad, las inversiones tecnológicas, la prevención de riesgos...todo esto no está contemplado en el módulo. En esos conceptos no se incluían todas las obligaciones legales recientes».

EL PAIS

Colectas para paliar el frío en las aulas de Madrid

Diferentes asociaciones de padres recaudan dinero para instalar filtros de aire en centros públicos de la región
BERTA FERRERO. Madrid 31 OCT 2020

Sorpresa. Ha llegado el frío. Y con él, el momento de enfundar a los niños con el gorro, los guantes, las camisetas térmicas y la bufanda. No para ir a la calle, sino para estar en clase. Las evidencias científicas han dejado claro que las aulas deben tener las ventanas abiertas y debe haber ventilación cruzada, con puertas también abiertas en lados opuestos. Pero cientos de padres de la región madrileña se preguntan si hay opciones para suavizar las temperaturas de un invierno cada vez más presente en Madrid. Y, sobre todo, de quién es la responsabilidad de acondicionar los colegios públicos ante este curso. La Administración regional, de nuevo en el foco, pues consideran que de la misma manera que es su función contratar profesores o comprar ordenadores, deben pensar cómo preparar los centros para los meses más duros del año y mantenerlos seguros. Ante la sensación de desamparo, muchos han dado un paso al frente y han empezado a hacer colectas para comprar filtros de aire y cerrar así las ventanas. «Si esperamos a que se haga cargo la Administración, acaba el invierno y seguimos igual. Pero es indignante», explica Javier Vera, presidente del Ampa del colegio de infantil y primaria Francisco Arranz.

Ha pasado en ese colegio del distrito de Latina. La madre de una alumna trabaja en una residencia de ancianos, así que propuso instalar los mismos aparatos que había visto allí. Por eso le explicó al presidente del Ampa su idea. «O esto, o tendremos a los niños enfermos durante meses», le dijo a Vera. Los padres, que tienen claro que el virus se mueve por el aire, conocen la importancia de ventilar, pero ya ha empezado a correr como la pólvora la solución que proporcionan los filtros de aire, que supuestamente eliminan las partículas en suspensión, susceptibles de contener el virus. Así que ellos mismos buscaron el modelo, consiguieron el contacto del proveedor y hablaron con el director del centro. La respuesta, positiva. Tras una reunión con los distribuidores de la marca y una prueba, el director solo puso una pega: no podía hacerse cargo de los 4.200 euros que costaba poner un equipo en cada una de las 22 aulas. «Así que le propusimos poner dinero desde el Ampa, más de la mitad, y aceptó enseguida», explica Vera.

El Ampa empezó entonces la petición de donaciones. Llegaron 10, 15, 20... algunos pusieron hasta 100 euros. Cada uno lo que quisiera o se pudiera permitir. «Pero también he recibido muchas cartas diciendo que es indignante que tengamos que hacer esto nosotros», admite el presidente. Al final, la asociación de padres colaboró con 4.400 euros y el colegio con algo más de 1.000 para instalar, además de los 22 equipos, siete más en aulas de uso común. «Nos hemos quedado también sin dinero en el Ampa que utilizábamos para otras cosas».

Pero la preocupación de los padres del Francisco Arranz por paliar los efectos de un invierno duro no es un caso único. Ha ocurrido en el Averroes, en Arroyomolinos, donde la asociación de padres también se ha hecho cargo de pagar la instalación. O en el colegio de infantil, primaria y secundaria Maestro Rodrigo, en Aranjuez, donde cada padre ha pagado 10 euros para recaudar el montante final. Otro, como el Manuel Bartolomé Cosío, en Madrid, ha pedido presupuesto a través de las familias, aunque aún no han decidido nada. Muchos quieren soluciones similares a las que están tomando en otros centros, pero la situación socioeconómica de las familias no es homogénea. Insisten en que no entienden que la Administración regional no se haga cargo de este gasto, cuando recibió 260 millones del Gobierno central como partida extra para educación.

Carta a Ayuso

La preocupación, eso sí, está en el aire. Por eso los padres de 17 colegios de Latina y de Carabanchel se han unido para escribir una carta a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para explicar sus quejas con una organización que consideran «improvisada y deficiente» y realizar sus peticiones, entre las que se encuentra la relacionada con la ventilación.

“Al principio nos preocupaba que contrataran a los profesores, porque empezaron tarde y mal y hay alumnos que todavía les falta alguno. Después, los ordenadores, los proyectores o la limpieza. Y ahora llegan el invierno y el frío. Es de una incompetencia que da miedo porque no se puede decir que ha llegado por sorpresa”, se queja Esther Gómez, madre de una niña de cuatro años y otra de ocho, y tesorera del Ampa Ermita del Santo, una de las 17 que rubrican la carta. “Nos dejan pocas opciones para los niños: o se pelan de frío, o se contagian o que no vayan al colegio”, dice, indignada, porque no entiende que esté todo “fatal organizado”.

Pero no todo ha salido del bolsillo de los padres. Javier Ayala, el alcalde de Fuenlabrada, anunció el jueves que su municipio va a donar a todos los colegios de la ciudad “filtros HEPA” —que se utilizan en aviones u hospitales para limpiar el aire de partículas nocivas para la salud— y destinará 850.000 euros, un dinero que tiene pensado reclamar a la Administración de Ayuso. “El invierno está a la vuelta de la esquina y no podemos permitir que los niños tengan más riesgo de contagio”, aseguró. El Ayuntamiento de Soto del Real ha seguido el mismo camino.

La pregunta que se hacen algunos es si realmente es eficaz o simple propaganda. Es a la conclusión a la que llegó la junta directiva del Ampa del instituto Cervantes. “Nuestra opinión es que es más un sacacuartos que una solución efectiva”, dice Manuel Díaz, presidente de la asociación de padres, que aprovecha para quejarse de que todavía les faltan cinco profesores. El frío también se ha convertido en debate en su centro, donde han decidido que los alumnos no lleven mantas “porque no era una solución muy higiénica”.

Ventilación natural

Los expertos han dejado claro que en ambientes interiores, las partículas en suspensión, también llamadas aerosoles y susceptibles de contener virus, se pueden acumular. Y la reducción del riesgo de contagio se consigue reduciendo emisión y exposición. Juan Antonio Ortega, pediatra ambiental, cree que no hay nada más eficaz que la ventilación natural. “Hay que abrir las ventanas siempre, al menos 25 ó 30 centímetros. Este año los niños tienen que ir más abrigados y en caso de necesitar algo complementario yo estoy a favor de los sistemas de calefacción radiante”, explica el médico, coordinador del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría.

“Que las familias estén aportando dinero no debería permitirse, al final es una especie de copago en una escuela pública de cuyos recursos se debe hacer cargo la Administración”, piensa Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación de asociaciones de padres Giner de los Ríos, que apunta, además, que cada centro debe hacer un estudio personalizado para determinar si comprar un filtro es realmente eficaz. “Estos aparatos pueden crear una falsa sensación de seguridad”.

Los científicos coinciden: lo mejor, abrir ventanas

Según una guía de ventilación en las aulas elaborada por CSIC-IDAEA, el Ministerio de Ciencia e Innovación y Mesura, la emisión se puede reducir mediante la disminución del número de personas, el silencio o volumen de habla bajo, la actividad física relajada y el uso de mascarilla. La exposición se puede reducir también mediante el uso de una mascarilla, la reducción del tiempo de exposición, el aumento de la distancia interpersonal y la ventilación o purificación del aire, para eliminar o reducir la concentración de virus en el aire.

En la guía se recomienda, principalmente, y en este orden, reducir los tiempos de posible exposición al virus, ventilar los espacios, purificar el aire y comprobar la concentración de CO₂. Dice el informe que, cuanto mejor sea la ventilación, menor es el riesgo de contagio y para ello da una serie de recomendaciones en las que abrir puertas y ventanas sería la prioridad. En caso de no poder garantizar una ventilación suficiente, presenta otras alternativas como serían la ventilación forzada bien individual o centralizada según los casos y, en el caso de no ser suficiente ninguna de estas opciones, recomienda la purificación del aire.

Por eso, CC OO ha remitido una carta al consejero de Educación, Enrique Ossorio, en la que pide dos cosas: que todos los centros educativos puedan garantizar las condiciones suficientes en lo que respecta a la calidad del aire y que se dote además a todos los centros de equipos medidores de CO₂ para poder verificar las condiciones ambientales. “Se tiene que garantizar equipos de filtrado, de purificación y de medición de CO₂ y no se puede dejar a la capacidad adquisitiva de las familias porque es un factor de desigualdad más”, remata Isabel Galván, representante del sindicato.

La Comunidad de Madrid recomienda ventilación natural, así como la reducción de aforos y el uso de la mascarilla, y aconseja la instalación de medidores de dióxido de carbono (CO₂) en las aulas. Eso dijo ayer el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que explicó que el conocido filtro HEPA es recomendable “en determinadas circunstancias” y “en edificios sensibles”.

El filtro HEPA, al que recurren las familias, es un acrónimo de “filtro de aire de partículas de alta eficiencia”. Teóricamente, elimina más del 99,9% de los aerosoles de la corriente de aire que los atraviesa. Pero es importante que estén certificados y que cuenten con asesoramiento profesional antes de instalarlo. “En todo caso tendría que haber dos en una clase”, insiste Juan Antonio Ortega, pediatra ambiental. Para obtener la certificación, los purificadores de aire deben de pasar unos controles. En Europa, los HEPA deben eliminar como mínimo el 99,95% de las partículas. En EE UU, el 99,97%.

“La ventilación con un enfoque hacia lo natural es clave en la lucha contra la pandemia, porque genera cultura de aire limpio, prioriza y nos hace resilientes a la covid 19 y a cualquier virus”, argumenta el doctor, que está detrás del proyecto educativo de Murcia llamado Aire Limpio y por el que la Consejería de Educación invertirá 1.400.000 euros. En principio, estaba destinado para que participaran 40 centros aunque, finalmente, serán

más de 100 colegios los que pondrán en marcha medidas que contribuyan a desarrollar centros seguros y saludables.

europapress.es

Padres y estudiantes celebran el incremento en becas pero discrepan en el objetivo de esas ayudas

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Padres y alumnos han coincidido en celebrar el incremento de la partida de becas previstas en los Presupuestos Generales del Estado que ascienden a 2.090 millones de euros, pero discrepan en el objetivo de las ayudas al estudio.

Así, mientras la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa), considera que las becas deben facilitar el estudio a aquellas personas con menos recursos pero siempre ligadas al esfuerzo y los resultados académicos, el Sindicato de Estudiantes considera que estas se quedan cortas y piden la gratuidad de toda la enseñanza universitaria.

El presidente de la Concapa Pedro Caballero valora como una buena noticia el incremento de las ayudas al estudio pero echa en falta un mayor diálogo con la comunidad educativa para estudiar los criterios de adjudicación de dichas becas.

"Echamos de menos poder desarrollar un verdadero programa de becas y tener la seguridad de que se adjudican a quien realmente lo necesita y que son un reconocimiento al esfuerzo y los buenos resultados", ha indicado a Europa Press Caballero.

En su opinión, las becas "no son un fin último, sino una ayuda para promocionar a la gente que hace un esfuerzo; sino conseguimos eso y acaban siendo una ayuda dineraria para todos, perdemos el propósito real para lo que se crearon".

A juicio del presidente de la Concapa, el montante económico de la partida de becas es importante, pero no lo son menos los criterios de distribución. "Posiblemente no sea un problema de cantidad, sino de distribución de la becas, porque es importante llegar cada vez a más gente para evitar que abandone los estudios por un problema de dinero, pero también hay que tener visión de que las becas son para obtener un resultado académico", ha indicado.

Por su parte, el sindicato de estudiantes celebra el incremento de la partida de ayudas al estudio pero considera que eso no es la solución para garantizar el acceso a la universidad a los estudiantes hijos de trabajadores.

"Es un aumento muy positivo, pero se queda corto porque la solución pasa por la gratuidad de las universidades, que bajen las notas de corte que hacen cada vez más difícil el acceso a la enseñanza académica, que haya residencias universitarias públicas, gratuidad de los libros y el transporte", ha explicado a Europa Press la portavoz del Sindicato de Estudiantes Marina Mata.

Asimismo, Mata ha recordado que en la actualidad existe una situación de "emergencias educativa" y ha recordado que la becas son solo una de las muchas necesidades que existen y que no pueden esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

"Lo que tiene que haber es un plan de rescate a la educación pública desde los 0 a los 3 años a la universitaria; estamos en una situación de emergencia, seguimos necesitando aulas seguras, sistemas de ventilación y miles de profesores, ante lo que no se puede seguir esperando más", ha indicado la portavoz del sindicato.

El Confidencial

EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES

Los datos personales de 3,6M de alumnos y padres de Madrid, expuestos en la red

Según ha comprobado este diario, la Consejería de Educación de Madrid ha sufrido una brecha de datos que dejó expuesta la información privada de millones de alumnos, pero también de sus padres

C. OTTO 31/10/2020

Los 1,2 millones de alumnos de toda la Comunidad de Madrid y sus respectivos padres o tutores legales (en total, 3,6 millones de personas) tienen un problema: sus datos personales han estado expuestos en internet al alcance de cualquiera debido a una brecha de datos. Así lo aseguran fuentes conocedoras de dicha brecha a

este diario, que ha podido comprobar la existencia de varios documentos correspondientes a la matrícula de alumnos de 3 a 18 años que contienen tanto su información como la de los tutores que firman la matrícula.

La brecha de datos fue descubierta entre finales de mayo y principios de junio de este año. Fue precisamente un padre el que, cuando accedió a la matrícula de su hijo en la web de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, observó que también podía acceder a las matrículas y datos personales de otros alumnos. Este diario ha comprobado que, efectivamente, los expedientes son reales y corresponden a los alumnos y padres, cuyos datos aparecen visibles.

DNI, domicilio, móvil, renta mínima...

El fallo informático era tan sencillo como crítico. Cuando unos padres acceden a la web de la secretaría virtual de los centros docentes de Madrid, para consultar la matrícula de sus hijos deben introducir un usuario y una contraseña y, a continuación, acceden a la documentación en una web cuya url tiene la siguiente forma: <https://raices.madrid.org/secretariavirtual/descarga/solicitud/28563/> (Número inventado).

Lo que descubrió este padre es que, si cambiaba aleatoriamente el número del final de la url, podía acceder a las matrículas de otros alumnos. Cada una de ellas estaba registrada en un documento PDF en el que aparecían los siguientes datos personales:

- Alumnos: Nombre y apellidos completos, DNI (si tienen), NIA (número de identificación de alumno), sexo, ciudad, municipio, dirección completa del domicilio, fecha de nacimiento, centro escolar, curso en el que se matricula y existencia o no de hermanos.
- Padres o tutores legales: Nombre y apellidos completos, DNI, correo electrónico, teléfono móvil, información económico (por ejemplo, si reciben la Renta Mínima Vital), sexo, ciudad, municipio, dirección completa del domicilio y fecha de nacimiento.

Los afectados fueron los más de 1,2 millones de alumnos de la Comunidad de Madrid de Educación Infantil (3 años) hasta Bachillerato (18 años), así como sus padres o tutores legales. La cifra de personas que han visto sus datos personales expuestos, por tanto, podría ser de hasta 3,6 millones de afectados en toda la región. Este diario ha podido corroborar la posibilidad de acceder a dichos documentos.

Educación: "No se expuso datos personales"

Este diario ha contactado con la Consejería de Educación para evaluar su conocimiento sobre dicha brecha, el tiempo que estuvo habilitada, cómo se solucionó y, sobre todo, si se notificó a los afectados. La Consejería admite un incidente, pero poco más: "El 20 de mayo por la mañana se detectó un fallo informático y se cerró el servicio de secretaría virtual de forma inmediata. A primera hora de la tarde se solucionó el fallo y el servicio de la secretaría virtual de Educación quedó restablecido. Madrid Digital avisó a la Consejería de Educación en cuanto conoció el problema".

Además, la Consejería asegura que "Madrid Digital no tiene constancia de brecha de seguridad en relación a exposición de datos personales de los alumnos".

La versión de las fuentes cercanas al padre que descubrió la brecha, eso sí, es bien distinta. El incidente, aseguran, fue reportado a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro escolar. Acto seguido, la secretaría virtual de los centros docentes 'apagó' su web, mostrando un mensaje mediante el que indicaba estar en obras.

Además, aseguran, desde la Consejería de Educación se dio las gracias a los informantes y se les instó a que, si descubrían nuevas brechas de datos o vulnerabilidades de seguridad informática, avisasen inmediatamente al organismo. Tras esta comunicación no hubo más conversaciones y, según las fuentes consultadas, ni los centros escolares ni la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid fueron informados de la brecha de datos existente.

"No informaron a la AEPD"

El incidente, según las fuentes consultadas, "se ocultó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)", cuando en realidad se tendría que haber comunicado tras el conocimiento de la brecha. En este sentido, el artículo 33 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece que "en caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente (...) 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas". Si dicha notificación no se produce en 72 horas, "deberá ir acompañada de indicación de los motivos de la dilación".

Además, el artículo 32 del RGPD recuerda que, en cualquier entidad que gestione datos personales de terceros, "el responsable y el encargado del tratamiento [de esos datos] aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo". La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), por otro lado, también habilita la posibilidad de imponer sanciones económicas a quien no haga una buena custodia de los datos que maneja.

Este diario ha contactado con el organismo para saber si la Consejería de Educación reportó el incidente: la AEPD asegura no tener conocimiento de ninguna brecha similar. Educación afirma que, efectivamente, "no se ha realizado ninguna notificación a la Agencia Española de Protección de Datos", pero argumenta que no se ha hecho porque no tiene conocimiento de que ningún dato de padres o alumnos haya quedado expuesto.

"Estoy indignado, pienso denunciar"

Este diario ha podido hablar con dos padres cuya información personal y de sus hijos aparece visible en los expedientes de matrículas que quedaron expuestos. "Estoy flipando"; nos reconoce uno de Parla. "Mi hijo tiene cinco años y en esos documentos aparece su nombre completo, la dirección de nuestra casa y el colegio al que va. No quiero ni imaginarme lo que puede hacer cualquiera con esa información... Acabo de llamar al colegio de mi hijo para quejarme y pienso denunciar este asunto. Es indignante que haya pasado esto y que, encima, no nos digan nada".

Otro de los padres, que además es informático, añade posibles usos de estos datos: "Imagínate que alguien coge todas esas informaciones y se dedica a llamar a los padres o a mandarles un email haciéndose pasar por alguien del colegio. Los padres se fiarían, porque puede darles sus datos personales, su DNI, la dirección de su casa, el colegio, el curso... Lo tienen todo y podrían hacer una suplantación de personalidad".

El mismo fallo que Lexnet, Movistar, EAE...

La brecha de datos a la que se ha expuesto la Consejería de Educación de Madrid es crítica, pero también bastante frecuente. De hecho no es ni mucho menos la primera institución a la que le pasa algo similar. El mayor ejemplo de este mismo fallo ocurrió en Lexnet, el sistema telemático del Ministerio de Justicia para intercambiar información de casos entre juzgados, abogados, procuradores y otros colectivos, que sufrió una brecha idéntica y de manera continuada.

También les pasó lo mismo en 2018 a la escuela de negocios EAE Business School y poco antes a Movistar: un mero cambio en los números de una url permitía acceder a información personal y privada de terceras personas. Veremos si en este caso hay consecuencias.

infoLibre

Temor a que las aulas sucumban a la segunda ola tras dos meses de aprobado raspado en el examen del covid

En la semana del 23 al 30 de octubre, los brotes detectados en las escuelas han pasado de 733 a 936, un incremento que los expertos vinculan a la rapidez con la que sube la curva de la segunda ola

CCOO critica que de los 70.700 profesores necesarios para garantizar los ratios de 20 alumnos por aula sólo se han contratado a 38.000

Sindicatos, familias y profesorado denuncian que las primeras semanas tuvieron que afrontar solos la respuesta a los primeros casos positivos y temen que un nuevo confinamiento vuelva a generar desigualdad en el alumnado

Lara Carrasco 01/11/2020

Han pasado casi dos meses desde que abrieron las primeras aulas. Lo hicieron a pesar de las muchas dudas que mantuvieron en vilo a familias, profesores y equipos directivos hasta el último minuto, agravadas por el maremágnum de protocolos y recomendaciones modificados apenas unos días antes de preparar las mochilas para hacer frente al deseado y en ocasiones temido primer día de colegio. Lidar con la situación no ha sido fácil, pero los colegios, al menos por ahora, han resistido. Según los sindicatos, gracias a sus trabajadores. Las administraciones, critican, no han ayudado demasiado. Los ratios recomendados no se han cumplido porque los profesores necesarios no han terminado de llegar y los servicios de salud dedicados a actuar ante casos positivos tampoco han funcionado como deberían. Por eso las escuelas se han sentido solas en demasiadas ocasiones. Y así han hecho frente al aumento de los contagios que han sufrido, consecuencia de la llegada de la segunda ola en la que ya se encuentra inmersa España.

Marian González es la directora del Instituto de Educación Secundaria (IES) Juan de Mairena, situado en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes. Afortunadamente, en todo este tiempo no han tenido que echar el cierre a ningún aula ni mandar a su domicilio a sus alumnos y alumnas. Han tenido, como mucho, 13 casos positivos en coronavirus. Ahora solo son "dos o tres". Cuando detectaban uno, explica desde el otro lado del teléfono, llamaban a Salud Pública, una tarea demasiado complicada al principio. "Antes era horroroso, no contestaban", recuerda. Así que las decisiones las tomaba esa figura que todos los centros educativos tuvieron que crear: "el coordinador covid". En su caso era la jefa de estudios. "Nos sentíamos muy desasistidos", lamenta. Por suerte, la situación mejoró.

Eli Ojeda ha vivido estos meses desde la situación contraria. Ella es madre de dos mellizos de cuatro años, un niño y una niña. Estudiaban, hasta este año, en clases diferentes del mismo colegio público de Sevilla. Ahora lo hacen en el mismo aula porque Eli lo pidió. Le parecía, recuerda en conversación con infoLibre, mucho más seguro para prevenir un posible contagio. Reconoce la labor que realizan los profesionales como Marian y

todos los profesores. "Todo se lo están trabajando ellos, que ponen su máximo empeño", dice. Aun así, hay situaciones inevitables.

Sus hijos empezaron el curso un jueves. Ese día y el viernes, tal y como recuerda, tan sólo tuvieron un "periodo adaptativo" y acudieron al colegio una hora. El lunes ya fueron tres. "Pues ese mismo día, a las 22.15 de la noche, no se me va a olvidar, me llama el director diciendo que había habido un positivo en clase y que no podíamos ir hasta pasados 15 días. La primera en la frente", lamenta. Ese era su miedo, tal y como confesó a infoLibre a finales de agosto. Al estar al frente de uno de los 1,8 millones de hogares monoparentales —los monomarentales suponen el 81%— esperaba la vuelta al cole como agua de mayo. En su caso es vital para conciliar. Por suerte, su empleo como trabajadora social le ha permitido teletrabajar y, con ayuda de una vecina, no les ha faltado de nada. Pero eso sí, ni una llamada del centro de salud hasta el octavo día de confinamiento. "Ese día le hicieron una PCR a los niños, aunque el resultado no llegó hasta cinco días después, ya casi cuando habíamos pasado la cuarentena", critica.

Los brotes escolares, en línea con los generales

Según el Ministerio de Sanidad, que especifica los brotes conocidos en ámbitos como el educativo en el informe de cada viernes, hasta el 29 de octubre ha habido 936 brotes en centros escolares, lo que supone el 8% del total —el 31% se han producido en entornos sociales como locales de ocio o reuniones familiares o de amigos. Hasta este día se habían acumulado 5.693 casos positivos en las aulas, 1.220 de los cuales se habían producido desde el viernes 23, semana en la que se detectaron 204 brotes.

Las cifras eran peores que las registradas en el documento de la semana previa —la que va del 16 al 23 de octubre. Hasta el 23 de octubre los brotes acumulados se situaban en **733**, 190 surgidos durante esa semana. Los casos, por su parte, sumaban 4.369, 1.286 en esos últimos siete días. Según informa el Ministerio de Educación a infoLibre, las aulas confinadas representan un 1,6% del total.

¿Por qué han empeorado tanto las cifras de contagios en las aulas en tan poco tiempo? ¿Hay algo que no esté funcionando? Joan Ramón Villalbí, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespa), lo descarta. Afirma que el aumento de contagios en los centros educativos se debe a que el número de positivos, en general, no deja de crecer. "Las infecciones en las escuelas están aumentando porque les toca una parte de la infección que hay en la comunidad en la que se encuentran. La mejor predicción de los casos en las escuelas son los casos de la comunidad", explica. Según el informe publicado este viernes por el Ministerio de Sanidad, el coronavirus ha infectado a 1.185.678 personas en España, 139.546 más que hace una semana, cuando el número de positivos desde que empezó todo estaba en 1.046.132 personas. Los contagios aumentaron en esa semana, por tanto, un 13,3%.

Villalbí menciona un estudio que acredita sus palabras. Lo llevó a cabo el grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Cataluña y fue entregado a la Comisión Europea. Según reveló el documento, recogido por *El País*, las primeras semanas de curso no tuvieron un impacto significativo en la evolución de la epidemia en España. "Si las escuelas hubieran actuado como amplificadoras de los contagios, ya debería observarse un efecto en la incidencia global", señalaba el documento. "Las comunidades donde la incidencia estaba subiendo han seguido haciéndolo a un ritmo parecido, y las que estaban bajando han continuado haciéndolo", relató la investigadora Clara Prats, una de las autoras del informe, al periódico.

Más allá del estudio, existe un caso práctico que afianza estas palabras. Suecia nunca cerró los colegios. Su estrategia para frenar el avance de la pandemia pasó por dejar las aulas abiertas, apostar por el teletrabajo, limitar las reuniones a 50 personas y confinar a los mayores de 70 años. Y ahora están mejor que el resto del continente europeo. Según el repositorio de la Universidad de Oxford, el país nórdico tiene una incidencia acumulada de 167 casos por cada millón de habitantes en los últimos siete días. La de España, en cambio, se sitúa en 408.

europapress.es

El Sindicato de Estudiantes pide suspender las clases presenciales y un plan de rescate a la educación pública

MADRID, 01 Nov. (EUROPA PRESS) –

El Sindicato de Estudiantes ha pedido la paralización de la actividad lectiva presencial y la puesta en marcha de un plan de rescate a la educación pública, ante el incremento de casos de coronavirus en España. En este contexto, ha destacado que la situación sanitaria en España "es de nuevo insostenible" por lo que ha solicitado al Ejecutivo la paralización inmediata de toda la actividad productiva no esencial, con permisos retribuidos para los trabajadores y suspensión de la actividad lectiva presencial para frenar la curva.

Asimismo, ha pedido una partida extraordinaria de 100.000 millones de euros, la misma cantidad que "se ha regalado a la banca y el IBEX35", que garantice la inversión económica, material y humana en la sanidad y la educación públicas.

El sindicato también exige la reversión de todos los recortes en la educación pública y fin del "regalo" de dinero público a la educación privada-concertada, así como la creación de un plan de rescate a educación pública, la

contratación masiva de profesorado y aumentar la inversión en los centros de estudio para garantizar la ventilación, distancia, geles desinfectantes y todas aquellas medidas de seguridad necesarias.

Además, ha hecho hincapié en la importancia de poner fin a la brecha digital, con un reparto masivo de dispositivos digitales, así como cursos de formación digital gratuitos para profesorado, familias y alumnado. Por último, el sindicato ha demandado la contratación de centenares de miles de sanitarios, médicos, enfermeros e investigadores para poner a pleno funcionamiento los centros hospitalarios; y la aprobación de un decreto ley urgente para "poner la sanidad privada bajo control público".

Para el Sindicato de Estudiantes, "proteger la salud y los derechos del conjunto de los estudiantes, profesores y familias, del conjunto de la clase trabajadora y la juventud, debe ser una prioridad inapelable para este Gobierno". "El negocio de las empresas, la sanidad y educación privada y los grandes magnates económicos no pueden estar por encima de los derechos de la población, y más cuando se da una situación de emergencia social sin precedentes", ha criticado el sindicato en un comunicado.



Por qué escribir a mano hará que tu hijo sea más inteligente

Una investigación comprueba que el cerebro es mucho más activo cuando se escribe con lápiz sobre un papel que cuando se hace en un teclado

S.F. MADRID 01/11/2020

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología ha evidenciado, tras analizar la actividad cerebral en doce adultos jóvenes y doce niños, que escribir a mano logra mejorar el aprendizaje y la memoria.

Los expertos, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista "Frontiers in Psychology", pusieron una capucha con más de 250 electrodos conectados en la cabeza de los participantes. Cada examen duró 45 minutos por persona y los investigadores recibieron 500 puntos de datos por segundo.

Los resultados, informa Efe, mostraron que el cerebro de los adultos jóvenes y los niños es mucho más activo cuando escriben a mano que cuando escriben en un teclado. «Escribir a mano crea mucha más actividad en las partes sensoriomotoras del cerebro. Muchos sentidos se activan presionando el lápiz sobre el papel, viendo las letras que escribes y escuchando el sonido que haces mientras se escribe. Estas experiencias sensoriales crean contacto entre diferentes partes del cerebro y hace que se aprenda y se memorice mejor», han explicado los investigadores.

Por ello, y a pesar de que los expertos reconocen que el aprendizaje digital aporta muchos beneficios, han instado a que se fomente la escritura a mano de los niños y adolescentes. «Dado el desarrollo de los últimos años, corremos el riesgo de que una o más generaciones pierdan la capacidad de escribir a mano. Nuestra investigación y la de otros muestran que esto sería una consecuencia muy desafortunada del aumento de la actividad digital», han zanjado.

elPeriódico de Catalunya

La Generalitat ve "muy probable" que los alumnos deban ir a clase abrigados

Las ventanas se mantendrán abiertas para garantizar la ventilación de las aulas, no está previsto comprar máquinas para renovar el aire

LUNES 02/11/2020

El director general de centros públicos de la Generalitat de Catalunya, Josep González Cambray, ha considerado "muy probable" que los alumnos tengan que ir abrigados a clase para poder mantener abiertas las ventanas y ventilar el aire, como medida contra el coronavirus. Al ser preguntado por la posibilidad de usar máquinas renovadoras del aire, ha dicho que se plantean "todas las medidas para que las escuelas estén abiertas y sean seguras". Pero ha afirmado que aún no se han comprado: "Estamos a la espera de ver la necesidad. No solo es un tema económico, también es un tema de realismo".

Según estas declaraciones realizadas por Cambray en una entrevista de 'Rac 1' este domingo, recogidas por Europa Press, considera que puertas y ventanas deberán abrirse el mínimo tiempo posible cuando haga frío, pero que si deben estarlo más tiempo, "tendrán que estarlo". Ha insistido en que "la ventilación es una medida importantísima para minimizar la propagación del riesgo, y se consigue con la renovación del aire".

Por qué se repite tanto en España

Un currículo inabarcable y la concepción de la ESO como un camino hacia la universidad, además del sistema de aula-profesor, son algunas de las razones de la anómala situación española

SARA CARREIRA. REDACCIÓN / LA VOZ 02/11/2020

En España se repite muchísimo, tanto que uno de cada cuatro alumnos de 15 años lo ha hecho al menos una vez. Las cifras españolas están muy lejos de lo que se baraja en el entorno inmediato, y solo se pueden comparar con las de Portugal. Sin embargo, la gran diferencia es que el país vecino está eliminando la repetición de su organización educativa y en unos pocos años dejará a España —posiblemente junto a Luxemburgo— como ejemplo de un modelo educativo pasado.

¿Cuál es ese? Aquel que concibe «la educación secundaria como un proceso en el que la selección de los contenidos va encaminada hacia los estudios superiores, secundarios o universitarios y, en consecuencia, los aprendizajes y el rendimiento de los alumnos se enfoca hacia el éxito en las siguientes etapas educativas». Lo dice un informe del Consejo Escolar del Estado (CEE) que se acaba de presentar y que compara la repetición en España con otros nueve Estados similares. Según este trabajo, «la concepción eminentemente propedéutica, académica y selectiva (...) ha influido de modo notable en las áreas y materias» desde la educación primaria; o lo que es lo mismo, España aún no se ha sacudido la tradición de que la educación básica termina sobre los diez años y después llega el bachillerato; o, ya más cercano en el tiempo, no se compara la ESO con la EGB, sino con el BUP.

Este cambio de mentalidad no es sencillo y hay muchos países que llevan años en el proceso. El Informe PISA le pregunta a los alumnos —se hace en estudiantes de 15 años, estén en el curso que estén— si han repetido alguna vez desde que están en el sistema obligatorio; en el 2012 contestaron afirmativamente un 27% de los alumnos en Países Bajos; en el 2018 lo hizo un 15%. Países Bajos, por tanto, ha reducido un 45% su nivel de repeticiones en esos seis años, más o menos como Francia, que ya está en el 16%. El resto de los sistemas analizados ha bajado entre un 25 y un 30% sus tasas de repetición; España solo un 15%, la que menos todos los estudiados (Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos y Portugal).

En el informe del CEE se habla de seis razones que explican esta situación en España:

LOS CURRÍCULOS

El currículo, el temario que se da en clase, es «exhaustivo y con contenidos inabarcables», y en la mayoría de los centros no hay ni recursos materiales, humanos o pedagógicos suficientes «para afrontar, desde el principio y en el desarrollo de cada curso, la diversidad del alumnado y las dificultades en el aprendizaje y en su rendimiento».

Aunque desde la LOE (2006) ya se recoge el aprendizaje por competencias, su aplicación en clase y en las calificaciones es muy limitada, e incluso ha retrocedido con la Lomce, dice el CEE.

Hay una enorme distancia entre el currículo y los aprendizajes que diseña el sistema español y los de otros países con menos repetición, por no hablar de la distancia entre el sistema hispano y lo que proponen los teóricos de la educación a nivel internacional.

Sin embargo, el CEE señala que «al profesorado se le exige que imparta ese currículo, que no se deje nada atrás, que lo trabaje con cuidada atención a la diversidad de su alumnado, que lo acompañe del trabajo práctico necesario, individual y en equipo, que sea riguroso con los conocimientos científicos de las materias que imparte, además de creador, animador e impulsor de aprendizajes innovadores e ilusionantes... y además sin tiempo suficiente para volver a lo realmente aprendido por todos y cada uno de los alumnos, evalúe, califique y decida sobre la promoción también con rigor».

TRABAJO INDIVIDUAL DE LOS PROFESORES

Los profesores se sienten poco preparados para «atender a las diversas capacidades del alumnado y ayudarle a desarrollar competencias básicas, especialmente en contextos multiculturales y plurilingües» y los docentes de secundaria reconocen que tienen «la necesidad de ampliar su formación pedagógica y didáctica».

Sí hay mucha formación permanente, «pero no se distingue entre la formación encaminada a la mejora de los aprendizajes y al trabajo en equipo de aquella que afecta de modo personal al profesor o profesora que la sigue».

Además, «la metodología y el trabajo individual del profesorado» sigue «muy condicionado por los libros de texto y orientado, frecuentemente en exceso, a aprendizajes conceptuales y a tareas comunes mecánicas».

Otro factor importante es la inestabilidad de las plantillas, una movilidad que obliga a hacer constantes reajustes en los claustros.

LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

«El gasto de las comunidades autonómicas siguió siendo menor en 2017 de lo que fue en 2009». Tras unos años de bonanza y crecimiento sostenido, la crisis del 2009 ha supuesto un parón en el proceso de inversiones en educación, lo que repercute en plantillas, escenarios y materiales.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS

«Se han mantenido en la mayoría de los centros españoles unos planteamientos organizativos basados en aulas en las que se atiende a un grupo de alumnos y alumnas con un profesor y una materia en cada período lectivo y algunos espacios específicos o comunes».

Para «abordar con éxito las competencias básicas es imprescindible el trabajo en equipo del profesorado en su definición y concreción, en la puesta en marcha de los aprendizajes precisos y en su evaluación» y trabajar en equipo con la organización escolar española es muy complicado.

LA NORMATIVA PARA LA EVALUACIÓN

En primaria solo se puede repetir una vez en toda la etapa; en secundaria, un máximo dos veces —una en 1.º-2.º y otra en 3.º-4.º, nunca el mismo curso (excepcionalmente cuarto si no se ha repetido nunca antes).

Hay la opción de ir a la FP básica si un estudiante de 3.º de ESO con repeticiones anteriores prevé que no sacará el curso adelante (y de la FP básica puede pasar a la media) o a partir de 2.º de ESO cursar dos años en un plan de mejora (PMAR), que desemboca en el 4.º de ESO general —lo que supone todo un reto para los alumnos—.

Se repite curso cuando el alumnado «tiene evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias si estas son Lengua Castellana y Literatura [o Lingua Galega e Literatura] y Matemáticas de forma simultánea». Por tanto, un alumno puede repetir si un profesor así lo considera.

ENTORNOS FAMILIARES

En España no «hay medida de la relación directa» entre la repetición y el entorno familiar más desfavorecido; sí la hay entre repetición e inmigración. Pero «las incidencias de la implicación de los padres y las expectativas sobre la educación y el futuro educativo de sus hijos parecen evidentes en todos los estudios que al efecto se han realizado».

Ya en cuarto de primaria, las familias que esperan que sus hijos completen estudios universitarios tuvieron hasta 50 puntos más en las diferentes competencias analizadas en la prueba diagnóstica de aquellos cuyas familias pensaban que solo terminarían el bachillerato o la FP. Si las expectativas no llegaban siquiera ahí, la diferencia ronda los 100 puntos. «Estos datos muestran la importancia de la confianza en los alumnos que se tiene en el entorno familiar y su destacada relación con el éxito escolar», dice el informe.

europapress.es

El Gobierno destinará 200 millones a la creación de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad destinará 200 millones de euros de su partida presupuestaria para 2021 a impulsar la creación de plazas públicas para el primer ciclo de Educación Infantil, es decir el de 0 a 3 años, según han informado fuentes del departamento.

El equipo que dirige Irene Montero ha visto incrementada su partida en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene, en un 157%, hasta los 451,42 millones de euros (incluidos los 50 millones que provienen de los Fondos Europeos), frente a los 275,89 millones de las cuantías vigentes.

Con este crecimiento de sus arcas, el departamento de Irene Montero apostará principalmente por cambiar el sistema de cuidados y conseguir la conciliación y corresponsabilidad de las familias. Además, apuntan, se incluyen iniciativas que fomentan el empleo 'morado'.

Para ello, destinará 200 millones de euros al Plan Corresponsables con el que se apoyará a las familias con menores de 14 años a su cargo, a través de la contratación pública de cuidadores profesionales. Esta iniciativa incluye medidas para la dignificación del trabajo de cuidados y para impulsar la corresponsabilidad entre los miembros de las familias.

Este Plan se une a otras medidas que el Ministerio va a poner en marcha en el mismo sentido, como el impulso para la creación de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años (200 millones de euros), para lograr la universalización de la Educación; o el aumento de los permisos de paternidad hasta las 16 semanas, para igualar con los de maternidad, y que serán intransferibles y nanciados al 100% (300 millones).

En ambos casos son medidas que se llevan a cabo con otros ministerios, en este caso el de Educación y FP, y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, respectivamente.



Navarra mantendrá la educación presencial incluso en escenarios más duros de confinamiento: "Los centros son lugares seguros"

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, aboga por mantener la educación presencial y en los centros y realizar "actuaciones concretas" en aquellos en los que se detecten grandes brotes o una pérdida de la trazabilidad de los contactos

Rodrigo Saiz. 2 de noviembre de 2020

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra aboga mantener la educación presencial incluso en escenarios de confinamientos más duros y trabaja "intensamente" para que pueda ser así. El consejero Carlos Gimeno ha destacado que los centros escolares se están comportando "si no como feudos, como lugares seguros y no vulnerables", por lo que entiende que aunque la situación epidemiológica en Navarra empeorase, las aulas seguirían siendo espacios seguros. Algo que también refrendan los datos, ya que apenas un 4,8% del alumnado navarro se encuentra confinado por ser positivo o contacto de un positivo.

Así, el plan del Departamento de Educación es seguir en el escenario dos de los cuatro que se recogen en el *protocolo de actuación que se elaboró en verano para la vuelta al cole*, y que establece la educación 100% presencial y la actuación en aquellas aulas en las que se detecte un caso positivo. Solo se pasaría a clases semipresenciales o online desde casa si se perdiera la trazabilidad en algún centro. De hecho, ha recordado, que se continuó con las clases presenciales en aquellos municipios que fueron confinados hace algunas semanas, como el de Peralta.

"Entendemos que si hubiese un brote o se perdiese la trazabilidad de los contagios sería conveniente pasar a situación cuatro (sin ninguna clase presencial), pero esa situación, por los datos que nos facilita Salud, no se ha producido", ha detallado Gimeno. Según ha indicado, "en el momento actual estamos muy lejos de que se produzca, pero puede producirse".

Así, ha incidido en que "si no hay una evidencia científica contundente que indicase que habría que ir a una fase tres, con reducción de ratios generalizada y una semipresencialidad, Educación abogaría por mantener esa situación dos y tener actuaciones concretas y localizadas en determinados centros en los que se perdiese por parte de los técnicos de salud la trazabilidad".

Gimeno ha señalado que "esa es la idea de Educación", pero que quien tiene la competencia para esa circunstancia es Salud, por lo que ha asegurado, la última palabra sobre los escenarios siempre la tendrá el Departamento de Santos Induráin. "Esa es la vocación, pero las decisiones del Gobierno son colegiadas y vienen marcadas por los criterios de Salud, que son los más relevantes en este momento", ha remarcado.

Según ha expuesto, "nuestra vocación sería esa, seguir manteniendo esa situación dos (100% presencial), y modificarla si se aconsejase un cierre de un centro, pero que no impidiese al resto de centros mantener la modalidad educativa presencial".

EL PAIS

PSOE, Podemos y ERC pactan un cambio en la ley educativa que facilita la inmersión lingüística

La enmienda de los tres partidos no recoge el castellano como lengua vehicular. El texto exige adoptar medidas para garantizar su pleno dominio

IGNACIO ZAFRA. Valencia 03 NOV 2020

El PSOE, Podemos y ERC han pactado una enmienda al proyecto de nueva ley educativa que elimina la referencia a que el castellano es lengua vehicular en toda España. El nuevo texto, que está previsto que se apruebe el jueves en la ponencia de la Lomloe constituida en el Congreso, sustituye dicha definición, introducida hace siete años por el PP en la conocida como Ley Wert, por una referencia a que las comunidades autónomas deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los estatutos de autonomía, según han adelantado a este periódico fuentes parlamentarias.

La enmienda evitará la redacción original del proyecto elaborado por el Ministerio de Educación —"el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares"—, que desde la perspectiva de Esquerra y otros partidos nacionalistas contradecía los programas de inmersión lingüística. Y la cambiará por otra que resulta plenamente compatible con dichos programas, aunque sin llegar a blindarlos, ya que la última palabra en este terreno la tienen los tribunales, que llevan desde 2014, a raíz de una sentencia del

Constitucional, exigiendo a la Generalitat de Cataluña que ofrezca a los alumnos cuyas familias así lo pidan al menos el 25% de horas semanales de clase en castellano.

El nuevo texto, para el que sus promotores confían contar con el apoyo de otros partidos, si no en la presentación de la enmienda, como mínimo en la votación del jueves, establece que al finalizar la etapa de enseñanza obligatoria todo el alumnado deberá tener un “dominio pleno” tanto del castellano como de la lengua cooficial que en su caso exista en su comunidad. Y señala que las Administraciones educativas autonómicas tienen el deber de controlar que los estudiantes alcanzan tales competencias lingüísticas y, en caso de detectar que en algún centro educativo no se está logrando, adoptar las medidas adecuadas para remediarlo.

Constitución

La nueva redacción evita así que la ley aborde cuál debe ser la definición docente de las lenguas en cada autonomía, algo que tampoco hacía la anterior norma educativa aprobada en 2006 por un Gobierno socialista, la LOE. Y se centra en subrayar cuál debe ser el resultado: que todos los alumnos tengan un buen dominio del castellano y, en su caso, de la otra lengua cooficial al terminar la educación básica. El artículo 3 de la Constitución (a la que apela la enmienda pactada) dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.

La referencia expresa al castellano como lengua vehicular —contenida no solo en el proyecto de ley, sino también en la norma ahora en vigor, que fue aprobada por el PP, donde está expresada en los siguientes términos: “El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas”— generaba rechazo no solo en Esquerra Republicana, sino también en el resto de partidos nacionalistas, cuyos votos resultan necesarios para sacar adelante la reforma de la ley educativa una vez que el PP, Vox y Ciudadanos han manifestado su intención de no apoyarla.

Fuentes parlamentarias que han participado en la negociación de la enmienda afirman que el nuevo redactado trata de contribuir a tranquilizar el debate sobre el aprendizaje de las lenguas oficiales españolas enfocándolo a lo importante: que se dominen plenamente. Apuntan a que después de décadas utilizando el modelo de inmersión, los resultados de los alumnos catalanes en castellano se sitúan en la media de los que obtienen los estudiantes españoles, y son mejores que los que logran los estudiantes de algunas autonomías sin lengua cooficial. Y sostienen que “la derecha usa la cuestión como arma política”.

El hecho de que la ley no recoja la definición del castellano como lengua vehicular no significa, en cualquier caso, que vayan a desaparecer los problemas ante la justicia de los programas de inmersión lingüística en los que el uso del castellano queda limitado en el horario escolar a una sola asignatura (la de Lengua Castellana).

En 2010, cuando la ley educativa no mencionaba nada al respecto, el Tribunal Constitucional se reafirmó (como había hecho en 1994) en que el castellano debía ser lengua vehicular en las escuelas catalanas. Desde ese año, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como el Supremo han dado la razón a varias familias que reclamaban que sus hijos recibieran más de una asignatura a la semana en castellano, sin que los jueces hayan dejado de reconocer por ello que el catalán puede ser el “centro de gravedad del sistema” educativo.

Los jueces han indicado en reiterados fallos desde entonces que la distribución concreta de las horas de clase en las dos lenguas cooficiales debía determinarla el Departamento de Educación de la Generalitat. Pero ante la inacción del mismo, el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) decidió en 2014, en respuesta a las reclamaciones de ocho familias, que para ver cumplida la condición de lengua vehicular el castellano debía utilizarse al menos en un 25% de las horas semanales de clase. Y que, además, de la clase específica de Lengua Castellana los hijos de los recurrentes debían recibir “cuando menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo”.

El fallo del TSJC fue confirmado en 2015 por el Supremo. Desde entonces, el Tribunal Superior de Cataluña ha ordenado en varios casos más a los centros garantizar dicho porcentaje de clases en castellano a los alumnos de las familias que así lo han reclamado.



La Delegación del Gobierno impide a la concertada concentrarse frente al Congreso contra la "ley Celaá"

La idea era manifestarse este martes que se votan en la Comisión de Educación artículos controvertidos para el sector como el 109. El argumento dado por el organismo dependiente del Ministerio del Interior es que ya se había denegado una primera vez y al ser el mismo solicitante no hay lugar a subsanaciones posteriores.

Josefina G. Stegmann. Madrid 03/11/2020

La Delegación del Gobierno ha denegado por tercera vez consecutiva a la concertada manifestarse este martes a las puertas del Congreso en contra de la "ley Celaá". El argumento dado por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, señalan fuentes de la concertada, es que ya se había denegado una primera vez y al ser el mismo solicitante no hay lugar a subsanaciones posteriores.

En la primera petición realizada por la Plataforma Más Plurales (que reúne a todo el sector de la concertada y a otras asociaciones) la Delegación del Gobierno esgrimió un defecto de forma, ya que tenía que hacerse con diez días naturales de antelación a la manifestación. La concertada volvió a la carga el jueves pasado y se volvió a pedir permiso. Esta vez con carácter extraordinario y urgente (la ley permite hacerlo con este carácter hasta 24 horas antes). Sin embargo, el organismo dependiente del Ministerio del Interior no contestó, es decir, hubo silencio administrativo. La concertada esgrimió el carácter urgente en que este martes *se votan en la Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso artículo claves para el sector como el 109, que elimina la "demanda social"*, es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres.

Negativa por teléfono

Ayer lunes se mandó una tercera petición «y llamaron por teléfono para decirnos que no porque poruqe ya la denegaron la primera vez por ser solicitante y por pedir la misma fecha para la marcha (3 de noviembre)», relatan fuentes de la concertada.

La concertada ha lanzado una fuerte campaña bajo el lema « Más Plurales, Más Libres, Más Iguales». Lo hacen a través de la Plataforma creada para tal efecto, llamada Más Plurales, que integra a todo el sector (y a otras asociaciones) y con ella pretenden parar la tramitación del proyecto de ley educativo Lomloe, más conocido como "Ley Celaá" porque consideran que «es una muy mala ley, en cuanto al contenido y al fondo. Es evidente que una pandemia mundial no es el momento para promulgar una norma. Si esto resulta inadecuado con cualquier ley, en una educativa es imperdonable porque en los últimos procesos electorales se puso de manifiesto que se estaba solicitando un pacto por la educación y una ley de consenso», criticó la semana pasada Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la campaña en rueda de prensa.

Caravana de coches y lazos naranjas

«No supone más que una vuelta acrítica a la LOE 14 años después; una ley fracasada que nos llevó a los más bajos niveles en los indicadores internacionales; pero lo peor de todo es el ataque que hace a las libertades: a la libertad de elección, a la libertad de enseñanza...», lamentó.

La campaña incluirá movilizaciones todos los martes en la puerta de los centros y pondrá lazos naranjas en las fachadas, concentraciones en el Congreso (en principio todos los miércoles), una recogida de firmas y tal como avanzó ABC, una caravana de coches en todo el país.

LA VANGUARDIA

Desconcierto en las escuelas al tener que asumir ahora la gestión de las PCR

CARINA FARRERAS, BARCELONA. 03/11/2020

Las direcciones de centros educativos acusan el cansancio de un septiembre y octubre intensos, con la organización del nuevo curso escolar que incluyen las medidas anti-Covid-19, la gestión de los casos positivos, el confinamiento de grupos, así como el trato con las familias. A los centros de secundaria, bachillerato y formación profesional se les pide ahora una vuelta de tuerca más: que asuman la recogida de muestras para los PCR de los adolescentes y se conviertan en rastreadores de sus contactos.

Esta medida, publicada por la Conselleria de Salut el pasado viernes 30, quiere aligerar de peso a la asistencia primaria sanitaria. Cada vez que hay un positivo en un grupo burbuja de un aula se toman muestras de todos los compañeros y del tutor del grupo, en la escuela o en el cap cercano, y se confina al grupo que recibe clases a distancia.

A partir de ahora, el centro recibirá un kit de automuestras consistente en un bastón de algodón de palo largo y un tubo estéril. Los alumnos, a partir de 12 años (los menores de esa edad continúan con el sistema actual) se introducirán el bastón en la nariz unos segundos, con la supervisión del docente, que etiquetará y guardará la muestra en una nevera. El centro será informado de los resultados de los PCR y lo comunicará a las familias.

El gestor de Covid-19 del CAP traspasa asimismo al centro las llamadas de seguimiento a los contactos de los grupos estables de los grupos burbuja. "Serán las direcciones, en coordinación con los referentes Covid-escola, lo que informarán a los progenitores de los contactos sobre los tiempos y medidas de la cuarentena", según las indicaciones de los servicios epidemiológicos. Estas pueden reducirse a dos, al principio y la final de la cuarentena.

"¡Solo nos falta eso!", exclama Rosa Clar, directora del instituto Tordària, en Tordera. "Recoger las muestras y vigilar que las toman bien, pasar al aplicativo traçacovid, organizar horarios, pagos...". Los directores están 24 horas disponibles y eso incluye los fines de semana. "Comprendo que el sistema sanitario está saturado y

todos tenemos que poner de nuestra parte pero son tantas horas...”, añade. Y los directores no han visto aumentadas las horas de gestión en este curso, a pesar de que las reclamaron en previsión de la pandemia.

Escuelas de Girona ya están supervisando la toma de muestras de los alumnos después de haber recibido material formativo audiovisual. “Esto alivia al sistema sanitario y da más capacidad de detección. El riesgo son los falsos negativos, por una mala toma” apunta Eva Palau, regidora de Salud en el Ayuntamiento. “Las escuelas lo han hecho muy bien –continúa–, la tasa de infección es bajísima, y eso es posible gracias al enorme esfuerzo de las direcciones a las que ahora se les pide más”. Como los sanitarios, pero sin tanto reconocimiento.

Por otra parte, los centros se mantienen a la espera de recibir nuevas instrucciones que concreten mejor la reducción de la presencialidad en bachillerato y FP, ya que Educació se remite a una resolución de junio y a unos planes de educación híbrida que no estaban pensados para una sola etapa educativa, sino para todo el centro, y eso complica los horarios de docentes. Y muchos centros ni siquiera habían diseñado entonces un escenario de hibridación, sino en un plan presencial y otro online. Las instrucciones son reducción al máximo la presencialidad, pero garantizando el 50% de la misma.

A excepción de algunos centros que ya han implementado la virtualidad, los institutos se han dado esta semana para diseñar nuevos modelos, que deben aplicar todo el trimestre. El Consorci d'Educació realizó una nota aclaratoria para las escuelas de Barcelona (pidiendo que se garantice las clases presenciales a los más vulnerables) y Educació recomienda que se opte por un sistema por turnos (día sí, día no) y no por franjas horarias.

A los directores les preocupa no solo la discontinuidad educativa, sino también la desigualdad en la presencialidad entre centros. Unos alumnos solo van la mitad de la semana y otros no van a la escuela un día, o las horas de las optativas. Además, cuestionan la oportunidad de reducir el único espacio social que les queda a los jóvenes, la escuela, y la posibilidad de que estos se vean en grupos sin tomar las medidas que sí cumplen en el centro.

El horario online, que entienden deben implementar, evita posibles contagios, pero pierde calidad en la formación, rompe rutinas escolares, desprotege al alumno con necesidades especiales y abre el riesgo al abandono escolar.

 eldiario.es

El Gobierno corregirá las limitaciones que Wert impuso a la FP Básica y dará a sus alumnos directamente el título de la ESO

Educación va a remodelar la FP y dará el título de la ESO a quién acabe la Formación Profesional Básica, flexibilizará las enseñanzas para que no todas tengan por qué durar lo mismo y creará una especie de másteres de la FP; además, casi 30.000 profesores técnicos 'ascenderán' al cuerpo de Secundaria

Daniel Sánchez Caballero. 3 de noviembre de 2020

El Gobierno va a darle la vuelta a la Formación Profesional (FP). Como han hecho prácticamente todos los Ejecutivos –aunque con una dotación económica prevista récord, si se cumple–, el Ministerio de Educación quiere darle importancia y prestigio a esta vía formativa, que no tiene mucho prestigio en España a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos de nuestro entorno. “Es una de las grandes prioridades del Gobierno y va a salir muy potenciada”, asegura Mari Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso.

Para ello se incluirán varias medidas en la LOMLOE, que tramita estos días el Congreso, y se creará a posteriori una ley específica para la FP, según ha podido saber este periódico. Entre las principales novedades que pretende introducir el Gobierno está que el alumno que se gradúe en la Formación Profesional Básica (FPB) obtenga directamente el título de la ESO (hasta ahora no lo hacía) y crear una especie de másteres de especialización para la FP media y superior. Además se flexibilizarán los estudios, de manera que no todos duren necesariamente dos años como ahora y habrá más tiempo para completarlos; los profesores técnicos de FP ascenderán al cuerpo de profesores y catedráticos de Secundaria, una medida reclamada por este colectivo y que afectará a unos 30.000 profesionales; y se agilizará “la detección de las necesidades de formación en cada sector productivo” para crear títulos adaptados a lo que pide el mercado con mayor celeridad.

La motivación detrás de esta reforma, que dará toda la gestión de la FP al Ministerio de Educación (actualmente tiene una parte, orientada al empleo, que gestiona Trabajo) es que España tiene demasiados trabajadores no cualificados y pocos con cualificación intermedia, según explicó el presidente, Pedro Sánchez, durante la presentación de las líneas gruesas del plan hace unos meses. La composición del colectivo de

trabajadores del país no responde a las necesidades de empleados que va a tener en los próximos años, según los cálculos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

Actualmente, casi la mitad de los 23 millones de personas que componen la población activa (un 48%, en concreto) tiene un nivel de formación que no les capacita profesionalmente, según datos del Gobierno. Frente a esta realidad, el país necesitará en 2025 que la mitad de sus trabajadores tengan una cualificación intermedia y un 14% de empleados con baja cualificación. Pero la foto fija muestra otra realidad: actualmente España no llega al 26% de personas con cualificación intermedia, pero supera el 35% con baja cualificación. La solución está en la FP, cree el Gobierno.

De la FPB al Bachillerato

Una de las principales novedades que va a presentar la nueva ley educativa es que la Formación Profesional Básica (FPB) –una etapa que se inventó el exministro del Gobierno José Ignacio Wert para **aparcar** a los alumnos de 15 años con problemas de rendimiento escolar, según denunció en su momento la comunidad educativa– dará directamente cuando se concluya el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), lo que permitirá a los alumnos seguir progresando por el sistema educativo: a elegir entre el Bachillerato o la Formación Profesional de grado medio. Hasta ahora –después de pelearlo mucho, porque la FPB era en origen una vía muerta–, un graduado en FPB no tenía opciones: o más FP, de grado medio, o a trabajar. Excepcionalmente, si los profesores decidían que cumplía los objetivos, podía titular en Secundaria. La conclusión de la FPB también otorgará un título de Técnico Básico, que tendrá validez profesional.

El Gobierno también cambiará la estructura de los ciclos formativos. La idea, explican desde el ministerio, es avanzar hacia una "organización modular de las enseñanzas", un poco al estilo de la Universidad, pero además con una "duración variable" en función de las necesidades de cada perfil profesional. Se acabó la uniformidad de que todos los ciclos se extiendan por dos años sin excepciones. Otra novedad que se introduce es que "todos los ciclos formativos incluirán una fase práctica dual", al estilo de la FP Dual, una modalidad que está demostrando una gran empleabilidad aunque sigue siendo muy minoritaria. Los cambios más académicos se complementarán con la creación de unos cursos de especialización posteriores para graduados, una especie de másteres como los de la Universidad.

Martínez Seijo destaca también el desembarco de la inclusión que habrá en la FP. "Hasta ahora, la inclusión se trabajaba solo en las etapas obligatorias [de Infantil a la ESO]", explica. "Ahora se contempla también para el Bachillerato y la FP", añade. Además de introducir las adaptaciones metodológicas que ya se realizan en esas otras etapas y de provisionar una oferta específica de plazas si fuera necesario, los alumnos con necesidades educativas especiales podrán estudiar hasta los 21 años como medida para evitar el abandono.

Novedades para los profesores

La reforma de la FP también trae novedades para los profesores. Los profesores técnicos de FP sufrirán un 'ascenso'. Este colectivo de docentes está actualmente en una especie de limbo y en una situación de agravio comparativo, denuncian, respecto a los de Secundaria. A estos técnicos se les exige un grado y el máster de formación del profesorado que deben tener sus compañeros de la ESO y Bachillerato, pero están en un cuerpo docente inferior. El Ejecutivo dará respuesta a sus demandas por la vía de incluirlos dentro del cuerpo de profesores y catedráticos de Secundaria, de manera que se asimilen a sus compañeros.

"El Gobierno, de acuerdo con las Administraciones educativas, establecerá el procedimiento para el ingreso en este cuerpo, así como para el acceso al mismo del profesorado técnico de formación profesional que estuvieran en posesión en la fecha de entrada en vigor de esta Ley Orgánica de la titulación de grado universitario, o equivalente a efectos de acceso a la función pública, en las condiciones que se determinen", dice la LOMLOE. La medida afectará a 28.359 profesores, según calcula el PSOE.

Respecto al profesorado, la ley contempla también la posibilidad de contratar, en régimen laboral, a "profesores especialistas", profesionales del sector productivo asociado al título correspondiente, una figura similar a la de los profesores asociados en la Universidad, profesionales de prestigio en su rama que imparten docencia concreta en su especialidad. "Esta cuestión constituye un salto enorme en la aproximación a la realidad de la empresa y al ámbito laboral de la formación, facilitando la interacción de los profesionales del sector en los centros de Formación Profesional", explican desde el ministerio.



PSOE, Podemos y ERC negocian que el castellano deje de ser lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña

La enmienda transaccional a la 'ley Celaá' dificultará el camino a los padres que quieran pedir castellano en los tribunales

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Martes, 3 noviembre 2020

PSOE, Unidas Podemos y ERC están negociando en el Congreso una enmienda transaccional a la *ley Celaá* que elimina de la reforma educativa que el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.

El proyecto de ley aprobado en marzo en Consejo de Ministros recogía el mismo redactado que la Lomce: "Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en

castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable".

Esta última frase sería la que desaparecería de la ley, según ha adelantado *El País*, y se sustituiría con una referencia a que las CCAA deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los Estatutos de Autonomía, tal y como pedían los partidos nacionalistas.

Fuentes de Unidas Podemos explican que esta enmienda se está negociando, "pero aún no está cerrada". "Estamos en ello", recalcan, y remiten a una próxima reunión de la ponencia de la Lomloe que previsiblemente se celebrará lugar el jueves. Fuentes de ERC confirman que el objetivo de la enmienda es "blindar el catalán como lengua vehicular".

El resto de grupos parlamentarios no tenía constancia de esta enmienda, una concesión de última hora a los nacionalistas catalanes que supone es la puntilla al castellano en la escuela, ya seriamente amenazado en la *ley Celaá*.

Porque el Gobierno ha entregado a Cataluña la capacidad de determinar qué asignaturas se dan en castellano y cuáles se imparten en catalán y en el proyecto de ley se ha eliminado la obligación establecida por la Justicia de impartir clases en castellano en una proporción "razonable".

SIN GARANTÍAS PARA ESTUDIAR EN CASTELLANO

No se contempla ningún mecanismo para garantizar una enseñanza en castellano a las familias que lo reclamen, fiándolo todo a la buena fe de las autonomías para aplicar "los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo", "promover" la "realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido" e "impulsar" la adopción por parte de los centros de "las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas".

Lo único que establece la Lomloe es que "al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente". ¿Pero cómo se garantiza?

Este cambio de ahora supondría la estocada mortal al castellano, que es lengua vehicular, junto al catalán, en las escuelas de Cataluña, tal y como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional. El artículo 3 de la Carta Magna reconoce el carácter oficial del castellano, lo que lleva aparejado que sea lengua vehicular de la enseñanza. Numerosas sentencias judiciales han establecido la obligación de ofrecer al menos el **25%** de las horas semanales de clase en castellano, el equivalente a una asignatura más, además de la Lengua Castellana y Literatura, y la Generalitat incumple sistemáticamente estos fallos judiciales.

El diputado de ERC Gabriel Rufián se ha apresurado a celebrar la medida en Twitter. "Más allá del ruido hay política", ha expresado.

ERC defiende que su modelo de inmersión lingüística no se puede poner en marcha con el uso "simultáneo de las lenguas oficiales y cooficiales". Por ello pedía que la ley del Gobierno central fuera "coherente con las previsiones del Estatuto de Autonomía" para que el catalán fuera la única lengua vehicular. Se agarra a que el Tribunal Constitucional tumbó en 2018 el mecanismo establecido por José Ignacio Wert para escolarizar en colegios privados a los alumnos que hubieran pedido un aprendizaje también en castellano. Este fallo, sin embargo, no quita al castellano su carácter de lengua vehicular de la enseñanza. Pero quitarlo de la Lomloe dificultará los recursos de las familias a la hora de conseguir en los tribunales el mínimo del 25% de horas en castellano.

"CESIÓN AL INDEPENDENTISMO POR LOS PRESUPUESTOS"

"Lo que pretende la enmienda en un pacto gravísimo es dificultar que los tribunales reconozcan los derechos, tal y como se viene haciendo hasta ahora. Tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han reconocido el carácter vehicular del castellano. Lo que pretenden es tratar de dificultar el acceso a las familias a los tribunales para que el castellano no tenga un amparo jurídico", interpreta José Domingo, de Impulso Ciudadano, asociación que defiende a las familias que quieren que sus hijos también puedan estudiar en castellano en las escuelas catalanas.

"La enmienda va dirigida a quitar derechos, no a reconocerlos. Es falso que la actual regulación impida modelos de inmersión lingüística, lo que impide es modelos de inmersión lingüística obligatoria para todos los alumnos, y eso es lo que pretenden ERC, los grupos vascos y Compromís en sus enmiendas. El PSOE y Unidas Podemos se han plegado de una manera sumisa a ello", añade Domingo.

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, otro colectivo que también defiende un aprendizaje equilibrado en ambas lenguas, denuncia que "este pacto político por intereses partidistas atenta contra los derechos de todos los alumnos catalanes, ya sean catalanohablantes como castellano hablantes, y

su único objetivo es facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del independentismo".

europapress.es

El Gobierno aprueba una inversión de 33 millones en programas de cooperación territorial educativos de FP con CCAA

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), ha aprobado este martes una inversión de 33 millones de euros destinados a diferentes programas educativos de cooperación territorial con las comunidades autónomas en el ámbito de la Formación Profesional. Estos acuerdos fueron aprobados el pasado 21 de octubre por la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación.

Esta inversión distribuida entre las comunidades irá destinada a programas de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales (3.481.170 euros), Formación Profesional Dual (9.000.000 de euros), acciones de Calidad de FP del Sistema Educativo (4.634.960 euros), programa REACTIVAFP 20-21, dentro de las acciones para el fomento de la calidad de la FP, (10.583.870 euros), así como a iniciativas de formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado de FP con 5.300.000 euros. Estos fondos se suman a los previstos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional.

El periodo de ejecución está comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, y su justificación se realizará antes del 31 de marzo de 2022.

Los criterios de distribución empleados en el reparto de estos fondos son, entre otros, el número de alumnado, profesores y centros de FP, la tasa de riesgo de pobreza, el número de municipios con menos de 10.000 habitantes, la tasa de abandono educativo temprano, la cantidad de empresas participantes en FP Dual, la brecha de género en las titulaciones, las personas en búsqueda de empleo o la dispersión de la población activa y de las Administraciones Públicas en cada territorio.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

En el caso de las actividades para la Evaluación y Acreditación de las Competencias Profesionales, las comunidades autónomas se comprometen a realizar acciones destinadas al desarrollo del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas durante la experiencia laboral.

Además, llevarán a cabo iniciativas específicas para la puesta en marcha de convocatorias de acreditación y ofertas específicas de formación para quienes superen los procedimientos de acreditación y quieran completar su formación no acreditada y lograr una titulación de FP.

También se cubrirá con estos fondos la formación de asesores, evaluadores y orientadores, así como el desarrollo de aplicaciones informáticas y bases de datos necesarias para agilizar estos procesos e implementar una sede abierta de manera permanente para cualquier persona interesada.

IMPULSO A LA FP DUAL

Para el impulso a la Formación Profesional Dual, las comunidades desarrollarán proyectos colaborativos con empresas y de apoyo a PYMES y micro PYMES. Asimismo, crearán plazas y convocatorias de becas para alumnado durante el tiempo en que se realiza la formación en la empresa.

También se recogen en este programa las ayudas para la movilidad y estancias de estudiantes y profesorado en empresas de diferentes localidades a la del centro educativo, además de la implantación de ciclos formativos de FP básica, Grado Medio y Grado Superior en centros.

ACCIONES DE CALIDAD EN FP

En el programa de Calidad en Formación Profesional del Sistema Educativo se incluyen acciones de difusión de la calidad de la FP como la organización y participación en campeonatos autonómicos, estatales, europeos y mundiales de estas enseñanzas, o la creación y desarrollo de la Red de Referencia Española de Calidad en FP.

Además, las comunidades se encargarán de acciones de mejora en centros, profesorado y alumnado para reforzar la colaboración con el sector productivo, y destacan las labores de promoción de innovación para el alumnado, autoempleo y emprendimiento o proyectos integrales de mejora de centros, entre otros.

REACTIVAFP 20-21 DURANTE LA COVID-19

Teniendo en cuenta la situación excepcional provocada por la pandemia, el Ministerio de Educación y FP pone en marcha el programa REACTIVAFP 20- 21, vinculado al fomento de la calidad de la enseñanza, para el refuerzo y apoyo de los alumnos de FP Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional.

Con este montante, las comunidades autónomas podrán incrementar el cupo de profesores para desdobles, así como las horas lectivas.

El programa también prevé el diseño de acciones complementarias para el alumnado con dificultades o riesgo de abandono, actuaciones en talleres, programas individualizados de orientación profesional y apoyo educativo o el refuerzo de los planes locales de prevención y lucha contra el abandono escolar.

Además, las comunidades autónomas impulsarán proyectos de innovación en los centros para el diseño y manejo de recursos online de formación profesional, formación para el profesorado a distancia para las enseñanzas técnicas y acuerdos para el uso de mecanismos digitales utilizados en la empresa de cada sector y que fueran de utilidad en el proceso formativo.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE FP

En cuanto al programa de formación del profesorado, se establecen cursos destinados a las 26 familias profesionales de la Formación Profesional, así como aquellos relacionados con la orientación profesional y los que incidan en la mejora de la FP y en la Formación a lo Largo de la Vida. También podrán cubrir con estos fondos el desarrollo de aplicaciones informáticas y bases de datos aplicables a acciones para la formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado. La financiación de estos programas en el País Vasco, debido a su Régimen Foral de financiación, se realiza a través de los recursos de la comunidad autónoma.

LA VANGUARDIA

La crisis acentúa las carencias de la educación en España

RAMÓN ÁLVAREZ, BARCELONA. 03/11/2020

“El problema no es encontrar licenciados en Economía o en Derecho con buenos currículos a los que además ya sigues formando en la empresa, sino a gente que sepa explicar en público lo que está haciendo. Cada vez vemos más cómo las nuevas generaciones no tienen capacidades de comunicación, de trabajo en equipo, de resiliencia... Porque posiblemente nadie se ha ocupado de ello”. La reflexión de Ramón García Espeleta, gerente de la Plataforma Virtaula CaixaBank, revela uno de los problemas que se encuentran hoy en día tanto las empresas españolas de cualquier sector como las promociones que salen cada año de la educación secundaria, la formación profesional o la universidad para tratar de adentrarse en el mercado laboral sin un rumbo fijo.

No se trata ya de tener las competencias profesionales que exige cada sector y que la pandemia ha hecho evolucionar a un ritmo desaforado –que también–, sino de unas capacidades y habilidades que se dan por descontadas o que, simplemente, el modelo educativo no tiene en consideración, pero que acaban marcando la diferencia.

Son la que explican, en buena medida, la paradoja del mercado de trabajo en España, el país de la OCDE con la mayor tasa de desempleo juvenil –un 43,9% de parados entre los menores de 25 años, el triple de la media de la UE–, el que registra un mayor nivel de sobrecualificación de la UE entre los jóvenes que han conseguido encontrar trabajo –un 36,8% según el último Informe CYD–, a la vez que es el que tiene más jóvenes infracualificados –casi un 30% sin más estudios que la ESO– y el segundo por detrás de Grecia en *ninis*, con un 22% de jóvenes que ni estudian ni trabajan frente al 15% de la OCDE. La anterior crisis elevó este porcentaje al 26% en el 2009.

“Nos encontramos ante un problema grave, estructural y bien conocido, pero que nunca se ha abordado con la convicción y el liderazgo político necesario. Es evidente que el actual sistema educativo no funciona y apenas tiene en cuenta las necesidades de la empresa. Y el problema añadido con el que nos encontramos ahora es que la salida de esta crisis tiene que apoyarse en una nueva generación de profesionales”, considera Jordi Canals, exdirector general de IESE-Universidad de Navarra y coautor del estudio editado por la propia escuela de negocios *Las competencias profesionales del futuro: un diagnóstico y un plan de acción para promover el empleo juvenil después de la Covid-19*.

Elaborado mediante exhaustivas encuestas a responsables de 130 empresas de diferentes sectores representativas de la economía española, este estudio incide tanto en los conocimientos y capacidades formativas que ha impulsado la actual crisis, ya apuntados antes de la irrupción de la pandemia, sin que el sistema educativo haya tenido la agilidad de ofrecer una respuesta suficiente y adecuada, como en esas otras habilidades conocidas como *soft skills* que requiere la empresa.

“El sistema educativo no ha podido responder con la funcionalidad y la velocidad deseables a los retos planteados. El 83% de los empleadores consideran que afrontan problemas serios al incorporar candidatos a ciertos puestos debido a las limitaciones de sus perfiles profesionales. Las empresas indican que no encuentran de manera generalizada las competencias necesarias. Estas dificultades afectan tanto a los conocimientos como a las capacidades y actitudes de los candidatos. Para los empleadores, cubrir la brecha de competencias es una responsabilidad compartida de centros educativos, gobiernos, empresas y familias”, indica el estudio.

Entre esos nuevos conocimientos requeridos, estimulados por la digitalización de la economía y la denominada revolución industrial 4.0, destacan la gestión y el análisis del *big data*, el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial, el manejo de robótica o el marketing digital, ámbitos en los que según este estudio hasta un 90% de las empresas que precisan especialistas no los encuentran o tienen serias dificultades para ello.

Aunque dentro de estos conocimientos no adquiridos o no completados en la etapa formativa destacan también los idiomas, especialmente en los candidatos procedentes de la FP, y la cultura general, también en el caso de los universitarios. Respecto a las capacidades que quedan fuera de planes de estudio y proyectos curriculares, el mismo informe apunta las principales carencias que las empresas encuestadas encuentran entre sus aspirantes: resiliencia, iniciativa, visión de conjunto, habilidades comunicativas, emprendimiento, liderazgo y negociación.

“España está en las últimas posiciones del ranking comunitario en cuanto a las capacidades alcanzadas en la enseñanza y su adaptación a las necesidades del mercado. El paro juvenil contrasta con las plazas que quedan vacantes y en un momento de crisis como el actual debemos colocar la educación como un elemento clave en la recuperación y acabar de una vez por todas con las deficiencias del sistema que cada vez se hacen más evidentes”, señala Silvia Miró, directora de Polítiques d'Ocupació i Formació de Pimec. En este sentido, la representante de la patronal catalana de las pymes reclama unos planes de estudio que cuenten con la implicación de los agentes sociales y el tantas veces proclamado y siempre aplazado desarrollo de una FP prestigiada y en contacto directo con el mercado laboral. “No tenemos un modelo de orientación integrado ni las herramientas que permitan conocer las necesidades, presentes y futuras, del mercado laboral. La burocracia va mucho más lenta que la tecnología, que es la que marca el ritmo del mercado”, añade.

Desde el propio ámbito de la formación profesional, Rodrigo Plaza, docente y responsable de la Federación de Educación de CC.OO. en Catalunya, insta al despliegue y dotación de leyes específicas que, como la catalana, llevan años aprobadas y alerta de la brecha que se está abriendo entre el modelo público y el privado en ámbitos como la formación online. En Catalunya sólo hay un centro público que ofrece este modelo, frente a los 37 privados, con un crecimiento que ha alcanzado en pocos cursos el 15.500% en los grados superiores. Asimismo, algunas academias forman en apenas semanas y también a distancia a programadores y desarrolladores que suelen acceder al mercado laboral con más éxito que los alumnos de especialidades de FP.

“Las empresas tienen muy claro que necesitan personas cualificadas y nosotros somos quienes se las podemos ofrecer. Debemos ir hacia un modelo de una única formación profesional que cuente con la implicación de la empresa y tener la capacidad de orientar a los chicos y chicas con inquietudes en nuestros ámbitos antes de que decidan cursar Bachillerato por inercia, a veces porque se imparte en el mismo centro donde cursan la ESO”, señala Àngel L. Miguel, director del instituto Pere Martell de Tarragona, centro pionero en la FP dual.

En educación superior destaca la puesta en marcha de iniciativas como el Libro Blanco de Reinversión Profesional que impulsa EAE o, en el mismo mundo de los negocios, los programas post-Covid de EADA, la Executive Education de la Barcelona School of Management-UPF, o nuevas especialidades como el Bachelor in Transformational Business and Social Impact de Esade-URV, ideado por Mònica Casabayó y dirigido por Xavier Ferràs, con un programa innovador que combina tecnología, humanidades y negocios con el objetivo de que el alumno desarrolle sus propias capacidades multidisciplinares.

“Los conocimientos no tienen nada que ver con los de hace 10 o 20 años, un ingeniero de telecomunicaciones graduado en los años 90 no sabía nada de telefonía móvil. El alumno tiene herramientas propias que no tenía antes y es el momento idóneo para hacer un cambio disruptivo en un modelo educativo, que viene del siglo XII. Ya no hacen falta ni clases, ni asignaturas, ni contenidos. Hay que formar capacidades más que contenidos explícitos”, señala Ferràs.

Los claroscuros de las prácticas

Las prácticas en empresas se han convertido en la principal vía de acceso al mercado laboral de los estudiantes del modelo dual de la Formación Profesional, en el que el centro de trabajo asume también una función formadora, si bien la integración en la empresa de los alumnos en prácticas de la FP convencional y los estudios universitarios sigue siendo minoritaria en muchas especialidades. De ahí que Administración y agentes sociales aboguen por este primer modelo, si bien sus lagunas son considerables.

Los sindicatos mayoritarios del sector denuncian que muchas empresas que se suman al modelo dual lo utilizan como una vía de reclutamiento y que muchos estudiantes no pueden acceder a las prácticas que eligen como primera opción porque es la empresa quien realmente escoge. La patronal, por su parte, apela al coste que supone para la empresa asumir parte de la formación, sin ningún incentivo más que la contratación de futuros empleados.

A día de hoy se calcula que sólo un 1% de las empresas españolas tiene alumnos en prácticas, si bien la mayoría de ellas son grandes empresas, cuando las pymes representan casi el 90% de la economía.

La 'ley Celaá' acentúa su asfixia a la concertada: blinda aumentar las plazas pero sólo para los colegios públicos

Los colegios que escolaricen a los alumnos del mismo barrio tendrán preferencia en los conciertos

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Martes, 3 noviembre 2020

La **ley Celaá** está incrementando su asfixia a la escuela concertada a su paso por el Congreso. Una enmienda transaccional que se ha aprobado este martes entre el PSOE, Unidas Podemos y Más País establece que las comunidades autónomas "promoverán un incremento progresivo de puestos públicos escolares en la red de centros de titularidad pública", dejando de lado los colegios privados sostenidos por fondos públicos.

Este redactado supone, en la práctica, la "desaparición" a largo plazo de este modelo educativo en el que estudia el 25% del alumnado y "la prueba material de que quieren acabar progresivamente con la concertada, porque ya no será necesaria para garantizar el derecho de todos a la educación", según interpreta Luis Centeno, de la patronal Escuelas Católicas.

La enmienda ha salido adelante por 20 votos a favor y 16 votos en contra durante la ponencia de la llamada Lomloe. El texto confirma la eliminación en el proyecto de ley de la "demanda social", un concepto recogido en la Lomce del PP que permite a los centros concertados sacar más plazas si así lo demandan las familias. Y también les da la razón a los centros cuando una comunidad autónoma recorta unidades concertadas. Por ejemplo, recientemente el Tribunal Supremo ha dado la razón a unos colegios de la Comunidad Valenciana que recurrieron contra la retirada de conciertos de hace tres años y abre la puerta a recuperarlos ahora en decenas de aulas.

El redactado que se ha acordado en el Congreso es mucho peor para la concertada que el que salió del Consejo de Ministros. Porque, además, ha añadido que, en la programación de la oferta de plazas, "las CCAA armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas". Este "mediante una oferta suficiente de plazas públicas" es lo que se apostilla ahora, excluyendo a la concertada.

En otro de los apartados que modifican el artículo 109, se establece, asimismo, que, "en el marco de la programación general de la red de centros, las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población".

Hay más cambios. Otra de las enmiendas acordada entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC, aprobada por 21 votos a favor y 15 en contra, contempla que los colegios que escolaricen a los alumnos del mismo barrio tengan preferencia para acogerse al régimen de conciertos. Hasta ahora, esta prioridad sólo la tenían los centros que atienden a poblaciones escolares de condiciones económicamente desfavorables, las que realizan experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo y las que funcionan en régimen de cooperativa.

Se ha añadido el requisito de la escolarización de proximidad para evitar que se creen colegios guetos, aunque esta medida dificultará que un alumno de un barrio desfavorecido económicamente pueda escolarizarse en un centro educativo de un barrio pudiente.



Celaá niega que el castellano sea moneda de cambio para dar luz verde a los Presupuestos

Por su parte, Montse Bassa, portavoz de Educación de ERC, compareció minutos después de acabar la intervención de la ministra y dijo que la enmienda «no tiene nada que ver con los Presupuestos, yo estoy en Educación y me limito intentar a que el sistema derogue la Lomce y esto no lo vamos a hacer a cualquier precio»

JOSEFINA G. STEGMANN. MADRID 04/11/2020

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha evitado dar su palabra de honor sobre si la enmienda a la «ley Celaá» que quita la referencia a que el castellano sea lengua vehicular en toda España pactada por PSOE, Podemos y ERC y que, previsiblemente, se aprobará mañana tiene que ver con la negociación de los Presupuestos.

Por su parte, Montse Bassa, portavoz de Educación de ERC, compareció minutos después de acabar la intervención de la ministra y dijo que la enmienda «no tiene nada que ver con los Presupuestos, yo estoy en Educación y me limito intentar a que el sistema derogue la Lomce y esto no lo vamos a hacer a cualquier precio».

Por su parte, Celaá dijo que «nos remitimos a los hechos: el castellano y las lenguas cooficiales son de lenguas de trabajo en los centros educativos de España, en todos ellos. La actuación del Ministerio de Educación es

autónoma, no depende de nada, se trabaja para el bien de los alumnos, para mejorar su capacitación profesional y enfrentarse a un mundo difícil», señaló la ministra en un briefing ofrecido a los medios para detallar los presupuestos de Educación.

Añadió sobre la misma cuestión que, «hicimos un proyecto de ley que está en fase de tramitación; lejos queda del objetivo de este ministerio de desalojar al castellano; el castellano y las lenguas cooficiales son objeto de tratamiento en las escuelas y seguirán siéndolo de acuerdo a la Constitución y a los estatutos de autonomía para llegar al objetivo de que al final de la educación obligatoria todos los alumnos desarrollen su destreza del castellano y sus lenguas cooficiales». Añadió, tal como apuntaron fuentes parlamentarias del PSOE a ABC que «para eso se incorporan medidas compensatorias de tal manera que en zonas donde haya necesidad de fortalecer el castellano se haga».

Tal como avanzó ABC, Celaá anunció que se destinarán 200 millones de euros para la creación de plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, prioritariamente uno o dos años, dejando afuera a la concertada a la que solo se le destinan fondos para un programa de refuerzo en Ceuta y Melilla (PROA+).

El secretario de Estado, Alejandro Tiana, también presente en el briefing, negó cualquier ataque a la concertada y dijo que «es un error; en realidad lo que queremos es subir el número de plazas para atender a los niños menores de 3 años. En España estamos en tasas de cobertura de en torno al 33 por ciento y querríamos llegar a una cobertura similar a la de las comunidades con tasas más altas, como el País Vasco, con 53 por ciento».

«Tenemos que atenderlo, es el sector más vulnerable que necesita escuelas públicas y gratuitas»

Añadió que «estamos hablando de creación de plazas no de sustitución de plazas; además los datos que tenemos dicen que el sector de población que tiene más problemas con la cobertura es el de menor nivel de renta, por tanto, el objetivo es cubrir más plazas para hacer efectiva la igualdad de oportunidades; lo que tenemos que atender es el sector más vulnerable que necesita escuelas públicas y gratuitas».

Por su parte, Celaá dijo que no hay ningún ataque al sector: «Lo que le he dicho siempre: el proyecto de ley no hace ninguna ataque a la concertada, es plenamente consciente de la libertad de elección de las familias y de que la prestación del servicio público se realiza a través de los centros públicos y privados concertados. Este proyecto mantiene el compromiso con la legislación vigente y con la artículo 27 de la Constitución».

europapress.es

Educación destinará 1.013 millones para 250.000 dispositivos móviles contra la brecha digital

Con los 200 millones destinados a la educación de 0 a 3 años el Ministerio quiere crear en 2021 unas 21.800 plazas públicas

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación y FP destinará 1.013 millones de euros para luchar contra la brecha digital en las aulas. Según ha explicado la ministra Isabel Celaá, esta partida servirá para entregar a las comunidades autónomas unos 250.000 dispositivos móviles, que se unen a los 500.000 previstos en el primer Plan Educa en Digital.

En rueda de prensa, para explicar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 que corresponden a su departamento, Celaá ha señalado que los 5.697 millones (incluyendo los 1.853 de los Fondos Europeos) tienen un triple objetivo: la promoción de la equidad, el impulso de la Formación Profesional y la digitalización de la Educación.

Además del reparto de equipos digitales, el Ministerio tiene previsto destinar 827 millones a la instalación de 236.318 aulas digitales interactivas y otros 31 millones para la capacitación y soporte para el uso de los Sistemas Digitales Interactivos (SDI) en las aulas.

En este sentido, también está prevista la formación de docentes de FP en digitalización aplicada a los sectores productivos, que contará con una inversión de 2,5 millones de euros que, según ha indicado la responsable de Educación, permitirá formar a 25.281 docentes.

El acceso de las aulas a la digitalización forma parte, también, de las políticas que el Ministerio quiere impulsar para una mayor equidad, un aspecto que, en el total del presupuesto destinado a promocionarla suma 2.360 millones de euros.

INVERSIÓN CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR

Una parte importante de este esfuerzo, según ha indicado la responsable de Educación, corresponde a las becas y ayudas al estudio, para las que se destinarán 2.090 millones. "El mayor presupuesto habido hasta ahora", ha destacado. Según ha explicado, con esta inversión, que supone un incremento de 515 millones, el Gobierno continúa su reforma del sistema.

Precisamente, tras conocer este aumento, padres y alumnos coincidieron en celebrar el incremento de la partida aunque discreparon en el objetivo de las ayudas. Así, mientras la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa) destacó a Europa Press que las becas

deben facilitar el estudio a aquellas personas con menos recursos pero siempre ligadas al esfuerzo y resultados académicos, el Sindicato de Estudiantes consideró que se quedaban "cortas" y pedían la gratuidad de toda la enseñanza universitaria.

El Ministerio también prevé dedicar 200 millones de euros a la creación, en 2021, de 21.794 plazas de Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública.

Celaá ha destacado, además, que el objetivo de equidad supone seguir trabajando en la prevención del abandono escolar. Para ello se prevé invertir 80 millones de euros en 1.800 centros de especial complejidad educativa, a través del Programa PROA+.

Del mismo modo, se destinarán 30 millones de euros a la creación de 618 Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado educativamente vulnerable.

CAMBIOS EN LA FP

En cuanto al último objetivo del Ministerio, Celaá ha explicado que se trata de impulsar la FP, "garantizando su papel como eje vertebrador de la economía y del Estado de bienestar". Para 2021, el presupuesto para este sistema incluye por primera vez partidas correspondientes a la Formación Profesional para el Empleo vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyas competencias asume en esta legislatura el Ministerio de Educación.

En total, la FP española contará con una inversión de 1.628 millones de euros, de los cuales 974 corresponden a la FP para el empleo, mientras que a la FP del sistema educativo se destinan 654 millones. Esta última cifra, supone un incremento del 349% respecto a enero de 2020.

Tal y como ha explicado la ministra, de esta inversión, 127 millones de euros permitirán la acreditación de las competencias básicas y profesionales de unas 532.800 personas; 64 millones se destinarán a la creación de 47.400 plazas nuevas de FP (con el objetivo de alcanzar las 200.000 plazas en cuatro años); se invertirán 170 millones para la conversión de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado superior en bilingües; y 30 millones irán a la oferta modular formativa en empresas de la que se beneficiarán 125.000 trabajadores ocupados y desempleados.

UNA SUBIDA "HISTÓRICA"

Por otra parte, Celaá ha informado de que, 225 millones de euros de los PGE del Ministerio estarán destinados a la actividad educativa en Ceuta y Melilla (lo que supone un aumento del 11,7% con respecto a enero de 2020).

Del mismo modo, la acción educativa en el exterior contará con una partida de 119 millones de euros para difundir la educación, la lengua y la cultura españolas a más 40.000 alumnos en 27 países. A la formación permanente del profesorado se destinarán 3,8 millones de euros (2,25 millones más respecto al presupuesto de 2020).

Finalmente, y en líneas generales, la ministra ha destacado el aumento de la partida para su Ministerio, que ha aumentado un 139% con respecto a los presupuestos con los que el departamento comenzó 2020. La responsable de Educación la ha calificado de "subida histórica" y, tras agradecer al presidente del Gobierno, su empatía hacia esta materia, ha señalado que la prioridad que este Gobierno con la Educación "está en las antípodas de los recortes y el abandono que sufrió el sistema educativo tras la crisis nanciera de hace una década".

EL PAIS

Las reformas estructurales y el Next Generation EU

Regar fondos sin reformar la educación sería como arrojar semillas a un terreno yermo

MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ. 04 NOV 2020

Los fondos del programa Next Generation EU son una gran oportunidad para la transformación de nuestra economía. En primer lugar, porque, dado su volumen, pueden constituir un impulso notable para la transición hacia una economía descarbonizada y digitalizada, y, por tanto, para subirnos al tren de la cuarta revolución industrial. Pero también porque pueden suponer un empujón para que nuestros gobernantes pongan en marcha, por fin, las reformas estructurales pendientes que necesita nuestra economía. Empujón que procedería no solo de la posible condicionalidad de estos fondos, sino también de la oportunidad que suponen al proveer la financiación necesaria para la implementación de algunas de estas reformas. Además, ahora son más necesarias que nunca, porque sin ellas las inversiones que se realicen no desplegarán todo su potencial transformador, y porque, dado el peligroso contexto de elevado endeudamiento público en el que nos vamos a encontrar, tenemos que transmitir confianza en el futuro y en la capacidad de crecimiento de nuestra economía, y eso solo se puede lograr con un programa de reformas ambicioso.

La lista de reformas estructurales que necesita nuestra economía es bien conocida, pero no está de más insistir en ella. En primer lugar, la del sistema fiscal, para dotarlo de racionalidad y coherencia, elevar su capacidad recaudatoria y reducir su efecto distorsionador sobre las decisiones de los agentes económicos. El problema no procede de que tengamos unos tipos impositivos bajos, sino de un mal diseño.

Las Administraciones Públicas constituyen otro de los ámbitos necesitados de una gran reforma, orientada a la búsqueda de la eficacia, la eficiencia y la reducción de costes y de burocracia. Las disfunciones observadas durante la pandemia a la hora de realizar grandes compras urgentes constituyen un ejemplo de las carencias de nuestra Administración en cuanto a su capacidad de gestión. Un funcionamiento eficiente de esta es fundamental para la productividad de la economía, y para ello se requiere la introducción de nuevas tecnologías y un sistema de incentivos y rendición de cuentas en los puestos de dirección semejante a la empresa privada.

Asimismo, se debe adelgazar considerablemente el volumen de regulaciones de todo tipo, sobre todo autonómicas y locales, que obstaculizan la actividad económica, y que muchas veces son perfectamente sustituibles por el libre juego de la competencia, del mercado y de la voluntad entre partes contratantes. Dentro de este apartado podemos incluir la creación de un auténtico mercado único nacional, que además de eliminar obstáculos a la actividad económica, mejoraría la competitividad de la economía por la vía del incremento de la competencia interior, al tiempo que favorecería el aumento del tamaño empresarial.

También se necesita una reforma valiente del mercado laboral. En los últimos años ha habido propuestas interesantes como la del contrato único o la mochila austriaca, aunque esta última parece muy difícil de implementar. En cualquier caso, quizás no haya que inventar nada nuevo, sino simplemente alinear nuestra regulación con la de los países de nuestro entorno. El desarrollo de un auténtico sistema de políticas activas de empleo es otra necesidad clave.

Si queremos que nuestro sistema productivo suba peldaños en la escalera tecnológica, una de las prioridades debe ser atraer inversión, tanto nacional como extranjera, hacia sectores de mayor contenido tecnológico. Para ello, el apoyo a proyectos empresariales mediante la aportación de recursos del fondo europeo debe acompañarse de una regulación que haga muy atractiva la asunción de riesgos y la inversión privada en estos sectores. También deberían replantearse algunas medidas que van justo en la dirección opuesta, como la subida de las cotizaciones sociales y del IRPF a los salarios altos, ya que constituyen un aumento del coste de la mano de obra cualificada, y, por tanto, un desincentivo a las actividades que hacen uso intensivo de ella. Al igual que la propuesta del Pacto de Toledo de cobrar impuestos a los robots, un disparate que nos condenaría definitivamente a ser una economía de baja productividad y bajo valor añadido. El sostenimiento del sistema de pensiones, si no queda otro remedio, tendrá que realizarse por la vía de la contención del gasto, no de sacrificar nuestro futuro.

Pero la gran reforma pendiente, la que en mi opinión debe ser la estrella de todas las reformas, es la educativa. España tiene unas tasas de fracaso escolar y de abandono temprano de los estudios impropias de un país desarrollado. El 30% de la población activa entre 25 y 39 años tiene un nivel de formación inferior a la secundaria completa, el porcentaje más alto de toda la UE, cuya media es del 13%. Nuestros jóvenes se encuentran siempre en los últimos puestos en los resultados de los informes PISA. No es exagerado decir que la formación es la carencia más grave de nuestra economía. Nunca mejoraremos nuestra productividad ni reduciremos nuestra dependencia de actividades de bajo valor añadido con estos mimbres. En definitiva, regar la economía con recursos multimillonarios sin realizar estas grandes reformas sería como echar semillas en un terreno yermo. Sería una oportunidad histórica perdida.

María Jesús Fernández es economista sénior de Funcas.

elPeriódico de Catalunya

ERC, PSOE y Podemos pactan prohibir que la concertada separe por sexo

El texto original de la ley instaba a financiar con fondos públicos "preferentemente" a los coles que no segregan niños y niñas

La enmienda acordada entre los tres grupos parlamentarios va más allá y veta el concierto a esas escuelas

Olga Pereda. MADRID - JUEVES, 05/11/2020

Continúa el baile de enmiendas en el Congreso de los Diputados para modificar la nueva ley de educación. ERC ha pactado con PSOE y Unidas Podemos un acuerdo para las escuelas concertadas (financiadas con fondos públicos) no puedan segregar a los alumnos por sexo, según se refleja en una enmienda a la que ha tenido acceso ACN.

Cuando la ministra de Educación, Isabel Celaá, presentó por primera vez -en 2018- su proyecto de ley educativa dio un toque de atención a los coles concertados que separan a niños y niñas. Les advirtió que no cumplen un principio básico de la educación: el de equidad. Son centros -la mayoría pertenecen al Opus Dei, aunque también los hay privados y sin financiación pública- que "contravienen la educación inclusiva y la coeducación", subrayó en ese momento. No especificó qué haría con ellos (mejor dicho, contra ellos) más allá de "abrir un

diálogo". Celaá recordó que la mayoría de centros concertados sí respetan el principio de equidad y, por lo tanto, cumplen con el servicio público que tiene que ofrecer la escuela.

La ministra siempre ha defendido que su normativa -la LOMLOE, que implicará la práctica derogación de la polémica 'ley Wert'- no supone ningún ataque a los centros concertados que cumplen con el servicio público. "Somos plenamente conscientes de la libertad de las familias", reiteró ayer durante un encuentro informativo con la prensa especializada.

Preferencias

Finalmente, la ley que redactó el Ministerio de Educación y Formación Profesional y que entregó al Parlamento para su debate señalaba que la educación pública es el «eje vertebrador del sistema educativo» junto con «un importante sector de la escuela concertada que cumple sus fines sociales». En uno de sus apartados se especificaba que «preferentemente se concertarán aquellos centros que no separen a los alumnos por razón de sexo». La propia ministra, en aquella ocasión, destacó que el texto siempre podría sufrir cambios en la tramitación del Congreso y el Senado.

Efectivamente, así ha ocurrido. La enmienda pactada por ERC con los dos partidos que forman el Gobierno establece que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" según la ley de igualdad del 2007 y "no separarán al alumnado por su género".

Sentencia del Constitucional

La modificación, quizá, genere algún conflicto político con los partidos de la derecha porque el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en 2018 en la que aseguraba que la educación segregada por sexos "no causa discriminación" y es "respetuosa con la Constitución". El fallo lo emitió a raíz de un recurso impuesto por el PSOE contra algunos artículos de la 'ley Wert'. Según el tribunal, la educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede definirse como discriminatoria. En toda España hay 87 centros concertados que separan por el sexo (0,3% del total).

Catalunya ya denegó conciertos

En Catalunya en el mes de mayo la Generalitat ya denegó el concierto en 11 escuelas que diferencian alumnado por sexo, a pesar de que los concedió un año de prórroga para establecer clases mixtas.

Lo hizo según la ley de educación de Catalunya, que establece que los centros tienen que cumplir el principio de coeducación mediante una escolarización mixta.

Más cambios en la ley

La prohibición de segregar los niños por sexo en toda España se suma a otro acuerdo logrado esta semana entre ERC, PSOE y Unidas Podemos para blindar en cierto modo la inmersión lingüística catalana de tal manera que cuando los alumnos y alumnas terminen la secundaria obligatoria tengan perfecto conocimiento tanto del castellano como del catalán. El modelo será flexible porque si algún estudiante tiene carencias en alguna de las dos lenguas, el centro aplicará medidas para compensar esas lagunas. Las tres formaciones políticas también pactaron crear una nueva opción de bachillerato, el llamado general, donde los alumnos estudiarán asignaturas de las tres modalidades ya existentes, como avanzó hace días EL PERIÓDICO.



La ley Celaá avalará la salida de las aulas del castellano pese a ser un «fraude constitucional»

La enmienda a la «ley Celaá» pactada entre PSOE, Unidas-Podemos y ERC que elimina la referencia, en el proyecto de ley orgánico Lomloe, a que el castellano sea lengua vehicular en toda España, es, a juicio de juristas y expertos consultados, un «acto de rendición de los partidos nacionales al independentismo»

Esther Armora . Josefina G. Stegmann 05/11/2020

Un fraude constitucional. La enmienda a la «ley Celaá» pactada entre PSOE, Unidas-Podemos y ERC que elimina la referencia, en el proyecto de ley orgánico Lomloe, a que el castellano sea lengua vehicular en toda España, es, a juicio de juristas y expertos consultados, un «acto de rendición de los partidos nacionales al independentismo» y «el destierro definitivo de esta lengua en las comunidades».

De aprobarse la enmienda a la que ha accedido ABC, con toda seguridad hoy a las 17.30, según han confirmado a ABC fuentes parlamentarias, la modificación echaría por tierra casi cuatro décadas de lucha sin cuartel en Cataluña para preservar el castellano y «perpetuaría el incumplimiento constitucional en el que desde hace más de tres décadas incurre el gobierno catalán con su modelo lingüístico monolingüe, único en

Europa», según denuncian expertos en Derecho consultados por ABC. Pese a la agresión que supone la enmienda, algunos letrados como José Domingo, presidente también de Impulso Ciudadano, advierten de que no será tan fácil retirar al castellano su papel de lengua de uso en las aulas.

«Constitucionalmente los idiomas oficiales son lenguas vehiculares y eso no va a cambiar salvo que se reforme la Carta Magna y, por lo tanto, los Tribunales seguirán declarando al castellano como lengua vehicular», precisa Domingo. El abogado Ángel Escolano, portavoz de Convivencia Cívica Catalana (CCC), se muestra menos optimista al respecto y recuerda que Cataluña lleva más de tres décadas desoyendo sentencias firmes judiciales que le advierten de que su plan de lenguas «atenta contra la letra y el espíritu de la Constitución».

«Símbolo de cohesión»

A juicio de Domingo, el pacto PSOE-UP-ERC «pretende legalizar proyectos lingüísticos inconstitucionales y obligar a los padres a judicializar sus pretensiones de que el castellano sea lengua docente». «Para cerrar el círculo -añade- la Lomloe blindó el control y evaluación de la presencia de las lenguas vehiculares a las administraciones autonómicas. Es decir, se devalúa el símbolo, la lengua común, y se facilita el fraude constitucional».

La opinión de estos juristas es bien distinta a la dada ayer por la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien fue preguntado por ABC por la polémica enmienda. «Lejos queda del objetivo de este ministerio desalojar al castellano. Es, junto las lenguas cooficiales, objeto de tratamiento en las escuelas y seguirán siéndolo de acuerdo a la Constitución y a los estatutos de autonomía», zanjó Celaá que evitó dar su palabra de honor sobre si el castellano estaba siendo usado como moneda de cambio en la negociación de los Presupuestos. Añadió, tal como apuntaron fuentes parlamentarias del PSOE a ABC que «se incorporarán medidas compensatorias de tal manera que en zonas donde haya necesidad de fortalecer el castellano se haga».

Para Escolano, la enmienda a la ley socialista «sería la puntilla» que daría pleno derecho a las comunidades a desterrar de sus escuelas la lengua del Estado y daría carta blanca a los gobiernos autonómicos para «saltarse las leyes y la Constitución». Recuerda que la inmersión lingüística supone una vulneración de la Constitución, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley y en el artículo 3.1 señala que «el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Para mantener el modelo lingüístico de la inmersión «debería cambiarse la Constitución», dice Escolano. «Quien lo incumpla -añade- está en franca rebeldía». La enmienda además da un golpe simbólico ya que cuando se alude al castellano se elimina la referencia a este como «lengua oficial del Estado».

Décadas de desacato

Los nacionalistas catalanes han hecho de la lengua su gran baza de construcción del «proyecto de país». Escudándose en la Ley de Política Lingüística de 1998 y en la Ley Catalana de Educación (LEC) de 2009, que se aprobó en la época del tripartito de izquierdas (ERC, PSC e ICV) con el apoyo de todas las fuerzas políticas excepto el PP y Cs, el gobierno catalán ha ido desplazando al castellano de las aulas desoyendo los numerosos pronunciamientos judiciales que le obligan a devolverle su papel de lengua cooficial en la escuela.

El reguero de sentencias que le instan a modificar su plan de lenguas, algunas de ellas apelando a que vulnera derechos fundamentales y principios básicos de la Constitución, no han tenido ningún efecto. El catalán sigue siendo la única lengua de uso en el sistema educativo público, y el castellano una lengua casi residual que, si no hay sentencias de por medio, se usa en solo una asignatura.

El primer varapalo judicial a la inmersión lo dio el Tribunal Constitucional (TC) en julio de 2010 con el fallo sobre el Estatut. A raíz de un recurso del PP, la sentencia puso en la cuerda floja la inmersión, al apuntar que el castellano debe ser lengua vehicular en la escuela junto al catalán. En diciembre de ese mismo año el Tribunal Supremo (TS) instó a la Generalitat a «adoptar medidas» para que el castellano sea lengua vehicular. Cinco meses después, el Supremo dictó dos sentencias idénticas. Cinco fallos posteriores del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dos de 2017 y el último de febrero de 2018, reconocieron que, aunque el catalán debe ser «el centro de gravedad» del sistema escolar de Cataluña, eso no debe ir en perjuicio del castellano.

Posteriores pronunciamientos judiciales han avalado una mayor presencia de la lengua común en la enseñanza estableciendo la obligación de ofrecer al menos el 25% de las horas semanales de clase en castellano. Sin embargo, la administración catalana sigue en el desacato y los fallos son papel mojado para el Govern.

europapress.es

Más de un millón de personas participarán en la Semana Europea de la Formación Profesional que será online

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un millón de personas participarán en la Semana Europea de la Formación Profesional que se celebra del 9 al 13 de noviembre de forma online con la temática 'Transición Ecológica y Digital en la Formación Profesional'. Se trata de una iniciativa promovida por la Comisión Europea, que en la presente edición de 2020 cuenta con la cooperación de la Presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea.

Un acontecimiento celebrado a escala europea y de carácter anual en el que se desarrollan, simultáneamente en todos los países, multitud de eventos relacionados con la promoción y la visibilidad de las enseñanzas de Formación Profesional.

En el ámbito de la Formación Profesional, el programa Erasmus+ apoya el desarrollo profesional de estudiantes y personal docente que trabajan en este sector a través de periodos de formación o prácticas en el extranjero, permitiendo aumentar las perspectivas profesionales y opciones de empleabilidad y crear redes de trabajo y contactos internacionales.

Erasmus+ ayuda a la adquisición de competencias para el mercado laboral: los estudiantes que participan en el programa tienen el doble de oportunidades de encontrar trabajo. En la última convocatoria del Programa se ha observado un crecimiento exponencial en España para la financiación de proyectos de movilidad europea en este sector educativo, destinándose más de 34,6 millones de euros en 2020 por parte de la Agencia Nacional SEPIE.

Esto supone un incremento de 462.063 euros más que en la convocatoria anterior, lo que ha permitido nanciar un total de 491 proyectos de FP Básica, FP de Grado Medio y Certificados de Profesionalidad. Esto se traduce en un total de 11.325 movilidades entre estudiantes, recién titulados y profesorado de FP, lo que supone un incremento de 10,6 % con respecto a la convocatoria anterior.

Hasta la fecha, ya se han registrado cerca de 600 eventos en 35 países de todo el continente y se espera una participación de más de un millón de personas. Esta iniciativa representa una oportunidad para conocer ejemplos de excelencia en Formación Profesional, así como prácticas docentes innovadoras, programas de Formación Profesional de éxito que fomentan el aprendizaje profesional, el aprendizaje en el trabajo, la mejora de las competencias y el reciclaje profesional, además de asociaciones entre el ámbito educativo y el mundo laboral.

Las organizaciones de los Estados miembros de la UE, de los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y de los países candidatos pueden registrar sus actividades a través de la web de esta iniciativa europea.

Además, desde el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) ha organizado la II edición Virtual del 'Café viajero Erasmus+' el jueves 12 de noviembre a las 17:00 horas, que contará con la intervención de organizaciones beneficiarias y participantes en proyectos Erasmus+ en el sector de la Formación Profesional. El evento podrá seguirse en directo en el canal de YouTube del SEPIE.

LA VANGUARDIA

La ley educativa rebela a la derecha y divide al independentismo

PP y Cs irán al TC si el castellano no es vehicular y JxCat se desmarca de ERC

C. DEL RIEGO, MADRID. 05/11/2020

El pacto de PSOE, Unidas Podemos y ERC para excluir de la nueva ley de educación la definición de lengua vehicular en la escuela ha rebelado a la derecha y dividido al independentismo. Si esa palabra desaparece del texto de la llamada ley Celáa –hoy se vota una enmienda en la comisión parlamentaria–, el PP y Ciudadanos acudirán al Tribunal Constitucional. Y seísmo también en el otro lado: rifirrafe entre ERC y JxCat –incluido el PDECat–, socios en el Govern, que ahora tratan uno de apuntarse el tanto de un supuesto blindaje de la inmersión lingüística y, el otro, de minimizar ese pacto.

Y en medio está la ministra Isabel Celaá, que trata de tranquilizar a la oposición: “El castellano seguirá siendo tratado como fija la Constitución y los estatutos de autonomía”, dijo ayer la titular de Educación, que garantiza que no hay ninguna intención de “desalojar al castellano de las escuelas”. Celáa insiste en que el término *vehicular* no figura en la Constitución y, según los negociadores de la enmienda, el objetivo es blindar la inmersión lingüística en Catalunya.

En nombre de PP fue el propio Pablo Casado quien anunció el recurso “si el Gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular y liquidan la libertad educativa contra la concertada”. En el anuncio, el día antes de que se reúna con la comunidad educativa, el líder del PP acusaba al Gobierno de pretender “permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos”.

Además del PP, Ciudadanos también aspira a ir al TC, aunque no tiene los diputados y senadores necesarios –se requieren 50– para presentar un recurso. Por eso Inés Arrimadas habla de acudir también al Defensor del Pueblo y a la alta inspección educativa para evitar que se elimine el castellano como lengua vehicular, algo que, aseguró, ya ocurre en muchas escuelas catalanas por “la inacción de los gobiernos del PP y del PSOE”.

Sin embargo, al menos de momento, Cs no condiciona su negociación presupuestaria a que no prospere la enmienda.

En el otro lado, ERC, Junts per Cat y el PDECat se enzarzaron por la interpretación que cada uno de ellos hace de la "administración educativa". El diputado del PDECat Sergi Miquel criticó la enmienda transaccional sobre la inmersión lingüística, porque considera que abre la vía a que el Ministerio de Educación, mediante un decreto, pueda establecer después un porcentaje de clases en castellano en las escuelas de Catalunya. También la portavoz de Junts, Laura Borràs, consideró la negociación de ERC con el PSOE como "nueva oportunidad perdida". "No se ha blindado nada, ni se avanza en el reconocimiento de la pluralidad lingüística", señaló en declaraciones a *La Vanguardia*. Para Borràs, el acuerdo de los republicanos "no protege la inmersión lingüística" y "deja la competencia en manos del ministerio", insistió coincidiendo con Miquel.

Minutos después de las quejas de Sergi Miquel, la diputada de ERC Montse Bassa convocó a los medios para expresar su enfado y acusar al PDECat de "falsedad" y de "hacer partidismo" con "un tema muy sensible", lo que considera "muy grave", porque cree que todo el mundo sabe que la "administración educativa" se refiere a cada una de las consejerías de educación.



La enmienda para blindar la inmersión lingüística anticipa una intensa batalla política y pocos cambios en las aulas

PSOE, UP y ERC han acordado eliminar de la LOMLOE la referencia a que el castellano es la lengua vehicular de la enseñanza, enmienda que se vota este jueves con el rechazo de la derecha

La enmienda pactada por PSOE, UP y ERC en la Ley de Educación sustituye el castellano como lengua vehicular por una referencia a los Estatutos de Autonomía

Daniel Sánchez Caballero 05/10/2020

El acuerdo alcanzado entre el PSOE, UP y ERC para eliminar en la futura Ley de Educación (LOMLOE) la referencia a que el castellano es la lengua vehicular de la enseñanza promete generar mucho más ruido político que cambios reales en las aulas. Todo indica que la enmienda transaccional se aprobará en la votación de este jueves, pero el cambio que ha escandalizado al PP y Ciudadanos –y por razones diferentes a JxCat– no parece ir más allá de blindar una práctica que ya se realiza en Catalunya –el uso del catalán como lengua vehicular, modelo conocido como 'inmersión lingüística'–. Mientras ERC se congratula por la nueva redacción del texto, al que ha tenido acceso este miércoles elDiario.es, JxCat se opone porque teme que ese 'blindaje' quede al albur del Gobierno. Por su parte, Pablo Casado (PP) e Inés Arrimadas (Cs) han anunciado que llevarán el asunto ante el Tribunal Constitucional si se aprueba.

El texto de la enmienda de la LOMLOE se limita a suprimir la fórmula "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares" y dejar un genérico "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, con conformidad con la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable".

Se mantienen sin tocar en la redacción de la LOMLOE las referencias a que "al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente". A este punto se añade que "las Administraciones educativas aplicarán los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y promoverán la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en inmersión lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido. Asimismo, impulsarán la adopción por parte de los centros de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas".

Blindar la inmersión lingüística

Desde los tres partidos que han pactado el cambio de normativa defienden que tiene como objetivo "despolitizar la lengua y la educación" (UP), "arreglar el entuerto que se montó con la LOMCE, que generó lío con las lenguas y muchos procesos judiciales" (PSOE) o "blindar la inmersión lingüística" (ERC). El razonamiento es que, al quitar de la ley la obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular, la inmersión que se practica en la región no entrará en contradicción con la normativa. El Ministerio de Educación también argumenta, según ha defendido en la mañana del miércoles la ministra, Isabel Celaá, que el sistema catalán da resultados académicos satisfactorios para las dos lenguas: los alumnos de la comunidad oscilan alrededor de la nota media española en la prueba de Lengua castellana y literatura en las pruebas de acceso a la universidad en los últimos cinco años: algunos una décima abajo, otros una décima arriba. En el último curso con datos, 2019, en España la media fue de 6,34 y en Catalunya de 6,61.

La situación en que quedará la enseñanza en relación a la lengua tampoco va a ser nueva. Como explica Mariluz Martínez Seijo, portavoz socialista de Educación en el Congreso, hasta 2013, cuando se aprobó la LOMCE, no existía referencia alguna a que el castellano tuviera que ser lengua vehicular en la educación. Las

comunidades con lengua cooficial propia gestionaban el tema como querían, más o menos. En el caso de Catalunya –comunidad en la que se pone el foco con esta polémica–, estaba ya implantada desde 1983 la inmersión lingüística, que básicamente consiste en sumergir a los niños en el catalán desde que acceden a la escuela –todas las asignaturas, todas las horas–.

En 2013, el PP cambió el tablero de juego por primera vez e introdujo la fórmula: "El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas". Pero no llegó a ser una realidad en Catalunya. O sí, según se mire, pero no debido a esa ley. Lo habían decidido los jueces antes de que la LOMCE lo estipulara. En 2010, tres años antes de la Ley Wert, el Tribunal Constitucional había especificado que el castellano debía ser lengua vehicular en Catalunya, aunque no concretó con qué peso. Debía hacerlo la Generalitat.

Ante la inacción en el tema del Gobierno catalán, finalmente fue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el que lo estableció para todas aquellas familias que lo pidiesen: un 25% de las horas lectivas, rechazando el 50% que pedía el Ministerio de Educación del PP. Esto es, Lengua Castellana y al menos otra asignatura troncal deberían impartirse en castellano a las familias que lo reclamasen. Desde entonces, han sido minoritarias las familias que lo han reclamado. Desde la Asociación por una Enseñanza Bilingüe (AEB), la principal entidad que combate la inmersión, contabilizaron 15 resoluciones judiciales –en 10 colegios– entre 2019 y enero de 2020.

La LOMLOE no cambiará mucho esta dinámica aunque se apruebe esta enmienda. Pese a que la nueva redacción de la ley dirá que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano", no especifica cuánta enseñanza recibirán en castellano y apelan a la normativa vigente (la que lo esté) para cumplir esta máxima. Y establece en el punto cuarto y último de esta disposición sobre la lengua que: "Tanto la materia Lengua Castellana y Literatura como la Lengua Cooficial y Literatura deberán impartirse en las lenguas correspondientes".

Los expertos respaldan esta teoría. "En la práctica no va a cambiar mucho", explica Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill. "Con sentido profesional y pedagógico los maestros se preocuparán de que los alumnos aprendan las dos lenguas". En esta línea, el propio Departamento de Educación catalán abrió la puerta a principios de legislatura a relajar el modelo de inmersión y permitir más horas de castellano como lengua vehicular en aquellas zonas más catalanoparlantes y en aquellos centros en los que detecten que el conocimiento del castellano o su expresión oral o escrita entre sus alumnos es deficiente.

"Lo que sí desmontaría el modelo actual sería lo contrario: lo que hizo Wert, desmontar el sistema e imponer horas en castellano", argumenta Palacín. Además, pese a que Wert estableció en la LOMCE una disposición según la cual las familias podían acudir a la privada para tener una escolarización bilingüe si la pública no se lo garantizaba –y a cargo de la Administración catalana–, las familias que lo hicieron siempre de nuevo minoritarias: solo 40 en 2016.

Desde la crítica, la Asamblea por una Escuela Bilingüe también cree que lo que más va a cambiar es intangible. "Vamos a seguir ganando los recursos en los tribunales porque nos ampara la Constitución y la jurisprudencia", explican fuentes de esta asociación. El problema, añaden, es que "dificulta el argumentario al que tenemos que hacer frente cuando vamos a recurrir. Lanza el mensaje de que la nueva Ley de Educación ampara la inmersión, y eso es lo que quiere el independentismo para que la gente deje de pensar que es posible cambiar ese sistema y pedir más horas de castellano", afirman. "Si los pide el nacionalismo es por algo, porque desligan aún más la escuela catalana y la sociedad catalana del resto de España", añaden.

Una reforma con ambición "garantista" que no va a evitar la polémica

El PSOE sostiene que la enmienda es "garantista", que fija la Constitución como marco y los estatutos de autonomía como referentes a la hora de definir las políticas lingüísticas, normas todas ellas aprobadas en el Congreso. Cree Martínez Seijo que con la Ley Wert "se generó un conflicto donde nunca lo hubo" y sostiene que "con esta enmienda intentamos poner fin a un conflicto y un proceso generado de llevar al sistema educativo y las lenguas a procesos judiciales, que es lo que pasó con la LOMCE".

Pero la bronca política no es que se intuya por esperada: ya ha empezado. En la mañana del miércoles, un día después de conocerse la enmienda, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional si se aprueba. Ciudadanos también. No es nueva la fijación de estos partidos con la inmersión en Catalunya: ambos partidos vienen denunciando el sistema y el acorralamiento del castellano en la escuela catalana desde la pasada década. De hecho, hasta el Gobierno andaluz, donde ambos mandan en coalición, aprobó el pasado año un plan "para andaluces amenazados por la inmersión lingüística".

La situación, de hecho, no es exclusiva de Catalunya. Los mismos partidos denunciaron el decreto de plurilingüismo por el que el Gobierno de la Comunitat Valenciana pretendía en 2017 equiparar las horas de inglés y valenciano a las de castellano, **informa Miguel Giménez**. El Tribunal Superior de Justicia valenciano les dio la razón y tumbó el texto. Finalmente, en 2018 se aprobó otra norma con un programa único que desliga las horas de formación en inglés de las del valenciano, como establecía el anterior, y aumenta progresivamente las horas de enseñanza en estas lenguas, pero deja los tiempos de implantación del modelo en manos de los

centros. Sigue contando con las críticas de los partidos de derecha y ultraderecha, aunque en los últimos tiempos habían remitido.

Los partidos del Gobierno denuncian que esta fijación es ideológica. "¿Por qué no hay problemas con los proyectos bilingües de inmersión en inglés y francés?", se pregunta la portavoz socialista Martínez Seijo. "La Constitución no dice por ningún sitio que el castellano deba ser la lengua vehicular de la educación", añaden desde UP. El artículo 3 de la Carta Magna tiene tres puntos: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla"; "Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos"; y "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

Desde ciertos sectores, se ven otras intenciones detrás de este acuerdo. Sus detractores afirman que realmente el Gobierno ha realizado esta concesión a ERC a cambio de su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado. Las partes implicadas lo han negado. La ministra Celaá ha afirmado que "el presupuesto y la actuación del ministerio es autónomo, no depende de nada. Se trabaja para el bien de los alumnos y alumnas, para mejorar su capacitación profesional, para que sean capaces de enfrentarse al mundo". En una línea similar se ha manifestado Montse Bassa, portavoz de Educación de ERC en el Congreso, y fuentes de UP.

Y entre medias de unos y otros, el PNV va a lo suyo. El partido también tiene cosas que decir respecto a la lengua en la educación, y ha registrado una enmienda, que también se vota este jueves, sobre el uso del euskera en la escuela. "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. *El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en Comunidades Autónomas que carezcan de lengua cooficial; en las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales, la lengua vehicular será la que determine en sus respectivos estatutos u normativa*", reza el texto propuesto por los nacionalistas vascos (la parte en cursiva sería la novedad). Fuentes del partido explican que el objetivo es que "el euskera, de acuerdo con lo que dice el Estatuto de Gernika, sea reconocida como lengua propia y, por tanto, vehicular". No va a tener mucho recorrido. Fuentes del PSOE explican que no votarán a favor (esa enmienda era incompatible con la suya propia), lo cual la deja sin opciones reales.

Aunque esta enmienda se ha comido todos los focos mediáticos, no es la única que se vota. Entre los elementos que se someterán a consideración de los grupos está otra de las medidas estrella de la ley, quizá no tanto a nivel educativo pero sí social: la prohibición de otorgar conciertos a los centros privados que segregan a su alumnado por sexo, unos acuerdos que fueron avalados por el Tribunal Constitucional tras denuncia del PSOE.

También se votará una disposición por la que se integra a los profesores técnicos de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Secundaria, una reivindicación histórica del sector y que supone un ascenso de facto para unos 30.000 docentes de esta etapa. El sindicato STES advierte de que el texto de estas enmiendas es confuso y podría llevar a este profesorado a tener que pasar una prueba para este cambio de categoría, lo cual rechaza, y pide que el cambio de adscripción sea automático.

Por último, el Congreso también vota este jueves una propuesta de ERC sobre la posibilidad de ofertar en Primaria y Secundaria enseñanza religiosa pero no confesional y otra de UP para que los municipios cooperen con las administraciones educativas en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos.

europapress.es

Educación reactiva el Observatorio de la Convivencia Escolar tras 9 años de inactividad

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha presidido este jueves el Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que no se reunía desde el año 2011, hace justo 9 años.

La reactivación de este organismo tiene como objetivo avanzar y encontrar respuestas que mejoren la convivencia en las escuelas, un "objetivo prioritario" del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), según destaca este Departamento. También han estado presentes en la reunión el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y la secretaria general de FP, Clara Sanz.

Para ello, el Ministerio ha presentado las nuevas líneas de actuación a partir de las cuales se podrán articular las medidas necesarias para mejorar el clima escolar.

Entre ellas, la prevención, detección y apoyo a las víctimas de acoso y violencia, especialmente a grupos vulnerables por motivos de género, origen, etnia, LGTBI+, diversidad funcional, etc.; el impulso de políticas educativas innovadoras que combinen la visión de los centros escolares como centros de aprendizaje y centros de convivencia; la participación de la comunidad educativa en la escuela como modelo de convivencia pacífica o la formación del profesorado, alumnado y familias en relación con la convivencia.

"Garantizar la convivencia exige que la comunidad educativa construya relaciones interpersonales positivas promovidas por una cultura escolar de alta cohesión en la que el respeto y la dignidad de la persona estén por encima de cualquier otro valor", ha señalado la ministra durante su intervención.

Según destaca el Ministerio, el clima escolar en el sistema educativo español es, en líneas generales, "positivo", pues recuerda los resultados del informe PISA 2018, que indican que el índice de exposición al acoso entre los estudiantes de 15 años en España es uno de los más bajos de los países de su entorno (un 17% frente al 23% de la media de la OCDE). Además, el alumnado español es el más respetuoso con personas de otras culturas, según ese mismo informe.

No obstante, "la mejora continua de la convivencia escolar a través de una educación cívica, inclusiva y ética, el desarrollo de las capacidades sociales y emocionales y el respeto a todas las personas es una de las prioridades del Ministerio, que queda reejada, además, en el Proyecto de Ley de Educación que actualmente se negocia en el Congreso".

La norma tiene como fin "configurar un sistema educativo capaz de desarrollar al máximo el talento y las capacidades de niños, niñas y jóvenes, sean estas cuales sean, así como el desarrollo de competencias cívicas y éticas". Para ello, entre otras medidas, incorpora la asignatura de valores cívicos y éticos tanto en Primaria como en Secundaria.

ERRADICAR EL ACOSO

Otro de los objetivos del Ministerio es prevenir y erradicar el acoso escolar de las aulas, así como cualquier tipo de violencia que se dé en la escuela. Un asunto que, tal y como ha apuntado Celaá, "debe abordarse desde un enfoque profundamente educativo y no meramente sancionador".

"Se trata de establecer un clima de relaciones en los colegios e institutos que haga que todos nos sintamos conmovidos con el sufrimiento de los otros", ha dicho la ministra.

Durante la reunión, además de presentar las nuevas líneas de actuación para el Observatorio, se ha designado a los representantes de la Comisión Permanente y se ha hecho balance de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Plan Estatal de Convivencia Escolar.

Este Observatorio se creó en 2007 con el objetivo de analizar la situación de las escuelas en materia de clima y convivencia escolar y proponer y fomentar medidas que contribuyan a mejorarlos. En estos 13 años, solo se había reunido tres veces, la última en 2011.

En este organismo están representados los principales actores del sector educativo. En él participan, el Ministerio, las comunidades autónomas, los principales sindicatos de la enseñanza, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres, confederaciones y federaciones de asociaciones de alumnos y organizaciones empresariales, entre otros.

THE CONVERSATION

Así deberían ser las clases de Lengua, según la ciencia

Silvia Gumiel Molina. Profesora Titular de Lengua española, Universidad de Alcalá

Isabel Pérez-Jiménez. Profesora titular de Lengua española, Universidad de Alcalá

En estos días en los que se cierne sobre nosotros una nueva reforma educativa (y no importa la fecha en la que lea usted esto), lingüistas, físicas, biólogos, matemáticas y otros científicos nos preguntamos si esta vez quienes diseñan los contenidos se pararán a pensar qué necesitan aprender realmente los niños y niñas y cómo aprenden.

Este artículo presenta algunas ideas sobre lo que se enseña, qué dice la ciencia que se debería enseñar y cómo se debería enseñar. Hemos elegido el campo de la morfología, en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura (en adelante, LCL), pero probablemente podrá aplicarse a otras muchas disciplinas.

La pretensión de las leyes educativas

Las distintas leyes educativas modifican, en mayor o menor medida, los objetivos propuestos en la enseñanza de las diferentes materias; la actual LOMCE señala como objetivo específico de la asignatura de LCL lo siguiente: "La enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de la Educación Primaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria".

Un objetivo tan ambicioso merece un adecuado desarrollo del currículo que se vea reflejado en los libros de texto. Sin embargo, la realidad es otra bien distinta; los libros de LCL en primaria repiten contenidos una y otra vez sin incrementar siquiera la complejidad.

A modo de ejemplo, Carrasco (2018) muestra cómo las categorías gramaticales se presentan en todos los cursos de primaria sin cambiar las explicaciones, proponer actividades diferentes o establecer conexiones nuevas según van avanzando los cursos; los ejercicios que se proponen para aprender los contenidos pueden llevarse a cabo de manera sistemática sin que sea necesaria la más mínima reflexión sobre los conceptos que se están trabajando.

El desolador panorama produce aburrimiento en los niños, que no entienden qué están estudiando ni para qué les sirven todas esas definiciones inconexas. La prueba es que, aunque la materia de LCL es, con diferencia, aquella a la que más horas se dedica en la enseñanza preuniversitaria, las titulaciones universitarias relacionadas con el estudio de la Lingüística tienen serios problemas para llenar sus plazas.

¿Qué dice la ciencia?

Debemos preguntarnos, por tanto, si el estudio de la morfología (y por extensión de la sintaxis o del léxico) en Educación Primaria puede contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, tal y como propone la ley. La respuesta desde las teorías de adquisición de la lengua es rotundamente sí.

Bloom (2002) señala que, entre el primer año de vida y los 17 años, hemos aprendido unas 60.000 palabras (para el inglés). Por otro lado, Clark (2015) afirma que a los 6 años los niños manejan aproximadamente un vocabulario de unas 14.000 palabras.

Así pues, en la etapa de la formación obligatoria el niño/adolescente aprende unas 46.000 palabras, lo que supone una media de más de 11 palabras diarias. Parece, no obstante, que este aprendizaje no es lineal, sino que aumenta progresivamente con la edad: un niño de tres años aprende más palabras que uno de dos y uno de nueve años aprende más que uno de ocho.

A más edad, menos palabras nuevas

El aprendizaje del léxico prosigue a lo largo de la vida. Sin embargo, parece ser un hecho consensuado que se produce un descenso en el número de palabras nuevas que se adquieren en la edad adulta. Según Bloom (2002), la razón por la que los adultos no aumentamos, por lo general, nuestro vocabulario es la falta de exposición a nuevas palabras: un niño de 5 años está expuesto a un número elevado de nuevas palabras que va aprendiendo.

Este número se incrementa con la edad por, entre otras razones, el aumento de sus capacidades perceptivas, nuevos intereses o su contacto con la lectura, pero llega un momento en el que este crecimiento se frena porque la exposición a nuevas palabras desaparece o se limita considerablemente.

Parece, por tanto, que las edades que comprende la Educación Primaria son óptimas para potenciar el aprendizaje de nuevas palabras; a nadie se le escapa que un dominio adecuado del léxico redunde de manera directa en cualquier producción lingüística, tanto oral como escrita, y mejora las destrezas receptivas (comprensión escrita y competencia lectora).

La pregunta que debemos hacernos es cómo contribuye el estudio de la morfología a la adquisición de nuevas palabras. Existen varias teorías pero asumimos aquí la que propone que la información sobre las palabras se almacena en distintos subcomponentes léxicos interconectados; estos subcomponentes contienen respectivamente (al menos) información fonológica, ortográfica, semántica y sintáctica (categoría gramatical) de las piezas de vocabulario. Los trabajos experimentales con pacientes con trastornos del lenguaje parecen corroborar esta hipótesis.

El almacenaje de vocabulario en nuestra mente

¿Qué ocurre con la información morfológica? ¿Es relevante para la adquisición de nuevo vocabulario? Raiter y Jaichenco (2002) señalan que hay dos maneras posibles de almacenar las palabras en nuestro lexicón mental: o bien con su forma completa (hipótesis de la lista completa, Butterworth, 1983) o bien con su representación morfológica (hipótesis de la descomposición morfológica, Taft y Foster, 1975).

En esta segunda opción, que propone un lexicón económico y generativo, se sugiere que en la adquisición de palabras complejas se producen procesos de descomposición que aíslan los morfemas de la forma completa y posteriormente procesos de reintegración de esos morfemas con la representación (sintáctica y semántica) de la palabra completa.

La propuesta de Caramazza (1988) concilia ambas hipótesis y propone que todas las formas léxicas de una lengua, incluidas las palabras polimorfemáticas, tienen una representación completa en el léxico. Además, las palabras polimorfemáticas tienen un almacenamiento descompuesto.

En el acceso al léxico polimorfemático, ambas rutas son posibles, de modo que accedemos a las palabras más frecuentes mediante la primera ruta (representación completa) y dejamos la segunda (a través de los morfemas) para las palabras poco frecuentes y para las nuevas palabras, que no tenemos almacenadas en nuestro léxico.

Si esto es así, podemos afirmar, como hace Hernández Muñoz (2015: 260), que “Cuanto mayor sea el conocimiento metalingüístico de los mecanismos internos de la formación de palabras, mejores son las capacidades de almacenamiento y recuperación de las palabras desde la memoria semántica”.

También en el campo de la enseñanza del español como lengua extranjera se ha defendido la idea de que “entrenamiento morfológico” contribuye a la mejora del acceso a los términos almacenados en el lexicón mental, del establecimiento de redes formales y semánticas entre esos términos y de las habilidades de

inferencia léxica, que permiten comprender el significado de términos desconocidos; aumenta además la productividad léxica y, como muestran distintos trabajos experimentales, mejora la competencia lectoescritora.

¿Cómo enseñamos morfología?

Si, como parece, la reflexión sobre la estructura interna de las palabras contribuye a la mejora de la competencia comunicativa del niño, parece evidente que la morfología debe formar parte del currículo de LCL.

Si, como hemos mencionado al principio de este artículo, los contenidos actuales no contribuyen a esta mejora, habrá que repensar cómo deben abordarse. El grupo GrOC (Gramática Orientada a las Competencias) lleva varios años trabajando en esto. *Grosso modo*, su propuesta sobre la enseñanza de la lengua en niveles preuniversitarios aboga por presentar los contenidos de gramática de modo similar a como se trabajan los de ciencias, apostando por la reflexión sobre la lengua, concebida esta como un objeto interno al propio hablante y no como un conjunto de instrucciones que debemos conocer para hablar bien.

Con la capacidad de hablar, el niño posee en su cabeza un laboratorio experimental para el que no se necesitan grandes instalaciones; basta con un lápiz y un cuaderno en el que anotar las generalizaciones que sean capaces de establecer.

Uniremos así el necesario desarrollo de la competencia comunicativa con el conocimiento del método científico, con toda seguridad propiciando el interés en el niño, que debe descubrir, crear, investigar, y no simplemente reproducir. Esperemos que aquellos que se encargan de redactar las leyes educativas tengan tiempo de pensar en esto.

MAGISTERIO

La ley Celaá priorizará la cercanía al centro y la renta para la escolarización

Una enmienda de PSOE y Unidas Podemos ha acordado que la Lomloe fije como criterios prioritarios en la admisión de alumnos, cuando no haya plazas suficientes en un centro, la proximidad del domicilio o lugar de trabajo de alguno de sus padres y la renta.

EFE. 30 DE OCTUBRE DE 2020

Se recoge así en una de las enmiendas parciales aprobadas esta semana en la Ponencia o grupo de trabajo de la Lomloe que trabaja dentro de la Comisión de Educación del Congreso, han señalado Efe fuentes parlamentarias. “Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales, y la renta per cápita de la unidad familiar”, señala la enmienda.

A continuación, se establece: “Asimismo, se tendrá en cuenta el que los padres, madres o tutores legales trabajen en el centro, la condición legal de familia numerosa, de alumnado nacido de parto múltiple, de familia monoparental, la situación de acogimiento familiar del alumno o alumna o la concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos y la condición de víctima de violencia de género o de terrorismo”. “Ninguno de estos criterios tendrá carácter excluyente, ni podrá suponer más del 30% del total de la puntuación máxima” para la matriculación.

La motivación de esta enmienda es, para los partidos que conforman el Gobierno de coalición, “destacar los principales criterios que se han de tener en cuenta en el proceso de admisión” en los centros públicos y concertados.

Por otra parte, otra enmienda de los citados grupos parlamentarios fija que las Administraciones educativas “garantizarán la igualdad en la aplicación de las normas de admisión”. Para ello se incluye el establecimiento de las mismas áreas de influencia para los centros públicos y privados concertados, de un mismo municipio o ámbito territorial, en función de las enseñanzas que imparten y de los puestos escolares autorizados. Las áreas de influencia garantizarán la aplicación de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio o lugar de trabajo y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea.

En ningún caso las características propias de un centro o de su oferta educativa, como que el centro imparta enseñanzas plurilingües, tenga reconocida una especialización curricular o participe en una acción destinada a fomentar la calidad, podrán suponer modificación de los criterios de admisión, se especifica. Además, se podrán constituir comisiones u órganos de garantías de admisión cuando la demanda de plazas en algún

centro del ámbito de actuación supere la oferta, incluidas las plazas reservadas para el alumnado con necesidades de apoyo educativo.

Estas comisiones supervisarán especialmente las normas relativas “a evitar la segregación” del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza y estarán integrados por representantes de la Administración educativa y local, de las familias, del profesorado, del alumnado en su caso y de los centros públicos y privados concertados.

La Federación Española de Familias Numerosa ha señalado en una nota que ha recibido “con sorpresa y preocupación” la enmienda sobre criterios de escolarización, acordada también por el grupo parlamentario ERC, ya que ellas dejarían de estar dentro de los criterios prioritarios. Aunque la nueva ley tendría en cuenta el tener hermanos matriculados en el centro a la hora de puntuar, la FEFN ha considerado que ese hecho “no siempre es suficiente”. Y han recordado que la Ley de Familias Numerosas establece en su artículo 11 que tendrán trato preferente en la puntuación en los centros de educación preescolar y centros docentes sostenidos con fondos públicos, por lo que “el Gobierno debe asegurar ese criterio de preferencia”.

El presidente de la FEFN, José Manuel Trigo, ha subrayado la importancia de la elección de centro, especialmente en familias con muchos hijos. En la actualidad hay 735.000 familias numerosas, el 96% de ellas tiene hijos en edad escolar y un 95,1% estudia en centros sostenidos con fondos públicos.

La Ponencia sobre la Lomloe está estudiando –y aprobando en su caso– las más de 1.160 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y está previsto que terminen de hacerlo en noviembre para después redactar el texto definitivo del proyecto de ley educativa que deberá ser votado en el Congreso.

La Consellería crea el centro de innovación digital para FP en Alicante

PABLO ROVIRA. Viernes, 30 de octubre de 2020

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Vicente Marzá, acompañado por el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, ha presentado las líneas de modernización de la FP valenciana como herramienta de reconstrucción económica y social, un elemento importante para fortalecer el tejido productivo valenciano en el actual contexto provocado por la Covidien-19 y para promover de manera decidida la formación de personal cualificado con alta empleabilidad.

El consejero ha apuntado que “a septiembre realizamos una oferta extraordinaria de 125 ciclos formativos más, con más de 4.000 plazas. Esto ha requerido el aumento en 271 profesores de FP, que se suman a los 4.374 que ya incrementamos en el sistema educativo valenciano este curso”.

Educación, además, refuerza la FP valenciana en tres líneas de actuación concretas: la potenciación de esta opción académica para el alumnado, la innovación educativa y la digitalización en esta rama educativa.

Vicent Marzá explicó que “en cuanto a incentivar que el alumnado se forme en ciclos formativos hemos impulsado por primera vez en la FP valenciana becas generales con un presupuesto de más de 1 millón de euros anuales; para llevar a cabo la digitalización hemos creado el Centro de Innovación Digital Avanzado de la FP en Alicante Distrito Digital; y en cuanto a la profundización en la innovación pedagógica, ponemos en marcha la red ‘Novigi’ de centros innovadores en FP, con 4,2 millones de euros anuales de inversión”.

El responsable de Educación ha afirmado que “es fundamental esta tarea de modernización de la Formación Profesional y de atracción de alumnos a los que se les garantiza una formación que les asegura la empleabilidad futura, ya que nuestro tejido económico tiene una amplia oferta de trabajo en multitud de perfiles profesionales cualificados”.

Con un presupuesto de 1.080.000 euros anuales, la Generalitat convocará estas becas, completamente nuevas, destinadas al alumnado de FP Básica, ciclos formativos de grado medio y superior, y cursos de especialización de Formación Profesional. Estas ayudas se dividirán en tres modalidades. Por un lado, las becas para realizar la actividad formativa de ciclos de FP dual. Otra de las modalidades son las becas para hacer el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en centros de trabajo alejados del centro docente o en otra autonomía. La tercera de las modalidades de ayudas se centra en el transporte, residencia y manutención.

El CIDA a Alacant

El Centro de Innovación Digital Avanzado de la Formación Profesional (CIDA) es un organismo que dinamizará la experimentación, la innovación y la investigación digital en todos los sectores relacionados con las familias profesionales de FP. Está concebido como un centro referente para la digitalización de la formación profesional valenciana que se fundamenta en tres aspectos: la innovación aplicada, la investigación, el impulso de la transformación económica y la excelencia en las competencias de los alumnos de FP.

Este centro está ubicado en Alicante Distrito Digital y ha comenzado a trabajar en la vigilancia tecnológica, el desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje, la investigación e innovación digital aplicada y la transferencia de los resultados de los proyectos de I + D + i tanto en los centros educativos de FP, como las empresas y otros organismos relacionados con la innovación y la digitalización.

Red de centros de FP Novigi

Se trata de una red colaborativa para la dinamización y la consolidación, en todos los centros educativos de FP valencianos, de la innovación pedagógica y organizativa como elemento clave de cambio de los modelos de aprendizaje de la Formación Profesional.

La red 'Novigi' de centros de FP incluye cuatro programas: 'Innovatec' para la implantación de metodologías innovadoras aplicadas; 'Emprende' para el desarrollo de la cultura emprendedora, el emprendimiento y la creación de empresas; 'Qualitas' para la implantación de sistemas de gestión de la calidad; y 'Acredita' para el reconocimiento, implantación y desarrollo de los programas de acreditación de la competencia.

El 20% de los jóvenes tuvo problemas para estudiar durante el confinamiento

Las dificultades tienen que ver con no poder concentrarse en casa (31,4%); falta de formación del profesorado (28,9%); o dudas que no pudieron resolver en soledad (24,7%).

ADRIÁN ARCOS. Miércoles, 4 de noviembre de 2020

Tener que quedarse confinados en casa durante meses no solo afectó social y anímicamente a una buena parte de los jóvenes, sino que también **les afectó en sus estudios**. Es uno de los datos que se obtienen de la investigación [*De puertas adentro y de pantallas afuera. Jóvenes en confinamiento*](#), realizada por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, con el apoyo de Telefónica y Banco Santander.

Concretamente, siete de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años que pudieron continuar sus estudios de manera conectada durante el confinamiento encontraron inconvenientes para hacerlo: la mitad de ellos (el 51%) tuvo "algunas dificultades" y el 20% se topó con "bastantes" problemas que le impidieron continuar las clases de forma adecuada.

Las dificultades sufridas por los jóvenes tienen que ver, sobre todo, con no poder concentrarse en el hogar (31,4%); falta de preparación del profesorado para impartir clases online (28,9%); dudas que no pudieron resolver en soledad (24,7%) o no encontrarse bien anímicamente (23,1%), entre otras.

Para los responsables del estudio, "la imposibilidad para acceder a bibliotecas u otros espacios públicos en los que estudiar, junto con la escasez de espacios de intimidad en el hogar, producto de la concentración prolongada del resto de integrantes de la unidad de convivencia en un mismo espacio, son los motivos que generan estas dificultades".

En segundo lugar, otro reto fundamental ha sido la adaptación a la Educación telemática, tanto por parte del profesorado como del alumnado. Ambos se han visto obligados a aprender, aceleradamente y de forma más o menos autónoma, a desplegar toda una nueva serie de habilidades comunicativas mediadas por la tecnología.

Resulta imprescindible resaltar que estas dificultades no han afectado a todo el mundo por igual: la clase social, el nivel de estudios y la posición ideológica son las variables que más determinan la brecha en la adaptación al sistema no presencial de enseñanza.

Aquellos jóvenes que se posicionan en clases sociales más bajas declaran haber experimentado más dificultades para poder continuar con sus estudios que el resto. Junto a esto, la imposibilidad para acceder a espacios adaptados para el estudio en su hogar también es más común en este tipo de perfiles. La brecha de adaptación a la Educación no presencial, por tanto, tiene un componente muy importante de clase social.

Por otro lado, se observa una relación negativa con el rendimiento académico entre los jóvenes que se encuentran cursando enseñanzas postobligatorias (Bachillerato o FP de Grado Medio) y quienes se posicionan en la izquierda ideológica.

Empeoramiento laboral

Pasando a analizar el empleo, ya antes de la pandemia, los salarios bajos, el desempleo y la alta temporalidad se mencionaban como los principales problemas de la juventud en España. Actualmente, el Covid-19 ha llevado a un empeoramiento de su situación económica, situación en la que se encuentra un 45,7% de los jóvenes, especialmente quienes han perdido su empleo. De estos, aproximadamente un tercio ha podido acogerse a ayudas económicas públicas para paliar su situación.

En cualquier caso, hasta el 62,3% afirma depender en mayor o menor medida del apoyo familiar para poder mantenerse. De nuevo, las personas que pertenecen a clases bajas declaran sufrir más las consecuencias económicas de la pandemia.

Buena convivencia

Pese a lo que pudiéramos pensar inicialmente, la valoración de la convivencia durante este periodo tiende a ser positiva, y un 74,1% de los jóvenes la califica como buena o muy buena. Uno de los motivos que explican esto es que un 60,5% atribuye una nota elevada a la comodidad de la vivienda en la que pasaron la cuarentena, especialmente los que estaban en el domicilio familiar, quienes se sitúan en la derecha ideológica y quienes pertenecen a clases altas o medio altas.

En el caso de jóvenes que calificaron su convivencia como regular o mala (23,9%), los principales motivos están vinculados a la falta de intimidad y a la pérdida de libertad.

Los datos muestran un incremento notable en la intensidad comunicativa tanto con la familia como con amigos habituales para aproximadamente la mitad de los jóvenes. Además, hasta un 53,8% declara haber retomado el contacto con personas con las que se habían distanciado previamente.

Sin embargo, hasta un 37,7% afirma haber experimentado soledad con mucha o bastante frecuencia y un 27,5% la ha sentido en alguna ocasión. Mujeres y jóvenes de menos de 25 años destacan como grupos más afectados por la soledad.

Tanto en el entorno académico como en el laboral, la clase social de los jóvenes es determinante para el nivel de adaptación al teleestudio. Es una de las observaciones que se desprenden claramente del estudio *De puertas adentro y de pantallas afuera. Jóvenes en confinamiento*.

“Se han acomodado mucho mejor aquellos chicos posicionados en las clases altas y medio-altas frente a sus compañeros de clases medias y medio-bajas”, remarca Anna Sanmartín, subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fad. La brecha de adaptación a la Educación no presencial, por tanto, tiene un componente muy importante de clase social.

Pero aparte de esa brecha social, Sanmartín advierte una “importante” brecha de género, ya que los hombres se ven más competentes que las mujeres, en parte, por el tipo de empleo que hacen de las tecnologías, como el uso diario de los videojuegos.



Fuentes de alfabetización digital



Fuente: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fad.

De hecho, como apreciamos en el gráfico de la derecha, las mujeres parecen más inclinadas que ellos a preguntar dudas sobre TIC, por lo menos a amigos o familiares (un 37,1% de las chicas frente a un 29,4% de los chicos), mientras que los hombres son algo más favorables a consultar libros o documentación.

A medida que aumentan los grupos de edad también se observan tendencias más autónomas, de búsqueda en internet o a través de la prueba y error, a la hora de adquirir conocimientos de alfabetización digital.

También llama la atención en el informe que las mujeres declaran más problemas que ellos a la hora de estudiar online desde casa, como no saber resolver dudas de forma autónoma, o que su centro no estaba preparado para dar las clases de forma online.

Y, sobre todo, ellas declaran más que ellos como dificultad para continuar con sus estudios el encontrarse peor anímicamente (29,2% de las chicas frente al 16,2% de los chicos), situación que también han experimentado las jóvenes de mayor edad y aquellas que cursan estudios superiores.

Por tanto, los niveles de competencia digital autopercibida son menores en el caso de las mujeres, lo que incide en el argumento de que la brecha de género tiene que ver tanto con el nivel real de competencias, como en la autopercepción y confianza para desenvolverse con las TIC.

Andreas Schleicher: “Tenemos que empezar a ser más creativos a la hora de evaluar”

Para Schleicher, PISA debe evolucionar para adaptarse a los retos de un mundo global e interconectado.

SARAY MARQUÉS. Miércoles, 4 de noviembre de 2020

20 años no es nada. O sí. PISA hoy es algo distinto a aquella evaluación internacional creada en 2000 para comparar los sistemas educativos de los distintos países. Su máximo responsable explica el por qué de esta evolución.

¿Cómo y por qué se decidieron a evaluar la competencia global de los alumnos?

—Tomamos como un punto de partida los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pues aportan una visión compartida.

Los hallazgos de la primera evaluación de la competencia global ponen de manifiesto que los centros y los sistemas que mejor promueven el conocimiento, las competencias y las actitudes globales entre sus alumnos son aquellos que ofrecen un currículum que valora la apertura al mundo y que aportan un aprendizaje positivo e inclusivo del entorno, que dan oportunidades para relacionarse con personas de otras culturas y que tienen profesores formados para enseñar esta competencia global.

La competencia global de nuestros jóvenes puede conformar nuestro futuro de una manera tan profunda como su competencia lectora, en matemáticas y ciencias. Además, las sociedades que valoran crear puentes y fomentar el pluralismo serán capaces de extraer lo mejor de cada uno, de construir desde perspectivas distintas y serán también las mejor posicionadas en creatividad e innovación.

¿Es más difícil medir esta nueva competencia que las tradicionales?

—Sí, es ciertamente más difícil, porque la competencia global conlleva no solo conocimiento y competencias sino actitudes y valores. Hemos trabajado con los países que participan en PISA durante años para desarrollar un marco conceptual y también unos instrumentos de evaluación de la competencia global.

Hemos propuesto cuatro dimensiones. En primer lugar, para hacerlo bien en esta nueva evaluación de PISA los estudiantes deben demostrar que pueden combinar su conocimiento sobre el mundo con el pensamiento crítico. Pero también tienen que entender y valorar las formas de pensar y las perspectivas y visiones del mundo de otros. Han de adaptar su comportamiento y su comunicación para interactuar con individuos de distintas tradiciones y culturas. Y, finalmente, hacemos muchas preguntas para descubrir cómo de preparados están los jóvenes para un futuro sostenible.

¿Qué le responde a quienes consideran que los valores y actitudes no pueden ser evaluados?

—Creo que tenemos que empezar a ser más creativos a la hora de evaluar. Automáticamente asociamos evaluar con una prueba escrita en la que cada pregunta tiene una serie de posibles respuestas y donde la suma de respuestas correctas nos da la nota final. Claro, esta perspectiva no funciona con un constructo multidimensional como la competencia global. Pero, como se ha podido comprobar, hemos encontrado una respuesta metodológicamente robusta a este desafío.

¿Estamos ante un ensayo o los resultados son fiables?

—Los resultados son fiables y nos ofrecen las bases para un mayor desarrollo posterior.

¿Es la prueba PISA hoy algo distinto de lo que fue en sus orígenes?

—Sí, PISA ha evolucionado considerablemente. Hoy podemos evaluar formas complejas de razonar y de trabajar y podemos extraer aspectos sociales y emocionales del aprendizaje. Todo esto no era posible cuando se creó en 2000.

(Esta es solo una parte de las cuestiones enviadas por correo electrónico a Andreas Schleicher. El resto — sobre España en la edición de 2018 o sobre la viabilidad de medir las soft skills— se quedaron sin contestar “por no tener suficiente evidencia por el momento para responder”)

EL DIARIO de la EDUCACIÓN

Cuando la ventilación de las aulas no parece factible

El invierno está a la vuelta de la esquina y cunde la preocupación sobre qué hacer cuando tener las ventanas y puertas abiertas no sea una posibilidad real para atajar posibles contagios en las aulas. Las soluciones pasarían, presumiblemente por llevar abrigos en clase, utilizar las calefacciones con las ventanas abiertas o el uso de ventilación mecánica.

Redacción - Diario de la Educación. 03/11/2020

Las temperaturas ya comienzan a bajar de manera ostensible en todo el Estado. Por delante, muchos meses de frío y mal tiempo que amenazan, de una forma u otra, el protocolo previsto por las administraciones sanitarias y educativas, principalmente, en relación a la ventilación de las aulas.

El gasto previsto en calefacción en los centros educativos, seguramente sea muy superior al de inviernos anteriores. De hecho, algunas direcciones ya tienen previsto invertir parte de lo que la Administración les ha facilitado del Fondo Covid solo para asumir el gasto en gasoil para sus calefacciones.

Mantener ventanas y puertas abiertas el máximo tiempo posible se va a convertir, en pocos días, en un problema relativamente importante. Y las recomendaciones desde Sanidad y Educación (ya sea gobierno central o autonómico) no han variado. Ni tienen visos de hacerlo en las próximas semanas.

Para intentar paliar parte de estos efectos, hace unos días, el CSIC publicaba una guía práctica con consejos sobre ventilación en colegios e institutos y que, a su vez, toma parte de sus consejos de otra publicada por la Universidad de Harvard. En ella, en realidad, pocos datos nuevos que cambien los protocolos asumidos hasta ahora.

Se aconseja tener la mayor parte del tiempo posible las ventanas y puertas de las aulas abiertas para que sea lo más constante posible la ventilación cruzada. En el protocolo de los ministerios de Sanidad y Educación se establecía que, al menos, las aulas se ventilen 10 o 15 minutos al empezar y terminar la jornada lectiva, también durante el tiempo de recreo. Y, en la medida de lo posible, durante toda la día.

La guía del CSIC, a esto, suma que alumnado y profesorado utilice ropa de abrigo durante las clases para que puedan estar abiertas las ventanas, siquiera parcialmente, en un equilibrio entre el riesgo de contagio y el confort térmico.

Si la ventilación natural no es suficiente, la guía del CSIC recomienda utilizar «equipos extractores o impulsores individuales con un caudal de aire adecuados».

Como última opción, pero no excluyente de las demás, se hace necesario purificar el aire con equipos provistos de filtros HEPA. Estos han de colocarse en el centro de cada aula para que su trabajo sea eficiente, aunque dicen los expertos que pueden ser perjudiciales al causar falsa sensación de seguridad.

En cualquier caso, la guía recomienda que se hagan mediciones de CO₂ para conocer las necesidades de ventilación de las aulas. En el exterior, indican, estas mediciones rondarían las 420 ppm (partes por millón) y, en los interiores no deberían sobrepasar las 800 ppm. Si lo hicieran, se hace necesaria la ventilación de las aulas. Niveles superiores a las 1.000 ppm tienen efectos negativos en la capacidad de concentración del alumnado y en el aumento del decaimiento; y si se superasen los 2.000 empezarían los dolores de cabeza. Además, estas cifras nos indican la falta de ventilación y señalan una posiblemente excesiva concentración de la Covid en el ambiente.

Sumado a todo lo anterior, el uso de mascarillas, la higiene de manos y el mantenimiento de la distancia de 1,5 metros siguen siendo necesarias para la contención de los contagios. Contagios que siguen detectándose de forma importante en las aulas. La semana pasada, según los datos del Ministerio del interior, se produjeron 200 nuevos brotes que sumaron 1.200 personas contagiadas.

Preguntados los ministerios de Sanidad y Educación, no está prevista una revisión de los protocolos ni unas recomendaciones de cara a la llegada del mal tiempo en todo el país. Remiten a las guías ya publicadas tanto por su parte como de las comunidades autónomas.

Suspensión a las aulas

El reciente estudio de la Plataforma Edificación Passivhaus junto a la Universidad de Burgos se muestra contundente. Los colegios e institutos, en cualquier parte del país y bajo cualquier condición climática y meteorológica, suspenden a la hora de ofrecer espacios de confort y seguridad tanto para el profesorado como para el alumnado.

Durante el curso 2017-2018 estudiaron las variables de temperatura interior, nivel de humedad y de CO₂ en las aulas de 43 centros educativos de todas las provincias del país. La nota media total, en una escala de 0 a 10, para la calidad del confort en las aulas es de 1,6 puntos.

Bajo la premisa de que la temperatura de las aulas sea de 20°C a lo largo del día, con una humedad de entre el 40 y el 60 % y con una concentración de CO₂ en el ambiente inferior a los 1.000 ppm.

Cuando los datos de temperatura comienzan a ser buenos en un aula es ya cerca de las 12:00 del mediodía. Momento en el cual los niveles de CO₂ ya están por encima de esas 1.000 partes por millón. Cuando un parámetro está bien, algún otro deja de estarlo.

El estudio desvela que, de seis horas de clase, solo el 16 % de ellas reúnen buenas condiciones de temperatura, humedad ambiente y niveles de CO₂.

Aunque el estudio se realizó antes de la aparición de la pandemia, hoy por hoy, sus conclusiones apuntan directamente a la situación que se vive en los centros educativos. Desde la Plataforma, una asociación sin ánimo de lucro, defienden la necesaria rehabilitación de todos los centros educativos del país. Con ella se conseguirían mejorar los resultados obtenidos, al mismo tiempo que supondría una importante reducción de las emisiones de CO₂ de los propios centros (por bajada del consumo de combustibles para el mantenimiento de las temperaturas) y, finalmente, un importante ahorro de costes económicos.

5.700 millones será el presupuesto de Educación para 2021

Si finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, el incremento de la financiación del Ministerio de Educación y FP será de un 139 % con respecto a los actuales y alcanzará la cifra de 5.697 millones de euros el próximo año.

Pablo Gutiérrez de Álamo. 04/11/2020

De estos 5.700 millones, 1.800 corresponden a la redistribución de las partidas de formación profesional para el empleo, que pasarán definitivamente al Ministerio de Educación desde el de Trabajo, así como por el incremento de los presupuestos estatales y por los fondos que estén por llegar desde la Unión Europea.

Las apuestas fundamentales de la cartera de Isabel Celaá serán, principalmente, tres: equidad (vía becas), formación profesional y digitalización de la educación.

Apuesta por la equidad

En lo referente a equidad, se dedicarán 2.360 millones a tres partidas fundamentales: el aumento de las becas y ayudas al estudio; el aumento de las plazas públicas de educación infantil de primer ciclo (0-3 años), y a la lucha contra el abandono escolar temprano (AET).

El sistema de becas, que todavía se encuentra, como ha confirmado el secretario de Estado, Alejandro Tiana, en periodo de revisión para su transformación, recibirá 515 millones de euros adicionales para 2021 hasta un total de 2090 millones. Un incremento del 35%, el mayor presupuesto que se haya dado en este apartado de los presupuestos nunca.

Por delante, más allá de la aprobación de los PGE, está la convocatoria en próximas fechas del Observatorio de becas para que el Ministerio dé cuenta de las novedades. La intención de Educación es aclarar lo máximo posible cuáles serán las cuantías que cada peticionario recibirá para que, así, puedan organizarse de cara a cada curso escolar. Para ello, entre otras medidas, se intentará dejar en la menor expresión posible la parte variable que instituyera en su momento José Ignacio Wert como ministro de Educación.

Para el aumento de las plazas de educación infantil de primer ciclo, el ministerio se ha planteado un plan a tres años vista con la idea, ha sostenido esta mañana la propia ministra Celaá de que las familias vulnerables tengan mayor posibilidad de acceso a estas plazas. Idea en la que ha insistido Alejandro Tiana. Está previsto que sea mediante un programa de cooperación territorial en el que, además, quieren incluir a las administraciones locales. Para el próximo año está previsto que la mayor parte de las plazas que se creen se hagan en centros ya existentes, como escuelas infantiles o colegios de infantil y primaria. Algo que tendrán que decidir las comunidades autónomas.

El aumento de las plazas de 0-3 se ha interpretado como un ataque a la escuela concertada, que no recibirá financiación para el crecimiento de sus plazas. Según Alejandro Tiana «es un error desde cualquier punto de vista». El objetivo del Ministerio es pasar del actual 34 % de cobertura hasta porcentajes cercanos a los de comunidades como Euskadi, es decir, alrededor del 54 %. Pero cubriendo las necesidades de escolarización de la población más vulnerables, para lo que se apuesta por plazas públicas y gratuitas. «Son los más vulnerables, los que más necesitan esas plazas», ha insistido el secretario de Estado.

Está previsto que se inviertan 200 millones de euros en aulas de 0-3 años, para que se abran 21.794 plazas que podrán estar en centros ya en funcionamiento y en otros que eventualmente se construyan.

Finalmente estarán el programa PROA+ centrado en la disminución del abandono escolar temprano. Durante este 2020 ya se repartieron 60 millones entre las autonomías para que lo pusieran en marcha y está previsto que para 2021 haya una propuesta a las administraciones educativas competentes para que estos programas reciban financiación tanto estatal como autonómica. Habrá 80 millones para que 1.800 centros de especial complejidad, el próximo año, puedan poner en marcha estos programas.

Digitalización de la educación

En los últimos meses, la pandemia y el confinamiento, han puesto de relieve la difícil situación en la que se encuentran muchos centros educativos. Redes wifi que no dan más de sí, equipos informáticos más o menos obsoletos y una gran brecha digital entre el alumnado que, aún hoy permanece sin contabilizar del todo.

Más allá de las iniciativas que se pongan en marcha por parte de empresas del sector tecnológico para esta digitalización, desde el Ministerio quieren aumentar la cifra de los dispositivos electrónicos anunciados hace meses para el alumnado con mayores dificultades. A esos 500.000 dispositivos que todavía se están licitando, Educación hará la inversión de 150 millones de euros más para que haya otros 250.000. Tres cuartos de millón de dispositivos que irán a parar al alumnado que las comunidades autónomas decidan en función de sus necesidades materiales.

También se invertirán 827 millones para la puesta en marcha de 23.000 aulas digitales para sostener el sistema híbrido de enseñanza. A estas cifras se sumarán 31 millones para la formación del profesorado en digitalización de la enseñanza y otros 2,5 para las y los docentes de formación profesional.

Con todo ello, este proyecto de digitalización absorberá 1.013 millones de euros en 2021.

La reforma de la FP

Esta es una de las grandes apuestas del Gobierno de Pedro Sánchez que ya anunciara una gran reforma hace unos meses. Además de la inclusión de la FP para el empleo dentro de las competencias del Ministerio de Educación, con su consiguiente ampliación presupuestaria, está previsto que la formación profesional reciba 1.628 millones de euros. De esta cifra, casi 1.000 millones (974) irán a parar a la FP para el empleo, mientras que la del sistema educativos recibirá en 2021 654 millones, lo que supone un aumento del 349 % si se tiene en cuenta que su presupuesto en 2020 es de 187 millones.

Junto a este aumento tan importante de recursos, la reforma de la formación profesional se basará en la promulgación de una ley específica en los próximos meses.

Entre los programas sobre los que apuesta el Ministerio para la mejora de esta etapa educativa se encuentra la acreditación de la experiencia de más de medio millón de personas que, a pesar de tener conocimientos adquiridos por la experiencia laboral, no tienen ningún título que lo acredite. Para conseguir revertir esta situación se invertirán 127 millones.

La falta de plazas de formación profesional lleva siendo un importante problema grave en muchas comunidades autónomas desde hace ya años. Por ello, el Ministerio tiene un plan que prevé la creación durante cuatro años de un total de 200.000 nuevas plazas. El primer paso será invertir el año que viene 64 millones para que se creen 47.400 nuevas plazas que puedan cubrir la demanda actual de estos estudios.

La otra gran pata sobre la que se apoyará el plan de modernización de la FP en los próximos años tiene que ver con la entrada del bilingüismo a estos estudios profesionales, tanto en los grados medios como en los superiores. Para ello se invertirán 170 millones de euros.

El objetivo, ha explicado la ministra Celaá es que «en tres años, el 10 % de los ciclos de FP sean bilingües».

Cataluña confirma que el alumnado de secundaria se auto tomará la muestra PCR con la supervisión del profesor

La secretaria general de Educación, Núria Cuenca, confirmó que se está preparando un cambio de protocolo para que el alumnado de secundaria se haga la prueba del frotis nasal él mismo, siguiendo las explicaciones del profesor, que previamente habrá recibido una formación para videotutorial. El objetivo es liberar recursos del sistema de Salud para que se puedan destinar a otros frentes.

Víctor Saura. 04/11/2020

Será un procedimiento muy sencillo, aseguró Nuria Cuenca, que lo ha descrito así: «Únicamente habrá que vigilar que haya un buen lavado de manos previo a la toma de la muestra, después colocar bien el bastoncillo en las fosas nasales, primero una y luego la otra, poner el bastoncillo dentro del tubo, sellarlo en una bolsa, etiquetarla y ponerla en un contenedor que recogerán los profesionales sanitarios». Y también ha subrayado que «no hay ningún riesgo biológico por parte de los profesores, porque quien realizará estas pruebas serán los mismos alumnos, con la guía y supervisión de los profesores, que en cada momento les irán indicando cuáles son los pasos que deben hacer».

Este cambio de protocolo no será inmediato, pero sí rápido. Ya se ha informado a la Junta de Directores y esta misma semana se informará a los sindicatos. Y ya se está preparando la formación (normalmente, vía videotutorial) que deben recibir los docentes para poder hacer este guía. «Hasta que no tengamos planificada esta formación, no pondremos en marcha las pruebas en esta modalidad. Estamos preparando la transición a este cambio», precisó Cuenca. Se utilizarán en todos los cribados que se hacen cuando un miembro de un grupo burbuja es positivo, siguiendo la misma organización que hace el centro cuando esto ocurre. Es decir, el grupo se confina, se les llama un día, toman la muestra y siguen confinados hasta que pasan los 10 días de cuarentena.

El objetivo de esta medida, que ya se avanzaba en un documento del Departamento de Salud hace unos días, tal y como ya informó este diario, es liberar manos de la atención primaria para poder dedicarse a otros frentes en la lucha contra la pandemia. Con todo, no se soluciona el problema del retraso en los resultados de las pruebas PCR, que la propia secretaria general ha reconocido que existe.

Oposición sindical

El primer sindicato en reaccionar ha sido CCOO, que en un comunicado posterior a la rueda de prensa de la secretaria general ha reclamado que la supervisión de estas automuestras en los centros las continúe haciendo el personal sanitario. «Si el Gobierno no ha querido acordar con los agentes sociales este procedimiento de actuación, le corresponde la contratación del personal sanitario adecuado para la supervisión de la toma de automuestras, que esté capacitado para responder en los casos de posibles complicaciones», afirma el comunicado, en el que también se argumenta que «no se puede continuar sobrecargando los equipos educativos con tareas que no les son propias, como es el caso del seguimiento de contactos, que debería realizar personal contratado al efecto».

«Desgraciadamente, esta nueva instrucción del Departamento de Educación responde a la misma dinámica que hemos visto desde el inicio de la pandemia. El Gobierno vuelve a mostrar un absoluto desprecio a la interlocución social, ya que obvia la negociación con la representación sindical. En un momento de tanta gravedad como el que estamos viviendo, los grandes acuerdos y consensos serían lo deseable, pero nuestro gobierno ha optado por la unilateralidad», añade CCOO.

La Lomloe prevé dar más peso a las enseñanzas artísticas en primaria y secundaria

Varias enmiendas se han presentado en el Congreso para dar un papel más preponderante a materias como la Música o la Educación Plástica, Visual y Audiovisual tanto en primaria como en ESO. Profesionales de estas

asignaturas no terminar de confiar en que finalmente la nueva ley recupere el peso de materias como Música o Plástica.

Pablo Gutiérrez de Álamo. 05/11/2020

Las materias que en su momento José Ignacio Wert aseguró que distraían al alumnado del conocimiento importante (léase mates y lengua), parece que van a recuperar, de alguna manera, la importancia que tuvieron hace años. Al menos así se deduce de algunas de las enmiendas que ha presentado PSOE y Unidas Podemos al texto de la Lomloe, ahora mismo en trámite parlamentario.

Entre los objetivos, que en primaria recupere el espacio que la Lomce les quitó, para tener el peso de asignaturas como Lengua y Matemáticas y que no se vean relegadas a asignaturas de áreas específicas. Y como horizonte de las enmiendas, que durante los seis cursos de primaria el alumnado pueda adquirir conocimientos procedentes de Educación Plástica y Visual, por un lado, y/o de Música y Danza, por otro.

En la ESO, las enmiendas al proyecto de ley pretenden asegurar que todo el alumnado pase por, al menos, alguna de las materias artísticas (Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual), durante 1º, 2º y 3º de la ESO. Actualmente, se cursan en 1º y 2º para, después, en 4º, pasar a ser una materia elegible.

Inmaculada Contreras es profesora de Dibujo en un instituto andaluz. Para ella, en principio, cualquier modificación de la ley que le dé más peso a estas enseñanzas, aumentando su carga a lo largo de los cursos además de a horaria, es algo positivo. Aún así, se muestra escéptica. «Hasta que no lo vea...».

Contretas comenta cómo desde el año 92 está escuchando que las enseñanzas artísticas llegarían a la primaria sin que lo hayan hecho realmente y viendo cómo con cada nueva reforma educativa el peso que tenían en el currículo común iba diluyéndose en las «cosas importantes».

«Ninguna confianza», así lo ve Pablo del Pozo, profesor de Música en el IES Antonio de la Torre, en el Puerto de Santa María, Cádiz. Entiende que si finalmente la Religión sale del horario lectivo, habrá una hora más que puedan utilizar pero «hay muchas materias en la cola», asegura, como Filosofía.

En cualquier caso, con las dos horas actuales a la semana, Contreras asegura que se pueden hacer cosas con cierta dignidad, pero que tres horas sería perfecto para poder hacer desarrollos más interesantes. El siguiente escollo está en que, según las enmiendas a la Lomloe, la carga horaria estará en manos de las comunidades autónomas.

«Los de Música y Plástica, asegura Inmaculada Contreras, tememos cualquier reforma», porque siempre han sido el comodín para sacar más horas para otras materias. Tan solo la Logse, afirma Del Pozo, se preocupó, sobre el papel, del desarrollo de estas materias. Pero nunca tuvo el presupuesto necesario para su desarrollo real.

Otros problemas

Las artísticas, además de haber perdido peso con las reformas educativas tienen más problemas. Uno de ellos, como no podía ser de otra manera, son los currículos «sobredimensionados y hechos con poco criterio», comenta Contreras, que generan, como a casi cualquier docente, esa angustia habitual de no poder llegar hasta el final para el mes de mayo o junio.

Para esta profesora, habría que basar estos contenidos de verdad, en las competencias. «Prefiero poco pero bien aprendido», sostiene. Además deberían ser unos currículos en los que hubieran participado docentes que están realizando su labor en las aulas hoy por hoy, con contacto directo con chicas y chicos, con conocimiento de lo que pueden hacer con ratios de 30 alumnos o siendo quienes no tienen derecho a, por ejemplo, tener codocencia como otros compañeros. Y ejemplifica con la última de las modificaciones legislativas, que envió el contenido de 3º de la ESO al alumnado de 2º cuando se decidió que en ese año no era necesaria la asignatura. Sin tener en cuenta la madurez del alumnado de 2º frente al de 3º.

Algo similar dice Del Pozo. Los contenidos, más allá de que sean inabarcables, están situados incorrectamente en los diferentes cursos. Y no solo eso, también los ve excesivamente eurocéntricos, de manera que la historia de la música tiene la mirada demasiado puesta en Europa, obviando otras músicas del mundo. Aunque cree que, aun con todos los problemas que arrastra su materia, es posiblemente la única oportunidad de muchos alumnos de acercarse a compositores como Mozart.

Este profesor de Música también cree que la Música (como otras materias artísticas) «son las más interdisciplinares; si hablamos de competencias de verdad se hace trabajo en grupo, se tocan diferentes 'palos', son perfectas para la educación emocional...».

Ambos coinciden, además, que las ratios, al menos en secundaria, rondando los 30 chicos y chicas, no ayudan en absoluto a sus materias (y a ninguna seguramente).

De fondo, como suele pasar, se encuentra el concepto que cada quien tiene de la educación. Si como herramienta para la formación integral de las personas o como pieza útil para alcanzar un puesto de trabajo más adelante.

Y ahora, en la educación Covid, Del Pozo describe las dificultades que tiene: «No podemos tocar ningún instrumento, ni cantar, ni bailar. Nos centramos en historia de la Música y poco más»

ESCUELA

Invertir en educación podría aumentar un 10% el PIB de economías emergentes. EDITORIAL

Reducir la pobreza infantil solo se conseguirá a través de la inversión en educación. Las consecuencias dramáticas de la pobreza infantil y lo que implica para un niño verse dentro del círculo de la pobreza y la falta de oportunidades significa fracaso y abandono escolar, falta de lugares seguros donde jugar, no tener calefacción en invierno o una mayor exposición a la violencia. No hay que olvidar que si incluimos la variable género, la situación se agrava bastante. Como expresó el que fuera economista del Banco Mundial Lawrence Summers, «La inversión en la educación de las niñas puede muy posiblemente ser la inversión de mayor retorno disponible en el mundo en desarrollo». Cada año de escuela secundaria mejora el poder de ganancia de una niña en aproximadamente un 20 por ciento. Recientemente, según un nuevo estudio elaborado por la entidad financiera Citi y la ONG Plan International, desvela que las economías emergentes que logren que el 100% de las niñas finalicen la educación secundaria en 2030 podrían registrar un aumento del PIB de alrededor de un 10%.

La educación de las niñas genera grandes beneficios no solo para los ingresos y el crecimiento económico, sino también en otras áreas cruciales, como mejorar las tasas de supervivencia y la salud de los niños y las mujeres, reducir el crecimiento de la población, proteger los derechos de los niños y retrasar el matrimonio infantil, empoderar a las mujeres en el hogar en el lugar de trabajo y mejorar la adaptación al cambio climático.

Este informe aborda por un lado, una investigación detallada sobre las complejas barreras que enfrentan las adolescentes, así como un análisis de las intervenciones que se requieren para superarlas. La discriminación de género deja a las adolescentes más vulnerables que a los niños, y constantemente enfrentan barreras para acceder y completar una educación de calidad. En todo el mundo, las niñas tienen menos probabilidades de volverse económicamente independientes, participar en la fuerza laboral y vivir libres de violencia. Por es de gran importancia, la educación y el empoderamiento de las niñas está vinculado a varios objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos la reducción de los conflictos, el acceso a agua potable y saneamiento y la acción por el clima.

Las polémicas de la LOMLOE, punto por punto

Mar Lupión

La LOMLOE está aún lejos de ser una realidad en el sistema educativo español y ya ha levantado ampollas. En especial entre la comunidad educativa de la red privada y concertada. Como les venimos contando, diversos colectivos (asociaciones de padres COFAPA y CONCAPA, los sindicatos FSIE y FEUSO, las patronales Escuelas Católicas, CECE, Fundació Escola Cristiana de Catalunya y las entidades Ven y Verás, EnLibertad, Yo Libre, Reli es Más, FEDMA y Libres para Elegir) se han unido en la Plataforma «Más Plurales» para mostrar su rechazo contra este proyecto de Ley. Un texto que consideran ideológico y que atenta contra la libertad de elección de los padres.

Cabe preguntarse cuáles son los puntos de la LOMLOE que causan más fricción entre los representantes de la privada y la concertada. Pues bien, estos parecen estar relacionados con la carga ideológica que —aseguran— tiene la ley, el papel de la religión en las aulas, la falta de consenso que denuncian, la educación inclusiva o la situación de los profesores de esta red.

Repasamos cada una de las cuestiones y analizamos los argumentos en cada punto.

¿Es la LOMLOE una ley ideológica?

Esta acusación se ha repetido mucho desde que se conociera el anteproyecto de la también conocida como «Ley Celaá».

La defiende, por ejemplo, Javier Muñozerro, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), que nos explica que «entendemos que es una ley ideológica en dos facetas: la forma y el fondo. En primer lugar, se defiende un modelo de escuela propio de la ideología de los partidos del gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Esto es, una escuela única, pública y laica». Insiste en que «se coarta todo el ejercicio de la libertad de elegir modelo de escuela desde el momento en el que desaparece la pluralidad de la oferta».

Para Miquel Mateo, secretario general adjunto de la Federació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), «las leyes orgánicas y, en concreto, las que desarrollan el sistema educativo, siempre están cargadas de ideología». Subraya que «la concepción del servicio educativo en nuestro país recoge la coexistencia, en régimen de absoluta complementariedad, entre la escuela pública y la privada-concertada. La LOMLOE rompe

este equilibrio, dando preeminencia a la pública». Aclara que «no estamos en contra de la pública, en absoluto, pero vemos que intenta primar la pública, lo que representa una carga ideológica: el servicio de la educación asumido como una potestad exclusiva de la autoridad pública».

Del otro lado, José Ramón Merino, responsable de política educativa de STEs-Intersindical, considera que la privada y la concertada «defienden unos privilegios y lo envuelven dentro del manto ideológico. Todo es ideológico: una ley introduce las reválidas y otras limitan las repeticiones. Esto también tiene un sustrato ideológico. Lo que hay que plantearse aquí es que hay consenso en ciertas materias, ciertos temas que todo el mundo comparte, incluso partidos de la derecha como el Partido Popular o Ciudadanos. Por ejemplo, la defensa del medio ambiente o la coeducación. Esto es consenso, valores asumidos por todo el mundo y presentes en la ley educativa».

Por el contrario, Alfonso Aguiló Pastrana, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), sostiene que la ideología de la ley se deja ver «porque los temas que más polémica están creando no son grandes desafíos pedagógicos ni de resultados en educación. Son cuestiones en las que el Ministerio ha apostado por una postura muy firme que no se corresponde con problemas reales, sino con su deseo de que la enseñanza concertada pierda presencia. Los problemas que hay en la pública y en la concertada no dependen de la existencia o no de la otra red. Es como si para mejorar la concertada yo quisiera maltratar la pública. Me parece, en general, una mala estrategia».

Un punto de vista que contrasta mucho con lo que defienden, por ejemplo, desde el Sindicat de Treballadors i Treballadors de l'Ensenyament de València (STEPV), que señala que es imprescindible que la LOMLOE «potencia la red pública, para que esta sea el eje vertebrador del sistema educativo, puesto que es la única que puede garantizar el servicio público universal educativo y acabar con las desigualdades».

¿Está participando la comunidad educativa en el trámite parlamentario de la LOMLOE?

La palabra «consenso» es la más repetida entre la comunidad educativa cada vez que se modifica la ley educativa y, al mismo tiempo, parece la aspiración más difícil de conseguir.

Miquel Mateo, de FECC analiza este aspecto y reflexión: «hace ya muchos años que la comunidad educativa solicita el consenso. No puede ser que cada vez que se cambie de gobierno, se modifique la ley educativa. Desde que llegó la democracia ha habido 8 ó 9 leyes educativas, tantas como alternancias de gobierno. Esto no es bueno ni para el equilibrio del sistema ni para la percepción social educativa. Tiene que haber un pacto educativo que supere los intereses partidistas concretos que en ese momento sean mayoritarios».

Alfonso Aguiló, de CECE, reconoce que «el Ministerio ha contactado con nosotros, sí. Pero yo entiendo la participación como un esfuerzo en alcanzar el consenso, no simplemente recibir a las personas con mucha corrección, pero sin tener en cuenta sus propuestas. No solamente no se han escuchado nuestras peticiones, sino que con las enmiendas se ha empeorado notablemente la situación», lamenta.

Más duro es Javier Muñoyerro (FSIE), que asegura que «es la primera vez en la historia de la democracia española que en el trámite parlamentario de una Ley Orgánica se ha vetado el debate social, no se ha permitido la intervención de los miembros de la comunidad educativa. No ha habido comparecencias ni posibilidad de intervenir en la Comisión de Educación».

Una visión muy diferente de la de José Ramón Merino (STEs-Intersindical), que considera que «en esta última fase ha habido poca participación, es verdad, pero hay una ofensiva ideológica por parte de la derecha política y eso hace complicado el proceso. No podemos olvidar que tenemos la ley Wert desde 2013 y ya entonces fueron muchos los partidos de la oposición que se comprometieron a derogarla si llegaban al gobierno. Ha pasado mucho tiempo de eso».

¿Qué pasa con la asignatura de religión?

Si la LOMLOE se aprueba, se eliminará la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y su calificación no se tendrá en cuenta en la nota media para becas o los procesos de acceso a la universidad. Una medida que no ha gustado, por ejemplo, en la FECC.

Miquel Mateo apunta a que «la presencia de la religión en los planes de estudio está determinada por los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español. Son unos acuerdos que, cabe recordar, tienen rango de tratado internacional y que establecen que la religión será de oferta obligada en los centros y de libre elección por parte del alumnado».

Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato USO (FEUSO), cree que existe «una obsesión general porque piensan que la asignatura de religión es una especie de catequesis. Se olvidan de que los requisitos para acceder a ser profesor de Religión son, por ejemplo, la posesión de un grado universitario en Teología. Los contenidos se refieren al hecho religioso, a la cultura religiosa y a las claves de comprensión de la religión y del mundo religioso y esto forma parte de la cultura básica de cualquier persona. Creo que es una asignatura moderna, con un profesorado bien preparado que, además, se somete a la elección de los padres año tras año».

Desde STEs-Intersindical, sin embargo, consideran que «tiene que salir del currículo y del horario escolar. Hay unos acuerdos con El Vaticano, sí, pero de hace 41 años. Creemos que es tiempo de que España se modernice, que entre en los parámetros europeos. Sin ir más lejos, hace unos días, el presidente de Francia insistía en la importancia de la escuela pública y, en concreto, de la laicidad dentro de la misma. No es el único. Y ojo, hablamos de dirigentes políticos que no son precisamente de izquierdas».

CECE asegura que la religión «en su modalidad confesional o en la de valores y cultura religiosa» está presente en toda Europa «como la música, la plástica, la literatura o el deporte, con independencia de que haya preferencias entre los alumnos. Son realidades culturales que todo Occidente considera importantes para el conocimiento básico de los estudiantes. No es un raro privilegio español, es algo que tienen todos los países».

Por su parte, Miguel Moya, de Docentes Por La Pública, nos explica que «a nuestro juicio, la religión debe ser una cuestión privada y que quede fuera de la escuela. Nos parece lógico que no tenga peso académico. Además, consideramos que el profesorado no está en las condiciones adecuadas, ya que han de responder ante sus superiores religiosos y, por otro lado, buscar la manera de competir para poder mantener su puesto de trabajo, como es lógico».

¿Educación inclusiva o centros de educación especial?

La LOMLOE plantea el desarrollo de un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para, además de escolarizar a los alumnos que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

Esta iniciativa no ha sido bien recibida por los responsables de la privada-concertada ya que, consideran, llevará irremediamente al cierre de centros de educación especial y que hay casos en los que son imprescindibles.

Es lo que argumentan, por ejemplo, desde FECC: «estamos a favor de la educación inclusiva, no hay duda. El alumnado, si comparte con el resto de sus compañeros su experiencia en la escuela, les resulta positivo. Lo que no se puede es llegar al extremo de suprimir escuelas de educación especial porque hay perfiles de alumnos que han de mantener su experiencia educativa en centros que atiendan de manera concreta, real y efectiva las necesidades de estos chicos y chicas. Por tanto, sí a la inclusividad, pero no a una inclusividad que suponga la extinción de unas escuelas que han demostrado y demuestran una gran eficacia en la atención a unos perfiles de alumnos muy concretos».

En la misma línea se expresan desde FSIE, subrayando que «entendemos que el objetivo del sistema educativo es la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Estamos de acuerdo con que se promueva que los centros ordinarios tengan la suficiente dotación para atender a todos los alumnos, pero nos oponemos a que esto suponga la desaparición de los centros de educación especial. Esto supondría coartar la libertad de los padres que quieran para su hijo un centro de educación especial por las circunstancias que sean».

A la dotación económica hacen referencia también en STEs-Intersindical. Merino insiste en que «la clave son los medios. Si hay recursos económicos suficientes y se puede dotar a estos alumnos del personal que necesitan, entonces sí pueden estar integrados dentro del sistema regular. Si no hay esos medios, si el profesor ha de atender a una variedad de alumnos con necesidades distintas, es imposible. Lo primordial es que se pongan los medios que permitan contratar al profesorado especialista que necesitan estos chicos y chicas».

¿Hay equiparación entre los profesores de la pública y la privada-concertada?

Los sindicatos más representativos de la concertada y privada se muestran indignados porque el proyecto de la LOMLOE no incluye ninguna referencia ni mención que suponga una mejora de las condiciones laborales de los docentes de esta red. Una mejora que considera imprescindible.

Por ejemplo, Antonio Amate (FEUSO), dice estar «indignado, decepcionado y enfadado». Nos cuenta que «con el ministro Wert tuvimos unos recortes importantes, con los que se ampliaba la jornada lectiva al profesorado, el tiempo para cubrir sustituciones y la ratio alumno por aula. Es decir, se cobraba menos y se trabajaba más. Llevamos con la reversión de los recortes 7 años». Reprocha a la ministra Celaá que «propone una ley al respecto y se le dice de manera clara que es el momento de que se negocie algún tipo de período de transición para que la carga lectiva de la concertada se equipare con la de los centros públicos. No nos ha hecho caso, todo se ha quedado en una recomendación. Nos comimos los recortes en condiciones de igualdad, pero cuando se revierten se olvidan de nosotros».

STEs-Intersindical insiste en su respeto absoluto por los docentes y todos los trabajadores de la concertada y la privada, pero argumenta que «este es un debate ya superado. Ya hubo una homologación salarial hace años, las diferencias no son grandes, creemos que este debate debería estar superado ya».

Las aulas ya son el cuarto principal foco de contagios

Daniel Martín

Cuando suenan de nuevo tambores de confinamiento domiciliario por la pandemia de la Covid-19, los centros educativos siguen aumentando su incidencia sobre el total de contagios y son ya el cuarto principal foco de

propagación del virus. Un virus que sigue golpeando nuestro país de manera prácticamente inexplicable. Siendo el trigésimo país del mundo por población —con 47 millones de habitantes— es el quinto con mayor número de casos en términos absolutos, con 1,2 millones de casos confirmados acumulados, a tenor de los últimos datos facilitados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad. Por delante de España tan solo están Estados Unidos —con 9,1 millones de casos—, India —8,3—, Brasil —5,5—, Rusia —1,6— y Francia —1,4 millones—, todos ellos países con una población mucho mayor.

Dentro de este contexto, el ámbito educativo sigue aumentando su relevancia negativa en la propagación del virus. Según la última actualización de la situación actual de coronavirus por ámbitos, la de la semana del 22 al 30 de octubre, los contagios en centros educativos aumentaron durante ese período un 11,16% respecto al anterior período, cuando a su vez había aumentado más de un 13%. En total, se han tenido que confinar unas 7.000 aulas durante el inicio del curso escolar.

Los brotes en centros educativos aumentan más del 13%

El CCAES de Fernando Simón sigue sin discriminar por edades o etapas en sus informes, aunque reconocía recientemente de viva voz que donde más abundaban los casos en enseñanzas no universitarias era en la etapa de Secundaria.

En todo caso, en el total del ámbito educativo se produjeron 1.220 casos repartidos entre 204 brotes. Unos brotes que han crecido más que el número de casos respecto al anterior período analizado, un 13,25%. En el acumulado, son ya 5.693 casos confirmados en centros educativos durante este curso, en el que se han detectado casi un millar de brotes, 936.

Respecto a los datos de la última semana, los centros educativos son el cuarto foco de contagios en nuestro país, solo por detrás del ámbito social, del sociosanitario y de familiar, y por encima del laboral. Para ejemplificar el peso de la educación en la propagación del virus, sirvan esos más de mil casos en el ámbito educativo frente a los 137 entre clientes y trabajadores en bares y restaurantes durante la misma semana analizada.

El informe, sin embargo, resta importancia al papel del ámbito educativo dentro de la magnitud de la epidemia del SARS-CoV-2 en nuestro país. «En general son brotes de pequeña magnitud, con una media de 6 casos por brotes y los casos asociados a estos brotes suponen alrededor del 1% del total de casos notificados en este período», detalla, en referencia al lapso de tiempo entre el inicio de la desescalada, la pasada primavera, hasta ahora.

Los alumnos de Secundaria, los más afectados

Para tratar de estrechar el cerco sobre dónde poner el foco exactamente dentro de los centros, el sindicato Professors de Secundària (spepc-sps), con datos de la Generalitat de Catalunya de este martes, estima que el 61% de los contagios se producirían en la Secundaria, en la línea de lo señalado por Simón, que no aportó más datos en su última intervención al respecto, hace dos semanas.

Un reciente artículo publicado en la revista científica Nature trataba de arrojar luz sobre el papel de los centros dentro de los contagios por coronavirus analizando distintos informes con datos de varios países y concluía, entre otras cosas, que los niños mayores contagian más que los más pequeños, lo que explicaría esta mayor propagación del virus en el caso de los institutos españoles frente al caso de los colegios.

Los niños mayores contagian más que los más pequeños, lo que explicaría la mayor propagación del virus en los institutos

El artículo sostiene que «los datos recopilados a nivel mundial han demostrado anteriormente que las escuelas pueden reabrir de manera segura cuando la transmisión comunitaria es baja», si bien en nuestro país no es esa precisamente la situación. En el artículo, que no es científico, sino periodístico, la autora explica que «a pesar de los temores, las infecciones por COVID-19 no aumentaron cuando las escuelas y las guarderías reabrieron después de que disminuyeron los cierres pandémicos».

Un hipotético en el que no hay manera de analizar la situación en nuestro país, dado que aquí no se reabrieron los centros el año pasado, con el decaimiento del Estado de Alarma, y este curso siguen abiertos por el momento y la evolución de la pandemia es de aumento, no de retroceso. El artículo sí muestra que los países analizados coinciden con el nuestro en que «cuando ocurren brotes, en su mayoría resultan en que solo una pequeña cantidad de personas se enfermen». Seis de media, en el caso español, como habíamos comentado. Citando al epidemiólogo de enfermedades infecciosas del Instituto Robert Koch en Berlín Walter Haas, la publicación de Nature, titulada «Por qué los centros educativos podrían no ser puntos de entrada de la Covid», apunta a que aunque las escuelas y los centros de infantil **a priori** pueden ser entornos ideales para la transmisión del virus, al permanecer durante horas grandes grupos de gente en un ambiente cerrado, sin embargo, las infecciones entre niños son más bajas que entre adultos.

La franja de edad de 5 a 14 años supone casi el 9% del total de contagios

Está por ver, a falta de mayor transparencia informativa y más indicadores homogéneos de las comunidades autónomas, cuántos de los casos confirmados de contagios dentro del ámbito familiar vienen dados por parte de los hijos en edad escolar. A este respecto, una fuente sanitaria anónima señalaba en las páginas del periódico Ideal de Granada que su papel podría ser fundamental.

«La última vez que pasé por la UCI el 65% de los pacientes eran padres y madres que habían sido contagiados por sus hijos, que o eran asintomáticos o no habían hecho las cosas bien», lamentaba. Tampoco existen datos concretos para ver cuánto representa el porcentaje de población contagiada en edad escolar sobre el total, aunque sí podemos hacer una aproximación.

Según los datos de las comunidades autónomas, desde el 10 de mayo, los contagios acumulados en niños de entre dos y cuatro años —Infantil y parte de Primaria— es del 2,1% sobre el total de casi 900.000 casos detectados durante este período, con casi 13.000 niños en esta franja de edad. La siguiente franja que analiza el Informe nº50 de la situación de la Covid-19 en España —fechado el 28 de octubre y elaborado por el Instituto de Salud Carlos III y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica—, la de 5 a 14 años —parte de Infantil, de Primaria y de Secundaria— ya asciende hasta el 8,8%, con más de 78.000 casos confirmados por PCR.

La siguiente franja analizada, la de entre 15 y 29 años de edad, ya integra grupos poblacionales en situaciones de lo más variopinto, aunque abarque a los alumnos del final de la Secundaria, Bachillerato o FP. En todo caso, el porcentaje se eleva hasta el 22%, con casi 200.000 casos detectados, según el informe publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Las administraciones descartan por ahora la vía telemática

Aunque hay gestos en distintos sentidos, según el caso de cada comunidad autónoma, la tónica es la de que cerrar los centros educativos sea el último recurso. En Cataluña, por ejemplo el gobierno autonómico apuesta por reducir la presencialidad a partir de la ESO y se ha barajado la vuelta a la vía telemática, al menos en todo Bachillerato y FP. El mismo martes, la Generalitat anunciaba que se seguirían manteniendo abiertas las escuelas y colegios, pero con la recomendación de impartir clases telemáticas en Bachillerato y formación superior. El ejecutivo catalán también anunció que las universidades deberán mantener sus clases telemáticamente, no así las escuelas oficiales de idiomas y de formación de adultos y las áreas de juego infantil, que estarán también abiertas hasta las ocho de la tarde. En una entrevista en Radio Euskadi, esta semana, el lehendakari, Iñigo Urkullu, aseveraba, por su parte, que su gobierno barajaba «mantener solo la actividad laboral y educativa y el cierre del resto», dentro de una serie de hipotéticos en el que se incluye un confinamiento general como el decretado el pasado mes de marzo. Castilla y León, que a la vuelta del Puente de Todos los Santos ordenaba el cierre de la hostelería, no aportaba tampoco nuevas restricciones al ámbito formativo y escolar dentro del último paquete de medidas destinadas a combatir el virus originado en la ciudad china de Wuhan.

La semana pasada, el pleno del Consejo Escolar del Estado aprobó una enmienda de la Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) al Informe 2020 sobre el Estado del Sistema Educativo para promover la correcta ventilación de las aulas, según anunció el sindicato, que lo considera «una medida de prevención esencial contra el Covid-19». El sindicato reclama al Ministerio y a las autonomías planes de reforma y partidas presupuestarias anuales para adecuar los centros a las normas sobre climatización, eficiencia energética y renovación del aire, «haciendo de los centros ejemplos de lucha contra el cambio climático y edificios saludables para la comunidad educativa», según exponen en un comunicado en el que recuerdan que «las tareas de mantenimiento de los centros corresponden a ayuntamientos y a comunidades autónomas», por lo que «en el marco de la supervisión y el seguimiento que realiza de las medidas preventivas anti Covid-19 en los centros educativos y ante la esperada bajada de las temperaturas, se ha dirigido por escrito al Ministerio, a las consejerías del ramo, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a los ayuntamientos de todo el país para reclamar que se revisen los protocolos de ventilación en las aulas», en los que ahora se estipula que se ventilen de forma natural las mismas, pese a la llegada de los meses más fríos del año.

CCOO Andalucía pide informes de ventilación, purificadores de aire HEPA y medidores de CO₂

Y es que, frente al contagio en los centros, las comunidades autónomas no están instalando de forma generalizada sistemas de ventilación adecuados que imposibiliten la transmisión del virus por el aire y donde se están instalando purificadores y filtros HEPA se trata de iniciativas a nivel de centro. El sindicato CCOO en Andalucía denunciaba hace escasas jornadas sobre este asunto en un comunicado que «el profesorado está aplicando medidas de ventilación sin los conocimientos necesarios» y que «las AMPAS están asumiendo la compra de purificadores de aire con filtros HEPA, que debiesen ser facilitados por la Administración educativa».

«Ante la necesidad de ventilación de las aulas frente a la COVID, especialmente por la confirmación de que el virus se difunde mediante aerosoles, los centros educativos están procediendo a ventilar las aulas sin los informes pertinentes que debiesen tener en cuenta corrientes de aire o flujos de aerosoles según zonas», denunciaba el sindicato. Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía, Diego Molina, «los centros educativos deben contar con un informe técnico que indique las pautas de ventilación que han de seguir en cada una de sus aulas según sus propias características, una cuestión que no puede recaer en el profesorado porque no dispone de la formación adecuada.» Como ejemplo, el portavoz sindical indica que «tener abierta la puerta y ventanas de aula puede facilitar la ventilación o por el contrario trasladar los aerosoles a los pasillos del centro o a aulas próximas». Por ello, el sindicato pide informes de ventilación, purificadores de aire HEPA y medidores de CO₂ en las aulas.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI) pedía recientemente en un comunicado contar con medidores de CO₂ en las aulas, tras analizar en un estudio varias de ellas y ver que la apertura de ventanas no estaba siendo todo lo efectivo que se esperaba. «En todas las aulas analizadas la concentración de CO₂ superó 800 ppm (partículas por millón) antes de los 15 minutos desde el cierre de ventanas. Excepto en dos de las aulas analizadas, 5 minutos de apertura de ventanas en el minuto 20 no consiguieron rebajar el nivel de CO₂ por debajo de 800 ppm, quedando en estas dos muy próximo a dicho valor. Tras el nuevo cierre de ventanas, los niveles de CO₂ superan con facilidad los límites máximos recomendables», detallan en el comunicado. La Comunidad de Madrid ha sido la primera en recoger el guante y la mañana del miércoles anunciaba que adquiriría estos dispositivos en un documento enviado a los centros educativos para que empleasen la ventilación mediante la apertura de ventanas, que sigue siendo el plan de las administraciones de cara a conseguir reducir el contagio de coronavirus vía aerosoles.

En el documento se recomienda la apertura de puertas y ventanas durante un mínimo de cuarto de hora al entrar y al salir de las aulas. El gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso insta a tomar esta medida dado que en la mayoría de espacios donde se desarrolla la actividad docente se puede generar «ventilación natural cruzada».

A este respecto, precisan que «en caso de que la ventilación natural cruzada no sea posible, se puede optar por la ventilación forzada a través de un extractor individual o un equipo impulsor con flujo de aire adecuado, pero debe evitarse, en todo caso, el modo de recirculación de aire interior sin aporte de aire exterior».

ANPE pide que se regule la educación a distancia

Pero, ¿y si todos estos esfuerzos no fueran suficientes y hubiera que retomar a la educación online? El sindicato ANPE exigía hace varias jornadas en un comunicado «la regulación de la educación a distancia, fundamental en la modalidad semipresencial y ante un posible escenario de cierre de aulas o centros», algo que, como vemos, no es descartable, más aun en un momento en el que cada vez más comunidades autónomas están pidiendo cierres casi totales que podrían poner en duda la vía presencial.

«Es necesario establecer y poner en marcha planes y/o medidas de digitalización de los centros docentes, como la dotación de medios informáticos y que se garantice la conectividad. Resulta fundamental el uso de plataformas digitales que posibiliten las clases online y el soporte de contenidos digitales, la formación adecuada tanto a docentes como al alumnado y el establecimiento de unas instrucciones básicas o mínimas que regulen dicha modalidad de enseñanza, junto a las adaptaciones curriculares necesarias y las condiciones de trabajo del profesorado en este escenario», apuntaban desde la Asociación Nacional de Profesionales de Enseñanza, previsores ante un futuro escenario que quizás no esté tan lejos.

Las consecuencias de la educación en pantalla

Pablo Tejeda Rodilla

Hasta hace pocos meses el uso de smartphone o tablet en el ámbito educativo estaba muy limitado y su utilización generaba un gran debate. Incluso se convirtió en noticia el hecho de que los hijos de altos directivos de Google y Apple estudiasen en centros escolares de Silicon Valley donde las pantallas estaban completamente prohibidas. Pero las circunstancias actuales han provocado un aumento exponencial del uso de estas tecnologías que, según algunos colegios y facultades de optometría traerán como consecuencia «un incremento preocupante de casos de miopía entre niños y adolescentes». Aunque reconocen que por el momento no se puede afirmar con rotundidad, dado que todavía no hay estudios al respecto, si que hay una correlación entre el aumento del uso de pantallas y los problemas en la visión.

Según una investigación de la Universidad Miguel Hernández, sobre cómo la pandemia ha afectado a la infancia, antes de marzo de 2020 sólo el 15% de los más pequeños, usaban pantallas (tablets o móviles) más de 90 minutos al día, durante la cuarentena la cifra subió al 73%. Un gran aumento que puede tomarse como algo puntual debido a la imposibilidad de realizar actividades en el exterior, la prohibición de clases presenciales y la necesidad de relacionarse con amigos y familiares mediante pantallas. Pero las autoridades sanitarias siguen recomendando el distanciamiento social y se desconoce durante cuanto tiempo las pantallas serán una ventana fundamental al mundo. De hecho, según un informe desarrollado por GAD3 sobre el impacto de las pantallas en la vida familiar durante el confinamiento, la mitad de los progenitores han comprado algún dispositivo móvil entre marzo y junio de 2020, ya sea para las clases online de sus hijos (49%), para su trabajo (29%) o para ocio digital (20%).

Efectos de las pantallas en la visión

Con la aparición de una nueva tecnología que se extiende al mundo de lo cotidiano surgen debates sobre su uso y las posibles consecuencias, beneficiosas y perjudiciales que llevan aparejadas. La discusión en torno a los efectos perniciosos de las pantallas no es algo nuevo, Enrique Convalia Palacio, Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Óptica y Profesionales (ANEOP), recuerda que «los estudios

científicos siempre están ofreciendo evidencias y certezas sobre el impacto de las nuevas tecnologías y los hábitos novedosos sobre nuestro sistema visual, por ejemplo, ya en 1930, en Estados Unidos, la Fundación Payne realizó los primeros estudios sobre el impacto del cine (un invento que se generalizó en esa época) sobre el sistema visual».

A pesar de que el aumento de casos de miopía en las últimas décadas haya sido considerable, Enrique Convalia Palacio dice que no se puede culpar únicamente al uso de pantallas «hay estudios que demuestran que ningún dispositivo electrónico emite tanta luz como para ser nociva **per se**. De hecho, recibimos más luz azul en un día soleado a mediodía que en varias horas de exposición a pantallas. No hay evidencias de que el uso de que las pantallas produzcan daño retiniano. Es una cuestión verdaderamente controvertida y habrá que esperar a más estudios científicos al respecto; mientras tanto, lo más razonable es tomar las medidas preventivas necesarias.» En cambio, matiza, que «la revista *Ophthalmology*, informa de un estudio bastante completo y fiable realizado en Taiwan que indica que parte del aumento de la miopía en menores tiene que ver con las actividades a corta distancia, pero no solo las directamente relacionadas con el uso de pantallas, sino también aquellas que se realizan por el incremento del tiempo de los menores en actividades de interior; el estudio también constata que el estar más tiempo al aire libre, puede retardar en edades tempranas la aparición de la miopía, incluso otros estudios diferentes indican que ese aumento de la miopía es achacable más a la falta de actividad al aire libre que a la visión próxima».

La miopía no es el único problema al que se enfrentan las personas con una gran exposición a las pantallas, tal como aclara el óptico Enrique Convalia «los fenómenos nuevos traen consigo, en muchas ocasiones, nueva terminología, y así se está hablado del "síndrome visual informático". Estudios como el del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Laboral de los Estados Unidos indican que casi un 90% de las personas, menores o no, expuestos a pantallas luminosas más de 3 horas diarias pueden desarrollar este síndrome. En el caso de menores, la Academia Americana de Pediatría, basándose en estudios previos, determina que es perjudicial una exposición mayor a 2 horas diarias». Además, realiza una descripción de los síntomas más frecuentes relacionados con este síndrome «visión borrosa, fatiga, irritación ocular, sequedad de ojo, mareos, visión doble, cefaleas, sensibilidad a la luz e incluso otros no directamente ópticos, sino ergonómicos, como el dolor de cuello».

Repercusiones físicas del abuso de pantallas

Enrique Convalia Palacio explica que «la musculatura del ojo se relaja con la visión lejana, pero se fuerza más con la visión cercana y prolongada, es decir, el ojo tiene que hacer un esfuerzo mayor y puede incluso llegar a producirse un "espasmo de acomodación" provocado por un bloqueo del sistema muscular».

Fuera del campo óptico, Laura Romero, fisioterapeuta de la Clínica AD, aclara cual es el principal problema físico que trae consigo el abuso de pantallas y el aumento del sedentarismo por parte de la población más joven, dice que «estos niños no desarrollan un buen sentido de la **propiocepción**. Es decir, como no usan su cuerpo, no son capaces de sentir sus músculos de la forma adecuada. No identifican cuando su cuello tiene demasiada extensión o flexión y los ligamentos no les responden bien. Generalmente la posición ante las pantallas es estática lo que limita en gran medida los movimientos a los que se acostumbra el cuerpo. Por ejemplo, si se practica natación los hombros se acostumbran a un rango de movilidad amplio, pero si las funciones vitales durante años solo implican 20 grados de flexión se pierde el resto de movilidad. Si en la infancia no se practica toda la movilidad, ese niño puede convertirse en un adulto con graves problemas de movilidad».

Y al igual que ha pasado con los problemas de visión, en el ámbito de la fisioterapia también han aparecido nuevos tipos de lesiones que parecen estar relacionadas con el abuso de pantallas «hemos observado que los adolescentes cada vez presentan más problemas de ATM (articulación temporomandibular). El caso más típico es el bruxismo, que está directamente relacionado con el estrés y la falta de movimiento. Al no liberar la tensión muscular en forma de ejercicio físico aparecen estos movimientos disfuncionales, como apretar los dientes, que derivan en migrañas, y dolor de cuello y mandíbula. Hace unos años eran casos excepcionales incluso en adultos y ahora es cada vez más frecuente verlo en jóvenes de 15 años.»

Cuestiones psicológicas sobre el abuso de pantallas

Más allá de los posibles efectos físicos el abuso de pantallas puede afectar al desarrollo emocional e intelectual de los más pequeños, de hecho, la Academia Americana de Pediatría en 2011 y la Canadiense en 2014 recomendaron «no exponer a pantallas a los niños menores de 2 años y solo una hora diaria a los que tienen entre los 3 y 5 años».

Carmen Ferrandiz Ferragud, secretaria de Asociación para la Salud Mental Infantil (ASMI) comenta como «los especialistas en Atención Temprana están observando un aumento de retrasos en el desarrollo del lenguaje que podría estar potenciado por el uso de las pantallas en los primeros años de la vida». La propia psicóloga clínica y escolar explica cual es la base del desarrollo emocional e intelectual «se basa en la interacción con los adultos cuidadores. Con la mirada se genera una vinculación muy importante. En esta etapa del desarrollo sensorio-motriz (Piaget), los niños necesitan experimentar e interactuar con los objetos y personas, desarrollar el tacto, el contacto físico, el gusto, el olfato, el ritmo, los sonidos... de forma individualizada, algo que los contenidos que ofrecen las pantallas no permiten».

El abuso de pantallas también tiene efectos psicológicos y emocionales observables en el corto plazo «las pantallas ofrecen una inmediatez que no ayuda a sobrellevar la frustración de la espera, acostumbran a poder

evitar lo que no nos gusta solo pasando el dedo por la pantalla. No potencian la atención sostenida necesaria para el aprendizaje y bloquean la imaginación y la creatividad.» Además, Carmen Ferrandiz Ferragud, lamenta que la situación de crisis sanitaria actual ha agravado ciertos comportamientos de los padres por pura desesperación «el uso de pantallas para calmar o entretener a los niños venía siendo cada vez más frecuente en nuestra sociedad, de una manera que no potenciaba el aprendizaje de la autorregulación emocional y de la interacción, algo que repercutir posteriormente dificultando el comportamiento social y limitando esfuerzo atencional, repercusiones que podemos observar en las escuelas y seguramente veamos .

Las pantallas no son el problema

Todos los profesionales consultados coinciden en que las pantallas no suponen un grave perjuicio para los menores, sino que el problema está en los hábitos que se construyen en torno a ellas. La propia OMS ha publicado recientemente un artículo en el que explica que, para crecer sanos, los niños tienen que pasar menos tiempo sentados y más tiempo jugando de forma activa. Carmen Ferrandiz Ferragud quiere dejar claro que las pantallas «son una buena herramienta en la educación, sobre todo para los jóvenes, pero para los más pequeños no pueden sustituir el aprendizaje a través de un adulto en presencia. En la actualidad es necesario que conozcan estas herramientas y aprendan gradualmente a utilizarlas, sin olvidar el control parental, y siempre teniendo en cuenta el BUEN y el MAL uso que pueden tener.»

Respecto a estos hábitos desde la ANEOP enumeran una serie de consejos para hacer un buen uso de las pantallas:

1. Tratar de que el tiempo de exposición a las pantallas en menores no supere la hora diaria
2. Promover que el menor esté más tiempo al aire libre: parques, deporte, excursiones...
3. Procurar que el menor no use pantallas digitales antes de irse a la cama para evitar la alteración de ritmos circadianos y provocar una menor calidad del sueño
4. Usar siempre las pantallas, e incluso ver la TV con luz ambiente, nunca a oscuras
5. También hay que tener en cuenta que no es aconsejable en absoluto el uso de pantallas en menores de 18 meses por la mayor fragilidad del cristalino

De todas formas, a pesar de los problemas que puedan traer las pantallas en la infancia, la fisioterapeuta Laura Romero recuerda que «la perpetuación de malos hábitos puede tener graves consecuencias en el largo plazo, pero en el corto plazo es mucho más fácil revertir los problemas musculares en menores en edad de desarrollo que en adultos. Lo más importante es la actividad física. Nunca se debe estar más de 2 horas en una misma posición.»